

arbitrio

**AVANCEMOS: PRÁCTICAS PARA
OPTIMIZAR EL ARBITRAJE NACIONAL
E INTERNACIONAL EN COLOMBIA**

REVISTA
DE DERECHO ARBITRAL DEL
**CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE BOGOTÁ**

**Centro de
Arbitraje y
Conciliación**

Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

CC Cámara
de Comercio
de Bogotá

#SOYEMPRESARIO

Arbitrio. Revista de derecho arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá

Presidente Ejecutivo
Nicolás Uribe Rueda

Director de la revista
Gustavo Andrés Piedrahita Forero

Comité Editorial
Gustavo Piedrahita, Director CAC
María Angélica Munar, jefe de Arbitraje Nacional
Santiago Díaz Cediell, Coordinador Arbitraje Internacional
Ángela Cristina Villate Moreno, Jefe Gestión del Conocimiento CAC

Editores
Ángela Cristina Villate Moreno
Carlos Eduardo Güisa Díaz
Deina Patricia Montero Parra
Paola Andrea Gutiérrez
David Leonardo Rojas Silva

Diseño de portada: Cámara de Comercio de Bogotá – Gerencia de Asuntos Corporativos

Edición: 07

Mes: Octubre

Año: 2021

Ciudad: Bogotá D.C.

Periodicidad: Semestral

Editor: Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación

Versión: Digital

Imágenes: Tomadas de Unsplash.com, Pixabay.com y Pexels.com

Tamaño: Estándar en proporción digital

Formato: .PDF

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

ISSN: 2665-2927 “En línea”

Para sus colaboraciones dirigirse a: Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Calle 76 No. 11-52 Bogotá D.C., Colombia

Tel: 5941000 ext. 2340

Correo electrónico: angela.villate@ccb.org.co

arbitrio

Número 7

20/21

EDITORIAL



Gustavo Andrés Piedrahíta

Director del Centro de Arbitraje y Conciliación - CCB

Nuestro director, Gustavo Andrés Piedrahíta Forero, presenta el editorial en este número 7 de la revista Arbitrio y nos cuenta cuáles son los temas de impacto e interés que compartiremos con la comunidad arbitral en esta edición.

**Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá**



Artículos

EL SORTEO PÚBLICO DE ÁRBITROS

Gustavo Andrés Piedrahita

Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Abogado, egresado de la Universidad de la Sabana, especialista en derecho comercial, financiero y ambiental. Magister en Derecho Mercantil. Docente de pregrado y posgrado en las cátedras de Derecho Comercial, Sociedades, Contratación Internacional y Derecho Privado para la Universidad de la Sabana, Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y la Universidad de Caldas. Antiguo miembro del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, y actual miembro del Comité Colombiano de Arbitraje, las Comisiones de Arbitraje - ADR y Derecho y Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) y el Colegio de Abogados Commercialistas.



LA EXTENSIÓN DEL PACTO ARBITRAL A TERCEROS NO SIGNATARIOS EN ARBITRAJE INTERNACIONAL

David Ricardo Araque Quijano

Arbitraje Internacional

Abogado de la Universidad de los Andes e ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, LLM en resolución de disputas de Queen Mary, University of London y especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Árbitro de la lista A del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. Socio de la firma Gómez Pinzón Abogados S.A.S. y director del grupo de litigio y resolución de conflictos.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA FUNCIÓN DEL ÁRBITRO INTERNACIONAL ¿DECISIONES INTELIGENTES O DECISIONES ARTIFICIALES? BREVES REFLEXIONES

Sofía Klot

Arbitraje Internacional

Abogada en arbitrajes de tratados comerciales y de inversión de alto riesgo bajo los auspicios de la CCI, CIADI, ICDR, LCIA y DIAC. Antes de unirse a Freshfields, ejerció el arbitraje internacional en dos firmas de abogados internacionales líderes en los EE. UU. Trabajó como abogada corporativa y de fusiones y adquisiciones en el bufete de abogados más grande de Uruguay. Fue vicepresidente del Comité de Arbitraje Internacional de la Asociación de Abogados del estado de Nueva York y es cofundadora y copresidenta del Subcomité de Jóvenes Practicantes de ERA Pledge.



Nicolás Córdoba

Arbitraje Internacional

Abogado. Trabajó como asesor de asuntos internacionales y como asociado en un bufete de abogados GAR100 en Bogotá antes de unirse a Freshfields. Ha actuado en arbitrajes comerciales internacionales, con enfoque en disputas mineras y de recursos naturales bajo las reglas del CIADI y la CCI. Fue pasante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Washington y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo y profesor asistente de Derecho Comercial en la Universidad del Rosario en Bogotá.

Artículos



LAS BUENAS DECISIONES Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ESCRITURA: ESTRUCTURA DEL LAUDO ARBITRAL

Angela Cristina Villate

Jefe de Gestión del Conocimiento CAC-CCB. Formación interdisciplinar en filosofía, lingüística, analítica de datos, pensamiento complejo y derecho. Experiencia en análisis textual con procesamiento de lenguaje natural, estadística y visualización de datos.



RETOS PARA IMPLEMENTAR EL ARBITRAJE SOCIAL: EL ROL DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS

Angela María Yepes Sánchez

Abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Sistema penal y problemas sociales de la Universidad de Barcelona. Directora del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes. Asesora y abogada litigante en derecho administrativo, civil y penal. Docente en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

ARBITRAJE Y EDUCACIÓN LEGAL: UNA INTEGRACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Carolina Olarte-Bácares

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magister en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y doctora en Derecho de la Universidad de París 1 Panteón Sorbona. Decana y profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) y miembro del consejo directivo de la Global Business and Human Rights Scholars Association.

Antonio Guzmán Mutis

Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Asistente de investigación del proyecto Desafíos de la relación entre inversión extranjera y los derechos humanos en Colombia. Estudiante del Centro de Estudios Legales Transnacionales de la Universidad de Georgetown y Pasante del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.



Entrevista

BLOCKCHAIN AND INTERNATIONAL ARBITRATION

Sophie Nappert
Arbitraje Internacional

She is dual-qualified as an Avocat of the Bar of Quebec, Canada and as a Solicitor of the Supreme Court of England and Wales. Sophie is trained and has practised in both civil law and common law jurisdictions. She holds degrees in both common law and civil law from McGill University and a Masters' Degree in Law from King's College London. She was Head of International Arbitration at a global law firm and is an award-winning lecturer and the first female recipient of the Global Arbitration Review Award for Best Speech.

ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Wilson Ruíz Orejuela

Abogado de la Universidad Libre de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, España. Se desempeñó como magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Fue procurador delegado ante el Consejo de Estado, conjuéz del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conjuéz del Consejo Superior de la Judicatura (Sala Jurisdiccional Disciplinaria) y árbitro de las cámaras de comercio de Cali y Bogotá. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Artículos

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN PROFERIDA EN EL CASO ECO ORO MINERAL CORP. VS. COLOMBIA (ICSID CASE NO. ARB/16/41)

Luis Felipe Estrada Escobar

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. LLM en arbitraje internacional en Queen Mary University of London. Se desempeña como abogado asociado en la firma Ariza & Marín.

Red Juvenil de Arbitraje RJA

GENERALIDADES DE LAS DECISIONES EN OBRA PRIVADA: ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO EN LA RED JUVENIL DE ARBITRAJE: RETOS Y COMPROMISOS



Jurisprudencia y legislación arbitral

- NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y LEGISLATIVAS
- ACTUALIDAD EN MATERIA DE LAUDOS ARBITRALES



Novedades CAC

- NOVEDADES ARBITRAJE INTERNACIONAL
- ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES

Ventanilla del lector



PROBLEMAS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN EN EL ARBITRAJE

Diego Castillo

Estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con enfoque en derecho privado.



EL SORTEO PÚBLICO DE ÁRBITROS

Gustavo Andrés Piedrahita

Para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la transparencia en todos sus procedimientos resulta fundamental. Por esta razón, con el lineamiento constante de la Presidencia Ejecutiva de la entidad y de la mano de la Corte Arbitral se han adoptado medidas que siguen fortaleciendo la seguridad en el sorteo público de árbitros.

Es preciso señalar, inicialmente, que este procedimiento cuenta con el acompañamiento constante de la contraloría interna de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como de una empresa auditora externa, quien es contratada para verificar sorteo a sorteo las condiciones de seguridad (integridad, confidencialidad, aleatoriedad y disponibilidad) de la plataforma tecnológica que soporta el proceso, además de comprobar que se utilizan las reglas del sorteo público de designación de árbitros actualizadas e incluidas en el software SIMASC¹.

¿Cuáles son las etapas del sorteo?

El día previo al sorteo, el auditor externo contratado verifica:

- La publicación de los sorteos por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación
- La verificación del acceso al SIMASC
- La verificación de las características de los sorteos internacionales.
- La verificación y validación de los sorteos dentro del aplicativo SIMASC
- La descarga de los reportes del aplicativo SIMASC para los sorteos nacionales
- La validación que los árbitros publicados se encuentren disponibles para ser sorteados.

El día del sorteo, el auditor externo procede a verificar:

- Las condiciones logísticas del sorteo (asistencia de los colaboradores que deben participar)
- La verificación que los casos reportados el día anterior coincidan con los efectivamente sorteados
- La verificación detallada de cada sorteo respecto de la cuantía, materia, y cantidad de árbitros.

Como resultado de estas actividades de verificación, el auditor externo entrega periódicamente un informe detallado del comportamiento de cada uno de los sorteos realizados, indicando los hallazgos -en caso de existir- y una conclusión sobre los aspectos más relevantes de los procedimientos auditados.

Todos estos informes se encuentran debidamente publicados y actualizados en nuestra página web, y pueden ser consultados en el siguiente link: <https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/Arbitraje-Nacional/Como-ser-arbitro-del-CAC-y-Sorteo-de-arbitros/Sorteo-de-arbitros>

Aunado a lo anterior, y con la aprobación de la Corte Arbitral, actualmente se encuentra en implementación

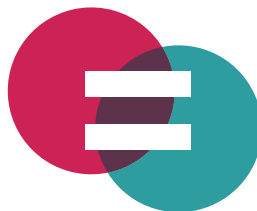
una nueva modificación al manual del sorteo público de árbitros en el que se extienden a los suplentes las condiciones de “no sorteabilidad.”

Además, con el ánimo de dar a conocer ampliamente a toda nuestra comunidad arbitral las características y elementos propios del sorteo, hemos incluido en nuestra página web un video explicativo sobre su funcionamiento y estamos trabajando en distintas piezas informativas que permitan una mayor difusión sobre la manera en la que se desarrolla. A continuación, el enlace para ver el video: <https://youtu.be/wxYZp-rAGFc>

Finalmente, se ha adoptado como buena práctica remitir el día previo al sorteo, el correo electrónico en el que, además de indicar los casos que se sortearán y los árbitros disponibles, el enlace de la sala virtual para que quienes así lo quieran puedan acompañar el desarrollo de la sesión.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y su Corte Arbitral seguirán trabajando constantemente en el análisis y estudio de medidas que fortalezcan la seguridad y la transparencia del sorteo público de árbitros, las cuales serán comunicadas de manera oportuna a todos nuestros operadores.

Es preciso señalar, inicialmente, que este procedimiento cuenta con el acompañamiento constante de la contraloría interna de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como de una empresa auditora externa, quien es contratada para verificar sorteo a sorteo las condiciones de seguridad (integridad, confidencialidad, aleatoriedad y disponibilidad) de la plataforma tecnológica que soporta el proceso, además de comprobar que se utilizan las reglas del sorteo público de designación de árbitros actualizadas e incluidas en el software SIMASC.



¹ El -SIMASC- “Sistema Integrado de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos” es la plataforma tecnológica de la Cámara de Comercio de Bogotá que soporta los procedimientos del Centro de Arbitraje y Conciliación.

SORTEO CAC

DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS, PERITOS Y AMIGABLES COMPONEDORES

Conozca **algunos atributos** del proceso



- 1 Es confiable porque es auditado por la Contraloría interna de la CCB y la firma de auditoría externa Grant Thornton.
- 2 Es transparente porque las reglas de su funcionamiento están en el manual del sorteo aprobado por la Corte Arbitral del Centro.
- 3 El sorteo garantiza la distribución equitativa de casos y con ello la rotación de la lista de operadores.
- 4 El sorteo es un proceso serio y confiable que se hace mediante un software que garantiza la transparencia en la designación.
- 5 El manual del sorteo dispone medidas para propender que los árbitros acepten los casos en termino lo que permite optimizar los tiempos del trámite [si no contestan en el termino legal quedan no sorteables por 6 meses].
- 6 El manual del sorteo permite que las partes constituyan listas de árbitros con las características que consideren mejores para su trámite y soliciten al Centro que sobre dichos candidatos realice el sorteo.
- 7 Es transparente porque un día antes del sorteo puede consultarse los casos programados y la lista de árbitros sorteables para cada caso. [salvo en arbitraje internacional].

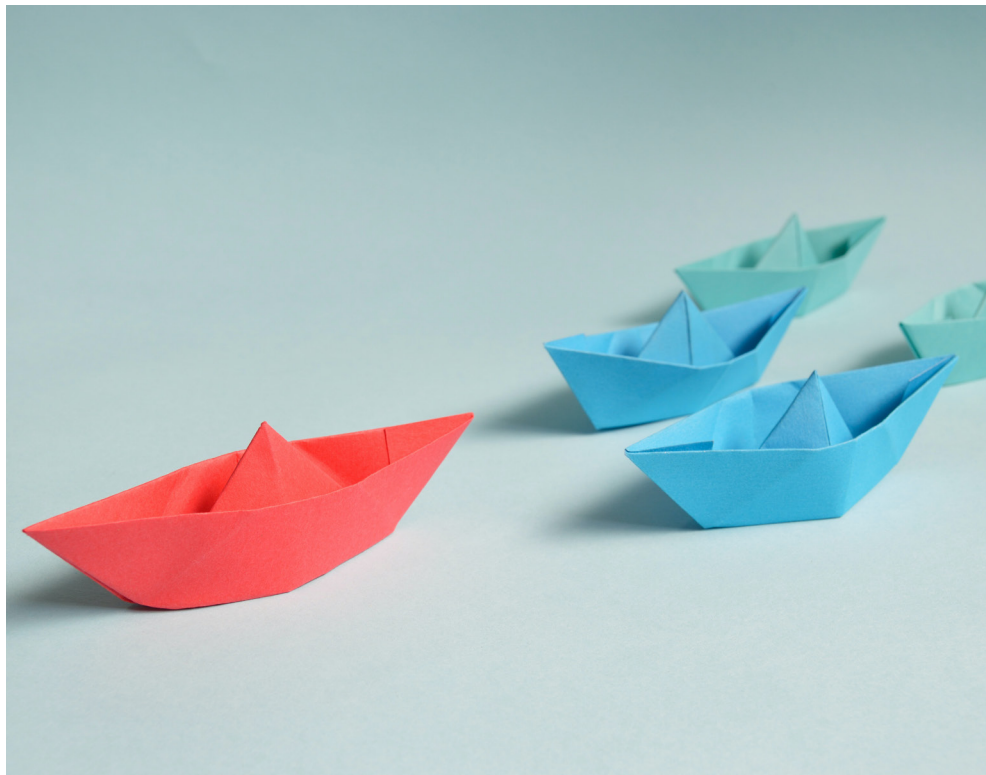
Para mayor información sobre el proceso de designación CAC visite **AQUÍ** el video explicativo

**Centro de Arbitraje
y Conciliación**

Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

CC Cámara
de Comercio
de Bogotá

#SOYEMPRESARIO



LA EXTENSIÓN DEL PACTO ARBITRAL A TERCEROS NO SIGNATARIOS EN ARBITRAJE INTERNACIONAL

David Ricardo Araque Quijano

Arbitraje Internacional

La obligación de terceros no signatarios a un pacto arbitral de acudir al arbitraje ha sido observada por algunos autores como el abandono, al menos parcial, de la teoría pura del consentimiento como el elemento inicial y final de la derogatoria de la jurisdicción de las cortes estatales y de la habilitación de los particulares para impartir justicia, para discutir que, a través de las diversas teorías de extensión del pacto arbitral, las cortes locales y tribunales arbitrales, han aplicado principios de derecho contractual, derecho corporativo, entre otras, para graduar el concepto de consentimiento en la determinación de si un tercero es o no obligado por la cláusula arbitral (Cfr. Karim, 2010).

A diferencia del arbitraje internacional, las reglas de procedimiento contenidas en el Código General del Proceso y, en consecuencia las reglas de arbitraje nacional colombianas por remisión expresan de éstas a aquél (Arts. 36 y 37, Ley 1563 de 2012) son claras en establecer cuándo y bajo qué circunstancias debe existir intervención litisconsorcial, o del “llamado en garantía”, el “denunciado en el pleito”, el “interviniente excluyente”. Este tipo de regulación detallada, en lo que respecta a la regulación del arbitraje internacional bajo la ley de arbitraje colombiana, está ausente.

Las estadísticas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional indican que, durante el año 2020, el 31% de los casos registrados involucraron disputas multi parte, de las cuales el 51% corresponden a varios demandados y el 31% a varios demandantes (ICC, 2020). Estas estadísticas no son del todo ajenas al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC – CCB).

El crecimiento en este tipo de controversias complejas demuestra que cada vez cobra más importancia evitar la fragmentación de la jurisdicción en beneficio de una justicia pronta, efectiva y definitiva, que evite decisiones contradictorias relacionadas con un mismo proyecto complejo, operación comercial y/o transacción. De allí la importancia que han cobrado las diversas teorías sobre la extensión del pacto arbitral a no signatarios.

Este escrito se ocupa de ilustrar, sin la pretensión de ser un estudio exhaustivo, las principales teorías que la doctrina y los tribunales internacionales han aplicado comúnmente para obligar a terceros no signatarios del pacto arbitral a acudir al arbitraje.

El consentimiento y su papel en la vinculación de terceros al arbitraje

La regla general que fundamenta el arbitraje como mecanismo de solución de controversias es la voluntad de las partes que habrán de someterse a él; consentimiento que ha sido entendido como el principio rector, para habilitar a particulares para impartir justicia y, consecuentemente, para derogar la jurisdicción y competencia de los tribunales locales.

Lo anterior resulta evidente en diversos ordenamientos jurídicos y en instrumentos internacionales (Código Civil Colombiano, artículo 1494; Código Civil Francés, artículo 1101; Código Civil de Estado de California, artículo 1549), los cuales reconocen que los contratos vinculan como resultado de una manifestación de voluntad, es decir, del mismo modo en que vinculan los pactos arbitrales. En dichos Estados, la manifestación de voluntad para obligarse mediante un contrato puede ser tácita o expresa, regla que, como se verá al menos en cuanto al consentimiento implícito de no signatarios al pacto arbitral, aplica igualmente (Código Civil Colombiano, artículo 1506. Ver

también: Código Civil Francés, artículo 1113 y Código Civil del Estado de California, artículo 1581).

Por otro lado, existen Instrumentos de Derecho Internacional que también reconocen que los contratos existen desde que dos o más partes llegan a un acuerdo voluntario (Cfr. UNIDROIT & Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, artículo 18). Reconocimiento que debe hacerse extensible al pacto arbitral (Corte Constitucional, T 511-2011) la cual debe cumplir con todos los requisitos de forma y fondo para ser un negocio válido, eficaz y ejecutable (Gaillard, 1999, p.p. 253 -307).

Algunos autores han reconocido el consentimiento como la base sobre la cual se fundamentan las teorías de la extensión de la cláusula arbitral. Al efecto, Gary Born (2009, P. 1205) indicó que:

En la mayoría de los casos, los tribunales y autores coinciden en que el consentimiento es, por lo general, el fundamento esencial para afirmar si una entidad determinada es parte a una cláusula arbitral o no. Independientemente de la forma legal utilizada, en definitiva, la cuestión que se plantea habitualmente es si las partes considerando sus acciones objetivamente y basándose en la buena fe comercial, entendieron que una entidad determinada era parte a la cláusula arbitral.

Por su parte Bernard Hanotiau (2006, 51) reconoce que el consentimiento es el “pilar fundamental del arbitraje internacional”, de tal forma que éste condicionaría, al menos teóricamente, el alcance de la extensión de la cláusula arbitral a terceros.

No obstante lo anterior, la práctica arbitral internacional demuestra, en algunas ocasiones, y a partir de la aplicación de algunas teorías, v.gr. el grupo de compañías y/o el consentimiento implícito, la extensión del pacto arbitral a no signatarios ha conllevado a que el consentimiento haya sido sustituido parcialmente por otro tipo de consideraciones y/o realidades en la ejecución de los negocios, generando que cobre validez la afirmación de Youseff según la cual “por primera vez en tiempos modernos, el consentimiento no es el único criterio autorizado para gobernar la validez de la derogatoria a la jurisdicción en favor de la justicia privada” y, por ende, “los tribunales y las cortes se han aventurado para acomodar relaciones comerciales complejas más allá de la frontera final y lógica del sistema arbitral: el consentimiento” (Youseff, 2010, 100).

A continuación, me ocupo de examinar cuatro de las principales teorías de vinculación de terceros al arbitraje: la teoría de la representación (*agency, apparent authority*), el tercero beneficiario (*third party beneficiary*), el consentimiento implícito (*implied consent*) y el grupo de compañías (*the doctrine of Group of Companies*).

El crecimiento en este tipo de controversias complejas demuestra que cada vez cobra más importancia evitar la fragmentación de la jurisdicción en beneficio de una justicia pronta, efectiva y definitiva, que evite decisiones contradictorias relacionadas con un mismo proyecto complejo, operación comercial y/o transacción. De allí la importancia que han cobrado las diversas teorías sobre la extensión del pacto arbitral a no signatarios.

Teoría de la representación

El principio general que subyace el desarrollo de la representación como mecanismo para extender la cláusula arbitral a terceros no signatarios, tiene su fundamento en que la parte signataria del pacto ejecutó el contrato que lo contiene en nombre y por cuenta de un tercero, de tal forma que se presupone que si tal representante tiene la autorización de concluir el contrato en nombre de tal tercero, su representado, tiene la autorización también para celebrar el pacto arbitral allí incluido en su nombre.

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, en el caso *InterGen c. Grina* consideró, con fundamento el caso *Phoenix Can Oil Co. c. Texaco* que

Es un principio fundamental y ampliamente aceptado que un agente puede comprometer a su principal (no firmante) a un acuerdo de arbitraje... Pero los requisitos para tal responsabilidad indirecta son exigentes: [no] sólo debe existir un arreglo [de agencia] de modo que una [parte] actúa en nombre de la otra y dentro de los principios habituales de la agencia, pero el arreglo debe ser relevante para la [obligación legal en disputa]

Lo anterior implica, según las consideraciones de la corte de apelaciones, que quien pretenda extender los efectos de la cláusula arbitral a terceros no signatarios con fundamento en la teoría de la representación, debe demostrar la existencia de tal representación y que, en virtud de tal representación el agente (o representante) actuó en la ejecución del negocio jurídico que contiene el pacto arbitral. Sin embargo, si no es posible demostrar la existencia latente de tal representación, v.g. un vínculo contractual entre el representante y representado, deberá entonces probar, bajo la teoría de la representación aparente ("*apparent or ostensible authority*"), a la sazón desarrollada en Colombia en el artículo 842 del Código de Comercio¹, que el tercero no signatario de la cláusula arbitral (i) dio motivo a considerar que quien suscribió el contrato era su representante; extendiéndose para tal efecto, los efectos del negocio jurídico al pacto arbitral;

y (ii) que la convicción sobre la representación aparente emerge de manera razonable de las circunstancias del caso y, en últimas, que la misma está fundamentada en el principio de buena fe (Zuberbühler, 2008, p.p. 18 – 34).

Tercero beneficiario

Esta teoría parte de una premisa básica: bajo los negocios jurídicos las partes contractuales pueden crear beneficios a terceros no vinculados al contrato. Quiere decir lo anterior que dicho tercero tendría el derecho de ejercer las cláusulas contractuales que contienen beneficios para sí, en contra de quien fuere obligado para su cumplimiento.

Dicha introducción necesariamente hace un llamado a la institución de tradición civilista denominada la estipulación para otro que, aunque no está definida en nuestro código civil, sí encuentra algunas bases en el artículo 1506 de tal codificación². Con fundamento en tal regulación, se presenta, en palabra de Ospina Fernández, "*cuando las personas que celebran un contrato convienen en que las obligaciones a cargo de alguna o algunas de ellas deberán ser cumplidas en favor de un tercero que no ha participado en dicho contrato ni ha sido representado por ninguno de quienes lo celebran*" (2009, p.p 363 a 379). Dicha figura es considerada, en sí misma, como un compromiso unilateral del promitente en favor del beneficiario que genera un vínculo obligatorio entre estos; no así entre el estipulante y el beneficiario.

Desde luego que en la estipulación para otro existen tres interesados: el promitente, que asume la obligación; el estipulante, que señala al tercero de quien no es representante y que habrá de aprovecharse con el cumplimiento de ella, o sea, el beneficiario de la estipulación. Bajo esta figura, sólo el tercero beneficiario podrá demandar lo estipulado (Cfr. Ospina, 2009, : 363).

Con la anterior explicación, es necesario preguntarse ¿el ejercicio del beneficio otorgado en el contrato da la posibilidad al tercero beneficiario de activar la cláusula arbitral allí pactada? Y por el otro, ¿puede el promitente demandar al tercero beneficiario bajo la cláusula arbitral respecto del beneficio concedido en el contrato? Desde luego que, como punto común a tales preguntas, debe considerarse que el tercero beneficiario no consintió, al menos expresamente, en quedar vinculado por la cláusula arbitral.

En cuanto a la primera pregunta, entre otros, en el caso de *Nisshin Shipping Co Ltd v. Cleaves & Co Ltd.*, las cortes inglesas sostuvieron que al habérsele conferido a un tercero un beneficio bajo un contrato cuyas controversias están sujetas a la decisión de un tribunal arbitral, dicho

¹ "Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa"

² "Cualquiera puede estipular en favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no inter venga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola aceptación de las partes que concurrieron a él. Constituye aceptación tácita los actos que sólo hubiera podido ejecutarse en virtud del contrato"

tercero debe ser considerado como parte vinculada a la cláusula arbitral respecto de las disputas que puedan surgir con el promitente, siempre que guarden relación con los derechos que le fueron conferidos, “independientemente de si [la cláusula arbitral] no prevé, en su propia redacción, la participación en el arbitraje de personas distintas a las del contrato” (Cfr. Brekoulakis, 2010).

Todo lo anterior presupone que el tercero que busca la extensión del pacto arbitral contenido en un contrato en el cual se le han conferido derechos pruebe que las partes del contrato (promitente y estipulante) efectivamente le concedieron un beneficio bajo dicho negocio jurídico; y en tal caso, puede automáticamente activar la cláusula arbitral allí contenida³.

En relación con la segunda pregunta, la vinculación del tercero beneficiario a la cláusula arbitral dependerá de si el tercero beneficiario ejerció el derecho que le fue otorgado en el contrato para que el promitente pueda demandarlo bajo la cláusula arbitral (Nota 13).

Para finalizar esta sección resulta ilustrativo un ejemplo traído por Brekoulakis (2010, 2.165): supóngase que el tercero beneficiario demanda al promitente ante las cortes locales buscando el cumplimiento del beneficio otorgado a aquél bajo el contrato. En este caso, las cortes locales deberían remitir a las partes al arbitraje, pues se entiende que en tal caso, el ejercicio del derecho de acción es suficiente para acreditar la aceptación de la estipulación en favor suyo. Pero sí es el promitente el que demanda al beneficiario, por ejemplo, buscando la nulidad de la estipulación o que el tercero no tiene derecho a disfrutar de tal beneficio, éste podrá cuestionar la jurisdicción del tribunal arbitral, no sólo por la naturaleza de la disputa, sino por la falta de ejercicio/aceptación del beneficio otorgado. Desde luego que el análisis tendrá que tomar en consideración la ley aplicable a la cláusula arbitral (Born, 2009, 1180), a la ley aplicable al contrato⁴ o a principios sustantivos transnacionales (Brekoulakis, 2010, 2178).

Extensión fundamentada en la buena fe

Otra de las formas de extender la cláusula arbitral está fundamentada en el principio non venire contra factum proprium no valet, según el cual a nadie se le permite pedir para sí beneficios -o relevarse de cumplir una carga- en detrimento de la otra parte cuando esta petición se fundamenta fácticamente en una contradicción con sus propios hechos jurídicamente relevantes (anteriores, concomitantes y posteriores), ni desdecirse de su propia participación en la conclusión del negocio jurídico o su ejecución para, en caso de la cláusula arbitral, objetar la competencia del tribunal en caso de controversia nacida de dicho negocio.

A tal objeción se le opone la defensa de estoppel o excepción de confianza legítima, como principio general del derecho contractual aplicable a estos conflictos tanto en los ordenamientos de la tradición civilista como en los de ascendencia anglosajona y en el derecho internacional en general (Diez Picaso, 1963, p.p. 61 -63).

Con fundamento en tal principio, tanto tribunales como doctrinantes han considerado que la extensión de los efectos del pacto arbitral puede emerger de actos ejecutados por los no signatarios para negociar un contrato en el que consta la cláusula arbitral, de tal forma que su particular actuación, podría ser consistente con su intención de obligarse bajo el pacto arbitral.

Así, terceros no signatarios del pacto podrían quedar vinculados por el mismo siempre que, de las circunstancias particulares del caso, quede probado que la conducta y/o las declaraciones de los no signatarios, pero participes en el iter contractus, no fueron incidentales, sino que constituyen fundamento suficiente para presumir su consentimiento para acudir a arbitraje. En otras palabras, será necesario acudir a cualquier evidencia de su activa participación en los trabajos preparatorios del Contrato y su inescindible vinculación al mismo (Born, 2014, p.p. 1426 - 1427).

Algunos Tribunales Arbitrales, al resolver sobre solicitudes de inclusión de terceros al arbitraje bajo las Reglas de la CCI, han accedido a la vinculación con motivo de la participación del tercero en la negociación, ejecución o incumplimiento del contrato que contiene el pacto (CCI - casos 9771 y 6519).

No obstante lo anterior, la práctica arbitral internacional demuestra, en algunas ocasiones, y a partir de la aplicación de algunas teorías, v.gr. el grupo de compañías y/o el consentimiento implícito, la extensión del pacto arbitral a no signatarios ha conllevado a que el consentimiento haya sido sustituido parcialmente por otro tipo de consideraciones y/o realidades en la ejecución de los negocios, generando que cobre validez la afirmación de Youseff según la cual “por primera vez en tiempos modernos, el consentimiento no es el único criterio autorizado para gobernar la validez de la derogatoria a la jurisdicción en favor de la justicia privada” y, por ende, “los tribunales y las cortes se han aventurado para acomodar relaciones comerciales complejas más allá de la frontera final y lógica del sistema arbitral: el consentimiento” (Youseff, 2010, 100).

Tribunales Arbitrales, operando bajo las Reglas UNCITRAL, también han vinculado terceros por haber desarrollado labores de promoción en busca de facilitar la aceptación de la oferta para contratar (Caso E Holding c. Z Ltd., Mr.

³ Sea-Land Service, Inc c The Government of the Islamic Republic of Iran, Ports and Shipping Organization, IUSCT, Case No.33, recuperado de <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-sea-land-service-inc-v-the-government-of-the-islamic-republic-of-iran-ports-and-shipping-organization-award-award-no-135-33-1-friday-22nd-june-1984>.

⁴ Am Patriot Ins Agency Inc, v Mut Risk Mgt, Ltd 364 F 3d 884, 890 (7th Cir 2004)

G y Mr). Además, al referirse a la vinculación de terceros a pactos arbitrales, el Tribunal Federal Suizo ha afirmado que se requiere una relación estrecha del tercero durante los trabajos preparatorios de un contrato (Tribunal Federal Suizo, Sentencia 2008, párr. 8.6).

Desde luego que la anterior tesis no ha sido pacífica. Al efecto, algunos Tribunales Arbitrales han desestimado solicitudes de vinculación por considerar que se basan en una implicación incidental del tercero en la negociación, ejecución o incumplimiento de un Contrato que contiene un pacto arbitral (CCI – casos 5721, 1019 y 1024) y por no encontrar probada una participación determinante del tercero en la relación contractual⁵.

Extensión fundamentada en el abuso del derecho

De forma similar a la anterior teoría, bajo el principio de evitar el abuso del derecho es posible extender los efectos de la cláusula arbitral a no signatarios siempre que la parte no signataria, controlante de los negocios del signatario, abusa de tal control, de tal forma que, como fue considerado en el caso *Alcatel c. Amkor Technology* (Corte de Casación Francesa, 2007), se abre paso a tratar a una y otra como una única entidad, o sólo tomar como vinculada a la no signataria controlante.

Bajo esta perspectiva, que implica de forma contraevidente, una limitación a la responsabilidad limitada y la independencia e identidad legal individual entre el controlante de los negocios y el controlado respecto de los negocios que dan cuenta del pacto arbitral, siendo superadas tales instituciones jurídicas por consideraciones de buena fe y justicia (Hanotiau, 2011, 327)

Doctrina del grupo de compañías

La internacionalmente llamada *doctrine of Group of Companies* empleada por diversos tribunales para extender la cláusula arbitral a no signatarios, considera que la complejidad de los negocios requiere a los grupos multinacionales adquirir la máxima flexibilidad operativa a través de estructuras corporativas complejas, de tal forma que toma como objeto de análisis que las compañías de un mismo grupo pueden tener vínculos institucionales o de dependencia económica entre ellas respecto de una única transacción comercial.

Tal flexibilidad no puede ser cortapisa para que, tomadas en consideración las circunstancias particulares del caso, los efectos de la cláusula arbitral suscrita por uno de los eslabones del grupo de compañías se extiendan a otra que forma parte del mismo grupo, siempre que respecto de esta última exista evidencia de, entre otras, participación activa en la negociación, ejecución y terminación del contrato (*Dow Chemical v. Isover-Saint-Gobain*, 1982).

Con fundamento en ello, la doctrina y los Tribunales Arbitrales han debatido en torno a la vinculación de terceros que son parte del Grupo de Sociedades de una parte del arbitraje no sin debatir si la teoría del grupo de sociedades tiene una “vida” propia e independiente de otras teorías que buscan la extensión de la cláusula arbitral y, por consiguiente, es necesario su uso (Hanotiau, 2011, 543) (Derains, 143) o si debe considerarse como residual a otras, como la de la representación, agencia o el consentimiento implícito (Born, 2010, 1176).

La vinculación de un tercero a través de la doctrina del grupo de compañías, si bien no es pacífica (Brekoulakis, 2010, 5.11 – 5.14), requeriría la prueba de dos circunstancias específicas: (i) la existencia de un Grupo de Sociedades que tengan una “unidad económica con una dirección integrada” (Marguerat, 2013) o, en otras palabras, que “sus respectivas situaciones y actividades hacen nacer la presunción de que conocían la existencia y el alcance de la cláusula arbitral”⁶ (ii) una amplia participación de la compañía no signataria en el contrato que contiene el pacto arbitral (Kim, K. & Mitchenson, J, 2013).

En adición a los anteriores dos requisitos, algunos Tribunales Arbitrales solicitan además prueba de un tercer elemento: (iii) la Común intención de las partes para vincular al no signatario (Cfr. Sanders, 1984).

Así las cosas, para vincular a terceros no signatarios del pacto arbitral, pero que hacen parte de un grupo societario, es necesario demostrar que tales compañías no signatarias del pacto forman parte de un Grupo de Sociedades que comparte una misma realidad económica y cuenta con objetivos y metas comunes, bajo la dirección de un poder decisivo central. De probarse esta circunstancia, además, deberá demostrarse que cada una de estas sociedades parte del grupo jugó rol activo en la relación contractual contentiva del pacto arbitral.

Conclusión

Las diversas teorías – someramente – revisadas en este artículo parten de concepciones de derecho contractual, corporativo y/o principios generales del derecho para, en ausencia de consentimiento explícito de terceros no signatarios de la cláusula arbitral, extender los efectos de esta en búsqueda de una eficiente administración de justicia a través del arbitraje internacional.

Bajo tal premisa, y aunque el consentimiento ha sido considerado como el elemento fundante del arbitraje como derogatoria expresa de la jurisdicción de las cortes locales, la extensión de la cláusula arbitral a no signatarios trasciende y/o extiende dicho concepto al concluir, del propio actuar de los terceros y/o de las circunstancias

⁵ Laudo del Caso 137. Cámara de Comercio e Industria de Ginebra, 2000. ASA Bulletin, 19, issue 4 2001.

⁶ Corte de Apelación de París. (11 de junio de 1991), *Orri c. Société des Lubrifiants Elf Aquitaine*.



del caso particular, que la real voluntad de tal tercero era quedar vinculado a la cláusula arbitral.

No todas las decisiones en materia de extensión del pacto arbitral son homogéneas; y aunque dependen del caso particular, no ha sido posible extraer una regla aplicable a unas circunstancias particulares determinadas, a fin de tener mayor predictibilidad sobre el resultado de una petición de extensión de la cláusula arbitral, por ejemplo, con fundamento en la doctrina del grupo de compañías.

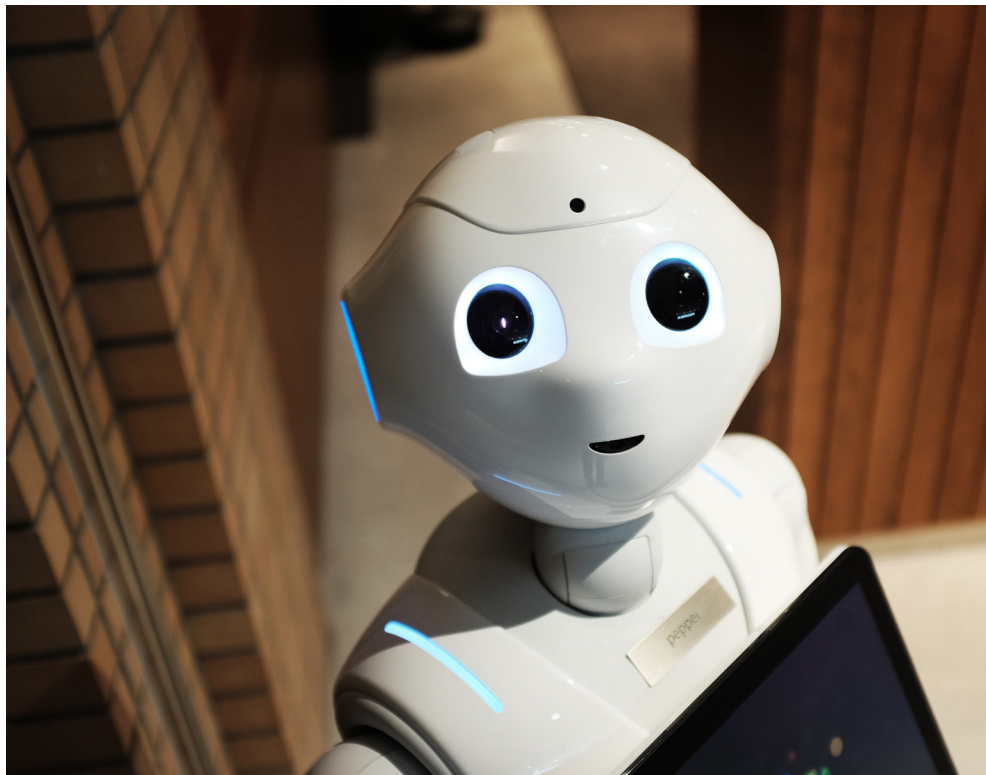
En todo caso, con el fin de evitar o, al menos, reducir la incertidumbre que el resultado de la aplicación de tales teorías trae para el caso concreto, la recomendación podría ser, hasta el punto en que ello sea posible, contemplar en los contratos y las cláusulas arbitrales incorporados en ellos, de manera clara y concreta, la realidad de las negociaciones y de la futura ejecución práctica de los mismos, con miras a ser conscientes de la importancia que tienen las declaraciones y comportamientos de terceros no signatarios de la cláusula arbitral.

No todas las decisiones en materia de extensión del pacto arbitral son homogéneas; y aunque dependen del caso particular, no ha sido posible extraer una regla aplicable a unas circunstancias particulares determinadas, a fin de tener mayor predictibilidad sobre el resultado de una petición de extensión de la cláusula arbitral, por ejemplo, con fundamento en la doctrina del grupo de compañías.



BIBLIOGRAFÍA

- [2003] EWHC 2602 (Comm); [2004] 1 All ER (Comm) 481; [2004] 1 Lloyd's Rep 38; [2003] 2 CLC 1097; (2003) 153 NLJ 1705; [2004] CLY 3488.
- Born, G. (2014) Capítulo 10: Parties to International Arbitration Agreements en. *International Commercial Arbitration*.
- Brekoulakis, Stavros (2010). *Third parties in International Arbitration*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press. \$2.76.
- Casación Civil Francesa (2007). *Business Systems Societé Alcatel (ABS), Societé Alcatel Micro Electronics (AME) et Societé AGF c Amkor Technology et al*, JCP [2007] I 168, No. 11.
- Caso E Holding c. Z Ltd., Mr. G y Mr. A. Arbitraje con partes confidenciales bajo las reglas UNCITRAL, Laudo final del 24 de agosto de 2011.
- Centro de Arbitraje y Conciliación - CCB (2021). *El CAC en cifras: índice estadístico*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.
- Código Civil Colombiano, artículo 1494; Código Civil Francés, artículo 1101; Código Civil de Estado de California, artículo 1549.
- Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Caso 9771, Laudo. Ver también: Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Caso 6519, Laudo.
- Díez Picazo, L. (1963). *La Doctrina de los Actos Propios*. Un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Barcelona: Bosch.
- GAILLARD, Emmanuel (1999). *Fouchard, Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- Hanotiau, B. (2011). *The parties to the arbitration agreement*. En Lévy, L. & Derains, Y. (Dir.) *Liber Amicorum en l'honneur de Serge Lazareff* (323) Paris: Editions A. Pedone.
- Hanotiau, Bernard (2011). *Consent to arbitration, do we share a common vision?* *Arbitration International* (Arb. Intl), 27(14).
- Intergen Nv. (Netherlands) v. Eric F. Grina (Switzerland), 344 F.3d 134 (1st Cir, 2003)
- International Chamber of Commerce, ICC Dispute Resolution 2020 Statistics. ICC Publication No.: DR5895 ENG. Recuperado de <http://iccwbo.org/dr-stat>.
- Kim, K. & Mitchenson, J. (2013). *Voluntary Third-Party Intervention in International Arbitration for Construction Disputes: A Contextual Approach to Jurisdictional Issues*. *Journal of International Arbitration*.
- Marguerat, Jean (2013). *Extensión de la cláusula arbitral a terceros no firmantes*. En Llopis-Llombart, M de B (Coord) *Arbitraje Comercial internacional en Europa (aspectos actuales y regímenes jurídicos)*. Lima, Perú: Mario Castillo Freyre y Palestra Editores S.A.C.
- Ospina Fernández, Guillermo & Ospina Acosta, Eduardo (2009). *Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico*. 7ª Ed. Colombia: TEMIS.
- P. Sanders (ed.). (1984). *Down Chemicals c. Isover Saint Gobain* (1982). *Yearbook Commercial Arbitration*, Vol. IX.
- Phoenix Can. Oil Co. contra Texaco, Inc., 842 F.2d 1466, 1477 (3d Cir.1988).
- Tribunal Federal Suizo, Sentencia DFT 4A_128 del 5 de diciembre de 2008.
- Youssef, Karim (2010) *The limits of consent: the right or obligation to arbitrate of non-signatories in Group of companies*. En Hanotiau, Bernard y Schwartz, Erick (ed) *Multiparty Arbitration* (71-110). Francia: ICC Publication No. 701E.
- Zuberbühler Tobias (2008). *'Non-Signatories and the Consensus to Arbitrate'*. *ASA Bulletin*, 26 Issue 1, pp. 18-34. Recuperado de <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/ASA+Bulletin/26.1/ASA2008003>.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA FUNCIÓN DEL ÁRBITRO INTERNACIONAL ¿DECISIONES INTELIGENTES O DECISIONES ARTIFICIALES? BREVES REFLEXIONES

Sofía Klot
Nicolás Córdoba
Arbitraje Internacional

"I'm not in the business of reading tea leaves. I don't have a crystal ball."
Christine Lagarde

Imaginemos un futuro distópico en el cual algunas de las principales tareas de los árbitros son realizadas por programas de inteligencia artificial. En este futuro, un asistente virtual planifica cada etapa del proceso, calcula los plazos y se comunica electrónicamente con las partes. Otro programa procesa los escritos y rankea los argumentos de las partes luego de analizar todo el universo de normas y jurisprudencia aplicable en cuestión de minutos. Durante la audiencia, las partes presentan sus alegatos de manera virtual frente a un "robot arbitro". Los plazos se ven considerablemente reducidos, y los bolsillos de las partes agradecidos. Parecería un capítulo sacado de una novela de Aldous Huxley, o un episodio de *Black Mirror*.

En estos últimos años, mucho se ha escrito sobre la factibilidad de que la tecnología desplace a los árbitros de carne y hueso¹. La buena noticia para ellos es que este escenario distópico por ahora pertenece más al ámbito de la ciencia ficción que de lo real. Seguramente pasen varias décadas antes de que veamos a Alexa presidiendo un tribunal, si es que esa posibilidad teórica algún día se materializa. Más allá de que muchos sistemas legales lo prohíben², referentes mundiales en materia de automatización, como el Prof. Richard Susskind, quien predijo que las profesiones tradicionales se verán radicalmente transformadas gracias al acceso a la información y el avance de la inteligencia artificial, señalan que:

“[E]stamos a muchos años de contar con sistemas que [...] puedan generar decisiones razonadas. [...] No descarto la posibilidad de plano, sin embargo. [...] En esta era de máquinas cada vez más capaces, entonces, no es descabellado esperar que, en algún momento, ya sea en veinte o cien años, los sistemas vencerán a los jueces en su propio juego, emitiendo sentencias razonadas con explicaciones que se verán y se sentirán como la más excepcional de las sentencias humanas [...]” (Susskind, R. E., 2019, 280).

Ello dicho, hay aplicaciones mucho más reales e inmediatas de la inteligencia artificial a la evaluación de un caso, la redacción de textos complejos y la toma de decisiones, con el potencial de facilitar enormemente la tarea de los árbitros en el corto plazo. Hoy ya existen buscadores de jurisprudencia inteligentes que interpretan los hechos del caso e identifican los precedentes más relevantes, e incluso programas que podrían asistir en la redacción de laudos, por ejemplo, resumiendo la historia procesal, los hechos y argumentos de las partes. Pero quizás una de las aplicaciones más novedosas y controversiales de la inteligencia artificial al arbitraje es el uso de herramientas predictivas, esto es, programas capaces de pronosticar con un alto grado de certidumbre cual será el resultado de un caso. He aquí la bola de cristal arbitral.

Si bien a la fecha el marketing de estas herramientas se ha dirigido fundamentalmente a los abogados de parte, no es difícil imaginar un futuro próximo en donde los árbitros también las utilicen como medio de consulta. Cuando la

inteligencia artificial supera ampliamente a los humanos en este ejercicio de pronóstico, ¿qué lugar queda para el árbitro? ¿Su rol pasa a ser el de un mero lector de la bola de cristal, o puede ignorar sus predicciones? Para contestar estas preguntas, primero hay que entender cómo funcionan las principales modalidades de inteligencia artificial relevantes para el arbitraje, y sus limitaciones intrínsecas.

Imaginemos un futuro distópico en el cual algunas de las principales tareas de los árbitros son realizadas por programas de inteligencia artificial. En este futuro, un asistente virtual planifica cada etapa del proceso, calcula los plazos y se comunica electrónicamente con las partes. Otro programa procesa los escritos y rankea los argumentos de las partes luego de analizar todo el universo de normas y jurisprudencia aplicable en cuestión de minutos. Durante la audiencia, las partes presentan sus alegatos de manera virtual frente a un “robot arbitro”. Los plazos se ven considerablemente reducidos, y los bolsillos de las partes agradecidos. Parecería un capítulo sacado de una novela de Aldous Huxley, o un episodio de Black Mirror.

Inteligencia artificial en el arbitraje: ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos?

Lo primero que vale la pena aclarar es, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Aun cuando no hay una definición universal sobre el alcance del concepto (pues es una rama en constante evolución), parece haber consenso de que se refiere a la capacidad de las máquinas de emular ciertos comportamientos humanos (Cfr. McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E, 2006).

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la inteligencia artificial como la "[d]isciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico." En una definición menos humano-céntrica, el Diccionario Inglés de Oxford la define como "la capacidad de las computadoras u otras máquinas de exhibir o simular comportamiento inteligente". Seamos honestos, emular a los humanos puede no ser lo más inteligente después de todo.

1 Ver, por ejemplo, Nappert, S., & Cohen, P. (15 de febrero de 2017). The march of the robots. *Global Arbitration Review*. <https://globalarbitrationreview.com/the-march-of-the-robots> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021); de la Jara, J. M., Infantes, A., & Palma, D. (4 de mayo de 2017). Machine Arbitrator: Are We Ready? *Global Arbitration Review*. <http://kluwarbitrationblog.com/2017/05/04/machine-arbitrator-are-we-ready/> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021); Nelson, J. W. (28 de julio de 2016). Machine Arbitration and Machine Arbitrators. *Young ICCA Blog*. <https://youngicca-blog.com/machine-arbitration-and-machine-arbitrators/#more-820> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

2 de la Jara, Infantes, & Palma (2017), nota supra. Los autores señalan que, a diferencia de la definición de “árbitro” de la Ley Modelo, las leyes de arbitraje de algunos países de América Latina (Brasil, Ecuador, y Perú) definen a los árbitros en términos humanos. En Colombia, por ejemplo, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley No. 1563 de 2012), en su artículo 7 establece que “[e]l árbitro debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio”. El proyecto de reforma de este Estatuto presentado en el 2019, y el cual fue posteriormente archivado, no contempló cambios a la definición de “árbitro”. Ver Proyecto de Ley 006 de 2019. Mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. 20 julio de 2019. <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrienio-2018-2022/2019-2020/articulo/6-mediante-el-cual-se-modifica-la-ley-1563-de-2012-estatuto-de-arbitraje-nacional-e-internacional> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021). El último proyecto de reforma de este Estatuto presentado en el 2021, y el cual aún se encuentra en trámite frente al Senado, tampoco contempla cambios a la definición de “árbitro”. Ver Proyecto de Ley 50009 de 2021. Mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. [Estatuto de Arbitraje], 29 de julio de 2021. www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/proyecto_ley_50009_2021_legislatura_2021_2022.html (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021); Imprenta Nacional (29 de julio de 2021). Gaceta del Congreso No. 891.

La siguiente pregunta es ¿cómo funciona la inteligencia artificial?, y, específicamente ¿por qué es relevante hablar de ella en el arbitraje? Empecemos por la primera.

Si bien hay varios tipos de inteligencia artificial cuyo análisis excedería el objeto de este artículo, hay dos grandes modelos que se aplican en el mundo legal y son de interés para este análisis: (i) la inteligencia deductiva; y (ii) el aprendizaje automático o inteligencia predictiva. Ambos buscan exactamente lo mismo: llegar a una decisión o resultado inteligente, que se asemeje a la que un humano tomaría. Sin embargo, lo hacen a través de mecanismos opuestos.

Por un lado, la inteligencia deductiva (en inglés “*rule-based artificial intelligence*”) opera en base a reglas preestablecidas y codificadas por humanos en uno o más algoritmos que le permiten a la máquina realizar deducciones lógicas del tipo “si X, entonces Y”. Es lo más parecido al elemental proceso que propone Norberto Bobbio de “partir del derecho tal como es, y no del derecho como debe ser” para así establecer un sistema jurídico sólido (Gutiérrez Chávez, J. E. (1988, p. 49). En otras palabras, aplicar las reglas tal como son para crear uniformidad en el proceso de decisión. De forma gráfica y simplificada, podemos imaginarlo como un enorme árbol de decisión creado por programadores humanos y reexpresado en lenguaje algorítmico. Una vez se cargan los datos al sistema, este aplica el conjunto de reglas preestablecidas para arribar a una consecuencia. Se trata de la primera generación de sistemas de inteligencia artificial, que hoy por hoy es considerada rudimentaria en comparación con modelos más avanzados como el *machine learning* y las redes neuronales (Susskind (2019), nota 5 *supra*, pp 264, 266).

Por otro lado, las tecnologías que utilizan el aprendizaje automático (mejor conocido como “*machine learning*”, por su denominación inglesa), no parten de un conjunto de reglas predefinidas, sino que analizan y procesan cantidades ingentes de datos para extraer trazos comunes, identificar, patrones y correlaciones. Con base en ello, la máquina crea sus propios algoritmos y modelos estadísticos para arribar, por sí sola, a una decisión. Dicho de otro modo, la máquina se “entrena” y “aprende” del universo de datos para ella misma extraer las reglas de juego y poder aplicarlas a los hechos.

La esencia de este modelo está en el universo de datos del cual la máquina aprende. Requiere de enormes cantidades de datos y capacidad procesadora para arrojar resultados satisfactorios. Cuanto mayor sea el universo de datos y precedentes que alimentan el sistema, y mejor su calidad (información veraz, variada y libremente disponible), más acertado será el resultado⁴. A diferencia de la inteligencia artificial deductiva que realiza deducciones emulando el razonamiento humano, el *machine learning* sigue su propia “lógica”, al punto de que en ocasiones es imposible explicar por qué la máquina arrojó un determinado resultado en términos humanos (Scherer (2019), nota 12 *supra*, pp 562-565).

Pasemos entonces a la segunda pregunta, ¿por qué es relevante hablar de ella en el mundo del derecho y, particularmente, en el arbitraje? Spoiler alert: porque ya se está usando y está transformando el ejercicio de la profesión.

Ello dicho, hay aplicaciones mucho más reales e inmediatas de la inteligencia artificial a la evaluación de un caso, la redacción de textos complejos y la toma de decisiones, con el potencial de facilitar enormemente la tarea de los árbitros en el corto plazo. Hoy ya existen buscadores de jurisprudencia inteligentes que interpretan los hechos del caso e identifican los precedentes más relevantes, e incluso programas que podrían asistir en la redacción de laudos, por ejemplo, resumiendo la historia procesal, los hechos y argumentos de las partes. Pero quizás una de las aplicaciones más novedosas y controversiales de la inteligencia artificial al arbitraje es el uso de herramientas predictivas, esto es, programas capaces de pronosticar con un alto grado de certidumbre cual será el resultado de un caso. He aquí la bola de cristal arbitral.

Así como los buscadores de internet y los asistentes virtuales son parte de nuestro día a día, la inteligencia artificial también está a disposición de abogados de parte, árbitros/jueces y expertos, y se utiliza cada vez más. Los ejemplos abundan. Sin ánimo de ser exhaustivos: software de traducción y transcripción automática en audiencias; programas de revisión de documentos (e-discovery) como Relativity, que permiten analizar miles de documentos en cuestión de minutos⁵; buscadores de jurisprudencia como Jus Mundi capaces de “leer” —a través de Procesamiento

3 Para un estudio completo sobre el tema y una mirada futurista sobre la justicia, ver Morison, J., & Harkens, A. (2019). Re-engineering justice? Robot judges, computerised courts and (semi) automated legal decision-making. *Legal Studies (Society of Legal Scholars)*, 39(4), 618–635. <https://doi.org/10.1017/lst.2019.5>.

4 La empresa IBM, creadora del famoso computador Watson que en 2011 ganó el juego de preguntas y respuestas Jeopardy y hoy se utiliza en campos como la medicina, señala que el correcto procesamiento de big data depende por lo menos de cuatro grandes variables: volumen, variedad, veracidad y velocidad. Ver, por ejemplo, Chen, Y., Agentinis, E., & Weber, G. (2016). IBM Watson: How Cognitive Computing Can Be Applied to Big Data Challenges in Life Sciences Research. *Clinical Therapeutics*, 38(4), 688–701, pp 689–690. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.12.001>.

5 Estos programas utilizan lo que se conoce como predictive coding, una forma de machine learning en la que se utiliza una muestra de documentos al principio de la revisión o de manera continua, que el abogado clasifica como “responsivos” o “no responsivos” para entrenar al sistema. En base a ello, el sistema crea un algoritmo que usa para clasificar el resto de los documentos a ser analizados como responsivos o no responsivos, organizándolos en orden de importancia.

del Lenguaje Natural– el texto de laudos arbitrales⁶; y hasta un software que evalúa la credibilidad de testigos analizando las micro expresiones faciales de espectadores voluntarios⁷. Existen herramientas como CARA (Case Analysis Research Assistant), mediante la cual los usuarios ingresan información sobre una disputa y obtienen un listado ordenado de jurisprudencia que trata sobre hechos y cuestiones legales similares⁸. Y el ya conocido “robo abogado” Ross, que utiliza la inteligencia artificial para contestar preguntas legales haciendo un análisis de toda la base de datos de decisiones a nivel federal y estatal de los Estados Unidos⁹. En materia de selección de árbitros, Arbitrator Intelligence genera informes estadísticos con base en el análisis de laudos y de cuestionarios enviados por usuarios que permiten anticipar ciertas preferencias o inclinaciones de los árbitros¹⁰.

La gran revolución de la inteligencia artificial aplicada a la práctica del derecho y del arbitraje ha venido de la mano del *machine learning*. Y una de sus aplicaciones más disruptivas es, justamente, la capacidad de pronosticar el resultado de un caso. La inteligencia artificial pronto pondrá al alcance de las partes, el público y los árbitros, predicciones sobre el porcentaje de éxito de un caso concreto con base en el análisis de la normativa y jurisprudencia relevante, tomando en cuenta la composición del tribunal, las posiciones de las partes en otros casos, y hasta del historial de victorias y derrotas de los abogados patrocinantes, todo ello al alcance de un click (Paisley, K., & Sussman, E., 2018, p. 36).

Bastante más sencillo que leer el futuro en la borra del café. ¿Qué tan exactas serán esas predicciones? Más exactas que las de los profesionales más experimentados. De hecho, los humanos somos sorprendentemente malos a la hora de presagiar el resultado de un litigio. En uno de los primeros estudios sobre el tema, un programa de computador logró predecir los votos individuales de los miembros de la Corte Suprema de Justicia estadounidense con una tasa de

acierto del 75%. En cambio, el grupo de expertos humanos integrado por destacados profesores y abogados apenas consiguió acertar en un 59.1%. de los casos¹¹.

Algunos productos modernos ofrecen funcionalidades van todavía más lejos. Arbilex, una herramienta desarrollada específicamente para los usuarios del arbitraje, utiliza la inteligencia artificial no solo para anticipar las decisiones de los árbitros sino para predecir las probabilidades de éxito de un caso concreto¹². Otro conocido programa en el sector de IP, Lex Machina, permite predecir la probabilidad de éxito en disputas sobre patentes frente a las cortes estadounidenses. Lo curioso de este programa es que no se basa en normas, ni análisis o razonamientos jurídicos de los precedentes que integran su base de datos, sino que extrae correlaciones de datos que a simple vista parecerían anecdóticos, como, por ejemplo, los nombres de los jueces, abogados y despachos intervinientes, y el valor y naturaleza de los reclamos. Este es uno de los ejemplos más paradigmáticos en el mundo del derecho de como el procesamiento de datos puro y duro supera al intelecto humano, al punto de que ni siquiera precisa aplicar la ley (Susskind, 2019, nota 5 supra, p 282).

Los límites de la justicia predictiva

El uso de estas herramientas de inteligencia artificial predictiva en el arbitraje plantea algunas cuestiones interesantes. ¿Podrían (o deberían) los árbitros utilizarlas para resolver un caso? Si lo hacen, ¿bajo qué condiciones? ¿Y cómo evitamos que la justicia arbitral, tal como la conocemos, no se desnaturalice por completo? Para ensayar una respuesta, tenemos que referirnos a algunas de las limitaciones propias de la tecnología subyacente, y hablar de tres aspectos clave en el arbitraje: confiabilidad, transparencia y consentimiento.

6 El Procesamiento del Lenguaje Natural, o NLP por sus siglas en inglés (Natural Language Processing) es la rama de la Inteligencia Artificial que estudia cómo dotar a las computadoras con la habilidad de comprender texto y voz de manera similar a como lo hacen los humanos. Ver IBM Cloud Education (2 de julio de 2020). Natural Language Processing (NLP). IBM Cloud Learn Hub. <https://www.ibm.com/cloud/learn/natural-language-processing> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

7 Artificial Lawyer (25 de agosto de 2020). Emotion Analysis System Can Judge Witness Credibility. Artificial Lawyer. <https://www.artificiallawyer.com/2020/08/25/emotion-analysis-system-can-judge-witness-credibility/> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

8 Ver Casetext (s.f.). Have CARA A.I. find you the most on-point authorities. Casetext. <https://casetext.com/cara-ai/> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

9 Above the Law (29 de mayo de 2019). ROSS Intelligence Offers A New Take On Legal Research. Above the Law. <https://abovethelaw.com/2019/05/ross-intelligence-offers-a-new-take-on-legal-research/> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

10 Ver Arbitrator Intelligence. <https://app.arbitratorintelligence.com/> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021). Para una descripción exhaustiva y actual de las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial en la práctica legal y arbitral, ver Sauma, K. (2021). ¿Árbitros robot?: Más Allá de la ficción. En Chipana Catalán, J. & Duarte, M. (eds.). Arbitraje y nuevas tecnologías Tomo I. Themis, pp 321-323.

11 Scherer (2019), nota 12 supra, p 547. Ver también, Ruger, T. W., Kim, P. T., Martin, A. D., & Quinn, K. M. (2004). The Supreme Court Forecasting Project: Legal and Political Science Approaches to Predicting Supreme Court Decision-Making. *Columbia Law Review*, 104(4), 1150–1210. <https://doi.org/10.2307/4099370>. En otro experimento famoso, científicos de la Universidad de Londres desarrollaron un programa que logró anticipar el resultado de ciertos casos presentados ante la Corte Europea de Derechos Humanos con un índice de confiabilidad del 79%. Ver The Guardian (23 de octubre de 2016). Artificial Intelligence ‘judge’ developed by UCL computer scientists. The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/24/artificial-intelligence-judge-university-college-london-computer-scientists> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021). Sin embargo, autores como Scherer han cuestionado la metodología empleada en ese estudio e identificado algunos problemas con la muestra de casos utilizados para entrenar al sistema. Al respecto, ver Scherer (2019), nota 12 supra, pp 449-550, 552-553.

12 Ver Arbilex. <https://www.arbilex.com/welcome> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

Confiabilidad

Uno de los aspectos más problemáticos de la inteligencia artificial (bien sea deductiva o predictiva) es que en teoría está expuesta a los mismos prejuicios o errores que los humanos, al punto tal de que podría tomar decisiones sistemáticamente erradas. Por un lado, un error en el diseño del algoritmo en el modelo deductivo puede llevar a que el sistema considere como inadmisibles ciertos datos que se le suministran, cuando no lo son, o que aplique equivocadamente una excepción a la regla. Por el otro, el machine learning es altamente sensible al tipo y calidad de información que sirve como base de su autoaprendizaje, por lo que un universo limitado de datos, o una selección inadecuada puede derivar en decisiones ostensiblemente parciales. Así, cualquier omisión o sesgo que afecte la muestra que se le proporcione al sistema para que aprenda a tomar decisiones se verá directamente reflejado en los resultados.

Pensemos, por ejemplo, en un algoritmo diseñado para decidir si la parte absorbida en un proceso de fusión de dos empresas cumplió con el deber de revelar la existencia de cualquier contingencia material. Si los datos con los que se entrena el sistema (proporcionados por un humano) no contienen suficientes precedentes que traten sobre el deber de la parte absorbente de realizar una debida diligencia (due diligence), que podría actuar como circunstancia exculpatoria, es probable que el sistema llegue a la conclusión equivocada de que cualquier omisión en la revelación de contingencias deriva en incumplimiento¹³.

Algo similar ocurriría si el sistema se alimenta con laudos de un grupo reducido de árbitros con inclinaciones ideológicas, o árbitros que hayan tomado una posición expresa sobre cuestiones debatidas y recurrentes. El arbitraje de inversión, de hecho, está plagado de cuestiones legales que dividen a la jurisprudencia y sobre las que cuales no existe un consenso en uno u otro sentido. Si la muestra no es lo suficientemente variada, y los laudos reflejan principalmente la visión de árbitros que sostienen la teoría "A", y no la teoría "B", el algoritmo aplicará la teoría "A" como si fuera la única solución posible.

El otro aspecto de la confiabilidad que es relevante aquí es la capacidad de la inteligencia artificial de dar cuenta del desarrollo de fenómenos que disrumpen los ordenamientos jurídicos, y de adaptarse a los cambios de paradigmas legales. ¿Por qué? Porque los algoritmos necesariamente se basan en decisiones y situaciones pasadas, al punto de que hay quienes los caracterizan como cristalizadores del *statu quo* y enemigos de la innovación legal (Scherer, 2019, nota 12 supra, p 557). ¿Hubiese podido un sistema de inteligencia predictivo resolver satisfactoriamente casos de

incumplimiento contractual derivados de la pandemia del Covid-19? Sin duda, el sistema tendría la capacidad para entender y decidir sobre circunstancias excluyentes de responsabilidad (e.g. fuerza mayor). Pero si los datos con los que entrena al programa no consideran la singularidad de una pandemia como la que vivimos, con cierre masivo de fronteras y múltiples restricciones al movimiento de personas y bienes (por el simple hecho de se trata de algo inédito), le será difícil contextualizar la magnitud y naturaleza de los eventos que derivaron en el incumplimiento.

A medida que la inteligencia artificial se vuelva cada más sofisticada y accesible, es posible que esta crítica quede superada. Existen ejemplos de sistemas de machine learning avanzados, capaces de crear soluciones innovadoras. Por ejemplo, cuando en 2016 AlphaGo, un programa creado por Google, venció al campeón mundial del juego de estrategia Go, este inventó una jugada que ningún jugador humano había ideado antes (Susskind, 2019, nota 5 supra, pp 269-270).

La esencia de este modelo está en el universo de datos del cual la máquina aprende. Requiere de enormes cantidades de datos y capacidad procesadora para arrojar resultados satisfactorios. Cuanto mayor sea el universo de datos y precedentes que alimentan el sistema, y mejor su calidad (información veraz, variada y libremente disponible), más acertado será el resultado. A diferencia de la inteligencia artificial deductiva que realiza deducciones emulando el razonamiento humano, el machine learning sigue su propia "lógica", al punto de que en ocasiones es imposible explicar por qué la máquina arrojó un determinado resultado en términos humanos (Scherer (2019), nota 12 supra, pp 562-565).

Transparencia

Aquí nos referimos a la transparencia en la toma de decisiones y la [in]capacidad de la inteligencia artificial de explicar, en términos humanos, el proceso que aplicó para llegar a una conclusión determinada. ¿Pueden los sistemas que usan herramientas de inteligencia artificial emitir decisiones razonadas y explicarlo satisfactoriamente? En principio esto no es posible (Scherer, M., 2019, p.p. 503-514 y p.p 511-512).

Si bien no podemos decir que todos los humanos son grandes razonadores y expositores de ideas claras y sencillas (*errare humanum est*), es precisamente en el razonamiento de un laudo donde se dispensa el mayor sentido de justicia. Esa explicación es, en definitiva, lo que le otorga legitimidad a una decisión ante los ojos de las partes y de terceros.

¹³ Para un estudio del caso sobre esta clase de errores, ver: Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (23 de mayo de 2016). Machine Bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks. ProPublica. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).



Si la inteligencia artificial no es capaz de explicar cómo y por qué llegó a una decisión determinada, se estaría vulnerando el principio de razonabilidad e infringiendo el derecho que tienen las partes a saber en qué se basa la decisión del árbitro (Lalive, P., 2010, p.p. 55 -65). A esto se le ha denominado la caja negra o black box, en la medida en que uno sabe qué ingresa al sistema y cuál es el resultado, pero no cómo se llegó a él. ¿Cómo definió el sistema conceptos tan esenciales como “buena fe” u “orden público”? O ¿qué valor terminó otorgándole a un testimonio de parte si éste fue expuesto a un duro contrainterrogatorio? Asimismo, si al emitir su decisión el tribunal decide utilizar herramientas predictivas y valorar los resultados como parte de su evaluación de los reclamos, debe ser capaz de poder explicarle a las partes en negro sobre blanco como esos resultados apoyan sus conclusiones.

Dicho ello, es posible concebir casos en donde las partes no necesariamente estén interesadas en el razonamiento y método usado para llegar a la decisión, y prioricen la economía procesal y obtención de un resultado hiper eficiente (la inteligencia artificial no atiende otros compromisos ni se toma vacaciones). Tal podría ser el caso de disputas contractuales sencillas, o de bajo monto, o en arbitrajes abreviados o de emergencia, en la medida de que la lex fori así lo permita. En estos casos excepcionales, el árbitro se convertiría en mero interprete de la bola de cristal. Claro está, esto implica repensar el derecho a obtener un laudo razonado como un derecho disponible, y no necesariamente como una garantía irrenunciable del debido proceso.

Consentimiento

Lo anterior nos lleva al último punto relevante en nuestro análisis: ¿qué papel juega el consentimiento en la discusión sobre el uso de la inteligencia artificial predictiva? El arbitraje, como método alternativo de solución de controversias, está cimentado en el consentimiento de las partes en someter una disputa, presente o futura, a consideración de uno o varios árbitros en virtud de una ley y un reglamento aplicable¹⁴. Sin él simplemente no se puede hablar de arbitraje. Ello no es más que una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad. El laudo es vinculante inter-partes porque ellas libremente aceptaron someterse a ese procedimiento. Incluso en los arbitrajes de inversión, en los cuales el inversionista simplemente acepta una oferta de arbitraje abierta contenida en un tratado de inversión que contiene la cláusula arbitral, el consentimiento ha sido un tema de amplia discusión¹⁵.

Aplicando este mismo razonamiento a la cuestión del uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones arbitrales, y atendiendo a las limitaciones intrínsecas que comentamos en los apartados anteriores, consideramos imprescindible que las partes en un arbitraje hayan consentido expresamente a que el tribunal utilice estas herramientas en su acuerdo de arbitraje o como parte de la primera orden procesal¹⁶. Ese consentimiento debería abarcar no solamente la posibilidad de que el tribunal utilice estas herramientas, sino el valor probatorio que se le dará y hasta qué punto puede o no el árbitro apartarse de las predicciones del sistema.

Conclusiones

La inteligencia artificial ya hizo su debut en el mundo del derecho, y parece que llegó para quedarse. No podemos cerrar la puerta a aprender y usar estas tecnologías, que por lo demás buscan hacer el trabajo de las partes, los expertos y hasta los árbitros, algo más eficiente y, por qué no, más predecible. Además, la inteligencia artificial seguirá su desarrollo querámoslo o no los abogados, y lo más probable es que mejore y se haga más precisa (pregúntele de nuevo a AlphaGo). Rehusarse a entender y participar del uso y desarrollo tecnología sería un error.

Otro punto que avoca por la inteligencia artificial es que los usuarios legales demandan mayor eficiencia y menores costos. Es aquí donde la inteligencia artificial ofrece una vía única donde la mayor eficiencia y los menores costos pueden no necesariamente sacrificar el resultado.

Dicho ello, si se piensa que la inteligencia artificial va a (o podría) sustituir a los árbitros, hay que tener presente sus limitaciones y problemas. La inteligencia artificial sigue siendo altamente dependiente de los conjuntos de datos que le son suministradas para su entrenamiento, por lo que es susceptible a tomar decisiones parciales o sesgadas. Así mismo, su incapacidad de presentar las razones que la llevaron a tomar una decisión es, por ahora, un factor disuasivo para uso generalizado o para su aceptación como fuente válida de decisiones en distintos ordenamientos jurídicos.

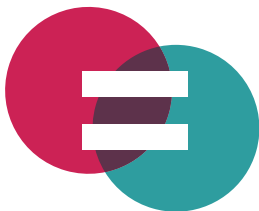
En cualquier caso, como todo en el arbitraje, lo primordial es la autonomía de la voluntad. En principio, no habría problema con que las partes, en el marco de la ley, aceptan libremente el uso de estas herramientas en pro de sus respectivos casos, o incluso las usen como sustitutos de los árbitros. ¿No es el arbitraje el sistema

¹⁴ “2.01 The agreement to arbitrate is the foundation stone of international arbitration. It records the consent of the parties to submit to arbitration—a consent that is indispensable to any process of dispute resolution outside national courts.” Blackaby, N., Blackaby, N., & Hunter, M. (2015). Redfern and Hunter on international arbitration (Sixth edition.). Oxford University Press., p. 71.

¹⁵ Paulsson, J. (1995). Arbitration Without Privilege. ICISID Review, 10(2), 232–257. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/10.2.232>; Nolan, M. & Caivano, F. G. (2010). Limits of Consent - Arbitration without Privilege and Beyond. In Fernandez-Ballester, M. A., & Arias Lozano, D. (eds.). Liber Amicorum Bernardo Cremades (2010). Wolters Kluwer.

¹⁶ Argerich, G., Noodt Taqela, M. B., & Jorge, J. (6 de febrero de 2020). Could an Arbitral Award Rendered by AI Systems be Recognized or Enforced? Analysis from the Perspective of Public Policy. Kluwer Arbitration Blog. <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/02/06/could-an-arbitral-award-rendered-by-ai-systems-be-recognized-or-enforced-analysis-from-the-perspective-of-public-policy/> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).

de solución de conflictos más innovador, eficiente y abierto a la voluntad de las partes? Sin embargo, para aceptar estas herramientas basadas en inteligencia artificial, hay que entender muy bien cómo funcionan y cuáles son todas sus posibles limitantes. Solo abriendo la conversación lo lograremos.



BIBLIOGRAFÍA

- Artificial Intelligence. En Oxford English Dictionary. <https://www.oed.com/view/Entry/271625?redirectedFrom=artificial+intelligence#eid> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021). En el original en idioma inglés: "The capacity of computers or other machines to exhibit or simulate intelligent behaviour".
- Gutiérrez Chávez, J. E. (1988). Norberto Bobbio y el positivismo jurídico. *Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho*, 36, 59-72, p 63; citando Bobbio, N. (1965). *El problema del positivismo jurídico*. Editorial Universitaria de Buenos Aires, p 49.
- Lalive, P. (2010). On the Reasoning of International Arbitral Awards. *Journal of International Dispute Settlement*, 1(1), 55-65. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idp006>.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence: August 31, 1955. *The AI Magazine*, 27(4), 12.
- Paisley, K., & Sussman, E. (2018). Artificial Intelligence Challenges and Opportunities for International Arbitration. *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, 11(1), 35-40, p 36.
- Real Academia Española. (s.f.). *Inteligencia Artificial*. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/inteligencia#2DxmhCT> (visitado por última vez el 20 de septiembre de 2021).
- Scherer, M. (15 de diciembre de 2018). *International Arbitration 3.0 – How Artificial Intelligence Will Change Dispute Resolution*. *Austrian Yearbook of International Arbitration* 2019, 503-514, pp 511-512.
- Susskind, R. E. (2019). *Online courts and the future of justice* (First Edition.). Oxford University Press, p 280 (traducción libre del inglés).

SORTEO CAC

DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS, PERITOS Y AMIGABLES COMPONEDORES

Conozca [AQUÍ](#) los detalles del proceso





LAS BUENAS DECISIONES Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ESCRITURA: ESTRUCTURA DEL LAUDO ARBITRAL

Angela Cristina Villate

Características de las decisiones judiciales

Escribir no es sencillo. Es una labor *antinatural*. Dispendiosa, la mayoría de las veces frustrante y subestimada; la escritura es una actividad que demanda energía y tiempo inconmensurables.

He dedicado más tiempo a la reflexión sobre la escritura que a escribir: ¿cuáles son las expectativas que genera un documento? ¿Cuándo estamos frente a un texto claro, coherente y conciso? ¿Es acaso la escritura una facultad exclusivamente humana? Interrogantes de esta naturaleza me han llevado a tomar consciencia de que la buena escritura se gana a fuerza de renunciar a sesgos de la comunicación como las frases hechas, las ideas vacías o al solipsismo malsano. Este último, responsable de conducirnos al irremediable error de presuponer que la nitidez de los pensamientos se calca en la escritura. Todos tenemos ideas brillantes, sin duda, pero se diluyen en el tortuoso pasaje a lo escrito.

Las decisiones judiciales, textos que pertenecen a una larga y acentuada tradición, son documentos con un fuerte reconocimiento y valor social. Son poderosos. Al ser elaborados por autoridades (como magistrados, jueces y árbitros) se clasifican como performativos, según J. Austin, tienen la capacidad de alterar la realidad.

Este tipo de documentos – comunes desde el momento en el que los pretores transitaron de la oralidad a la escritura – han sido artífices de una tradición textual dentro de las que pueden indicarse las siguientes características:

- Son textos con un alto grado de ritualidad. Para su validez, deben cumplir con formalidades como, por ejemplo, invocar la autoridad o enunciar frases habilitantes para tomar decisiones.
- Es una tradición que se robustece con la autoafirmación. Como el efecto de proyectar un espejo sobre otro.
- Es un texto que comparte una estructura, más o menos unificada, independientemente de su jurisdicción o temática. Por eso es posible afirmar la existencia de un arquetipo decisonal.

Expectativas defraudadas

Afirmar que “las decisiones judiciales son textos poderosos” nos lleva a descentralizar de un contexto estrictamente jurídico el impacto de las sentencias o laudos arbitrales. Ninguna decisión se toma fuera de un entorno social. Por lo que no cuesta demasiado aceptar el hecho de que surgen expectativas sobre documentos de este tipo, máxime, si se acepta que están en la capacidad de afectar la percepción de inversionistas nacionales o extranjeros sobre la estabilidad jurídica de un país, priorizar políticas públicas o reinterpretar el sistema legislativo, por mencionar tan solo algunos de sus alcances.

Las falencias textuales, sin embargo, son uno de los motivos más frecuentes que defraudan las expectativas de las decisiones judiciales. Por falencias textuales entiendo aquellos elementos que desdibujan la naturaleza y exigencia de los documentos (para ampliar información

sobre el tema, consultar la obra de Johannes Kabatek). En el caso de las decisiones judiciales son aquellos indicadores o alarmas que nos hacen preguntarnos ¿esto es una sentencia o un artículo académico? ¿Es esto la transcripción del expediente o una decisión judicial? ¿Se ha respondido a lo pedido por las partes?

Al interrogar a jueces, magistrados, usuarios, árbitros, secretarios de tribunal sobre las falencias textuales más frecuentes en la elaboración de laudos arbitrales, respondieron lo siguiente (para ampliar información consulte “Estructura del Laudo arbitral, CAC-CCB, 2021):

Extensión de los laudos: es comprensible que muchos de los problemas jurídicos que se atienden en arbitraje son complejos. Sin embargo, la complejidad y la síntesis no se oponen. La decisión debe atender a una interdependencia lógica entre situaciones fácticas, jurídicas y una decisión clara. En este contexto, se recomienda no confundir la decisión arbitral con el expediente.

Citas innecesarias: las decisiones deben estar sustentadas en un sistema de fuentes jurídicas. Sobre esto no hay lugar a discusión alguna. Sin embargo, un exceso de citas o la presentación de citas innecesarias en el laudo, generan ruido y hace que sea mucho más complejo identificar la postura decisonal de los árbitros.

No hay dosificación adecuada de la información: debido a que no hay una planeación de la estructura del laudo, se pierde el orden orgánico en las decisiones judiciales, lo que lleva a la reiteración innecesaria de información o, en su defecto, a la presentación parcial o descuidada de elementos relevantes en la decisión y argumentación jurídica de los laudos.

Seguridad jurídica y transparencia de la información

La forma más sencilla para comprender la relación entre la seguridad jurídica y la escritura es identificar, a partir de la forma o la estructura del texto, estándares que cumplan con las exigencias deseables de los documentos decisonales. Estos estándares responden al interrogante ¿Qué se espera de una decisión judicial?

En la cartilla del Laudo Arbitral, elaborada por el área de Gestión del Conocimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación, se identificaron cuatro grados de cumplimiento de la seguridad jurídica en los laudos arbitrales que son “medibles” desde una perspectiva formal del documento.

Esta “medición” responde a criterios procesales, textuales e históricos, cuyo análisis en conjunto permitió corroborar que (al menos en arbitraje nacional): no todos los laudos cumplen con las expectativas formales, textuales y los estándares deseados para una decisión judicial.

Afirmar que “las decisiones judiciales son textos poderosos” nos lleva a descentralizar de un contexto estrictamente jurídico el impacto de las sentencias o laudos arbitrales. Ninguna decisión se toma fuera de un entorno social. Por lo que no cuesta demasiado aceptar el hecho de que surgen expectativas sobre documentos de este tipo, máxime, si se acepta que están en la capacidad de afectar la percepción de inversionistas nacionales o extranjeros sobre la estabilidad jurídica de un país, priorizar políticas públicas o reinterpretar el sistema legislativo, por mencionar tan solo algunos de sus alcances.

Estos grados de cumplimiento (pleno, cercano, intermedio y parcial) se identificaron a partir de la revisión y caracterización de los laudos proferidos en arbitraje nacional en el CAC. Un laudo que se clasifique en el umbral “pleno”, es aquel que cumple con todos los elementos deseados en una decisión judicial; mientras que, por oposición, aquellos que se clasifican en el umbral, “parcial”, carecen de alguno o varios de los elementos deseados (Ver, Estructura del Laudo Arbitral: <https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Publicaciones/Estructura-del-Laudo-Arbitral>).

Las exigencias textuales de un documento cumplen dos características: estructura y contenido. Así, no basta con, por ejemplo, titular a un acápite “apartado probatorio”, si en su interior no hay un desarrollo cuidado, estructurado y pertinente de las pruebas en el proceso.

Se incumple con los estándares de seguridad jurídica (desde las exigencias textuales) por exceso o por defecto. En la primera situación, cuando se incluye información redundante o reiterada que termina por generar un manto de niebla sobre la comprensión del laudo arbitral. Por defecto, cuando se omite información relevante para la comprensión del laudo arbitral.

La comprensión textual de los documentos decisoriales brinda otra perspectiva. No se debe subestimar la forma. Esta es un indicador que permite comprender criterios sintomáticos sobre la frustración de las expectativas de justicia, transparencia en la información y seguridad jurídica.

El CAC pionero en elaborar una cartilla sobre la estructura del laudo arbitral

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá no solo es un lugar en el que se prestan los servicios de mecanismos de resolución de conflictos. También ha querido ofrecer garantías de seguridad jurídica y transparencia a través de estudios, investigaciones y publicaciones que permitan mejorar las prácticas de árbitros, secretarios de tribunales, conciliadores y operadores jurídicos en general.

Una de estas iniciativas consistió en elaborar una cartilla sobre la estructura del laudo arbitral (nacional) dirigida a árbitros y secretarios con el fin de contar con una guía indicativa que impacte en la redacción de dichas decisiones y permita el espacio de reflexión sobre aquellos aspectos que se deben mejorar en materia de escritura y seguridad jurídica.

Este tipo de estrategias suman al objetivo principal de contribuir al cumplimiento de valores de justicia como la transparencia, acceso a la información y seguridad jurídica.

En el área de Gestión del Conocimiento del CAC, junto con la colaboración de un grupo de investigadores del equipo ANCLA (análisis del conflicto y los laudos arbitrales), nos dimos a la tarea de identificar, describir y proponer una estructura arquetípica de los laudos arbitrales que nos permitiera comprender la percepción, estructura y oportunidades de mejora de estos documentos.

En esta tarea se compilaron distintas fuentes que nos permitieron tener un panorama general sobre la estructura del laudo arbitral y su percepción. Gracias a esta información fue posible establecer una guía indicativa de una estructura del laudo arbitral que cumpliera con todos los requisitos formales tendientes a garantizar un laudo que tienda a la seguridad jurídica y a satisfacer las expectativas que existen en torno a las decisiones judiciales.

La escritura, por tanto, es un ejercicio que no debe tomarse a la ligera, máxime si se realiza en un contexto de poder en el que no solo se percibe al autor de un documento. Tras estos textos está implícita la figura de autoridad, prestigio y credibilidad en un sistema de justicia. La escritura, es el testigo que nos persigue en el tiempo.

En el área de Gestión del Conocimiento del CAC, junto con la colaboración de un grupo de investigadores del equipo ANCLA (análisis del conflicto y los laudos arbitrales), nos dimos a la tarea de identificar, describir y proponer una estructura arquetípica de los laudos arbitrales que nos permitiera comprender la percepción, estructura y oportunidades de mejora de estos documentos.



RETOS PARA IMPLEMENTAR EL ARBITRAJE SOCIAL: EL ROL DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS

Angela María Yepes Sánchez

El Arbitraje Social, creado por la sección cuarta de la Ley 1563 de 2012 y reglamentado por el artículo 24 del Decreto 1829 de 2013, constituye un mecanismo alternativo y gratuito de solución de conflictos que permite resolver controversias sobre asuntos de libre disposición (o aquellos que la ley autorice), de hasta cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes¹ y que, pese a los 9 años de su vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano, todavía es muy poco conocido por la ciudadanía en general.

¹ Sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cuantías superiores; de conformidad con el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012.

La prestación de este tipo de servicio de resolución de controversias se concreta por medio de promoción de jornadas que organizan los Centros de Arbitraje con procedimientos especiales, breves y sumarios, en los que, por sus características, las partes no requieren de apoderado, los procesos son llevados por un solo árbitro y el mismo Centro funge las funciones secretariales propias de los procedimientos que conllevan la implementación del mecanismo de resolución de controversias.

El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, creado desde antes de que la práctica jurídica fuera establecida como obligatoria para todas las facultades de derecho del país, mediante el Decreto 196 de 1971, tiene desde hace cinco décadas el firme propósito de que el Programa de Pregrado en Derecho debe ser complementado en su proceso formativo, mediante una práctica jurídica con perspectiva social. Por ello, ha sido un espacio de reflexión e innovación pedagógica con alto sentido de responsabilidad social, que busca la implementación de distintos escenarios de práctica jurídica para enriquecer la formación profesional y suplir las necesidades de la población usuaria de los servicios que desde este espacio se ofrecen¹.

Cuando el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá nos contactó hace menos de seis meses, con el fin de fomentar e impulsar el Arbitraje Social en algunos de los servicios que presta actualmente el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de los Andes, fue sencillo encontrar unos puntos iniciales de trabajo, teniendo en cuenta que los intereses de las dos instituciones confluyen en este propósito de buscar mecanismos de resolución de conflictos que: (i) generen procesos abreviados; (ii) permitan solucionar situaciones que descongestionen nuestro aparato judicial; (iii) prevean asistencia jurídica de calidad y, (iv) sirvan como herramientas para el ejercicio y empoderamiento de los derechos de la ciudadanía.

Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que esta invitación suponía más que un espacio de trabajo conjunto pues, en sí, constituye un gran reto que debemos estructurar desde nuestro rol pedagógico y formativo para que, por medio de actos definidos y decididos encaminemos todos los esfuerzos que correspondan para lograr, por una parte, que las y los estudiantes reconozcan los beneficios de este mecanismo de resolución de conflictos y lo incorporen en su práctica jurídica y, por otra, que nuestras/os usuarias/os puedan acceder al mecanismo; -entendiendo que para ello se requiere un cambio en la cultura legal que requiere ser impulsada para una efectiva implementación de la figura jurídica.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el éxito de los mecanismos de resolución de conflictos, dentro de los cuales encontramos al Arbitraje Social, no se mide exclusivamente por su resultado final, sino que el mismo espacio que se abre como oportunidad para que las partes resuelvan con calidad, de manera ágil y eficiente su controversia, constituye una ganancia para la promoción del diálogo, la transformación legal y el descongestionamiento judicial, entre otros.

Así las cosas, la alianza celebrada entre las dos instituciones, nos ha permitido, a través de unas sesiones rigurosas desde lo jurídico y académico, capacitar tanto a nuestros asesores de las áreas de conciliación y derecho patrimonial como a algunas/os estudiantes que hacen parte de este espacio de práctica y que quisieron participar de manera voluntaria, para ampliar sus conocimientos sobre la materia y, asimismo, tener un espacio de reflexión conjunta, con el fin de analizar y revisar la posibilidad de idear algunas vías jurídicas reales y concretas, que permitan fortalecer el reconocimiento y aplicación de esta figura jurídica, como garantía de acceso a la administración de justicia que establece el artículo 229 de la Constitución Política Colombiana.

En tal virtud y como resultado del ejercicio descrito en el anterior párrafo, el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, en conjunto con el Centro de Arbitraje y Centro de Conciliación de la Cámara de Bogotá, han podido identificar tres (3) acciones concretas, buscando honrar este compromiso legal, que recientemente ha sido ratificado por la reciente expedición de la Ley 2113 de 2021, en donde la función social constituye uno de los once principios que orientan el servicio que desde se presta desde estos escenarios de aprendizaje práctico de las Instituciones de Educación Superior:

En primer lugar, desde el área de derecho patrimonial y bajo la guía del asesor, Juan Carlos Montoya, buscaremos la oportunidad de proponer la suscripción de compromisos arbitrales cuando se adviertan situaciones de conflicto ya existentes o la incorporación de la cláusula compromisoria en los negocios jurídicos, siempre que estos no superen los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 smmlv), -de acuerdo con la competencia ampliada sobre este asunto que determina el numeral del artículo 9 de la Ley 2113 de 2021-.

En segundo lugar, cada vez que tengamos la oportunidad de revisar un contrato o documento que contenga un compromiso arbitral o una cláusula compromisoria en donde se haya previsto la resolución del conflicto por medio del Arbitraje Social, actuaremos de manera conjunta con el Centro de Arbitraje, para que pueda darse aplicación a esta

¹ Política de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, aprobada en el Consejo de Facultad del 2 de diciembre de 2020

en beneficio de nuestras/os usuarias/os y de ser procedente, podamos representar a las partes que lo requieran.

En tercer lugar y, en los términos de nuestra asesora del área de conciliación, Emilce Coy Pulido, abriremos un espacio dentro de la audiencia de conciliación o mediación para que las partes conozcan las bondades y alcances de un arbitraje social (lo que permitirá que los actores de un conflicto encuentren en un mismo escenario las alternativas y herramientas que la ley les otorga para transformar sus controversias en oportunidades de autogestión y resolución de las diferencias y un reto para el conciliador/a o mediador/a en la búsqueda de posibilidades de gestión del conflicto.

Cuando el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá nos contactó hace menos de seis meses, con el fin de fomentar e impulsar el Arbitraje Social en algunos de los servicios que presta actualmente el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de los Andes, fue sencillo encontrar unos puntos iniciales de trabajo, teniendo en cuenta que los intereses de las dos instituciones confluyen en este propósito de buscar mecanismos de resolución de conflictos que: (i) generen procesos abreviados; (ii) permitan solucionar situaciones que descongestionen nuestro aparato judicial; (iii) prevean asistencia jurídica de calidad y, (iv) sirvan como herramientas para el ejercicio y empoderamiento de los derechos de la ciudadanía.

De esta manera, en los eventos en que resulte fallida la conciliación extrajudicial en derecho se propiciará o bien la suscripción de compromisos para que, a través del arbitraje, las partes resuelvan la diferencia; o en caso, de que la controversia versara sobre un contrato que contenga una cláusula compromisoria, se orientará a las partes sobre la forma en la que pueden acudir al Arbitraje.

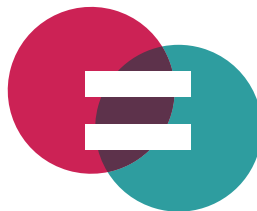
Encontramos en nuestras reflexiones que, a partir de la puesta en marcha de esta alianza, podrían llegar a presentarse conflictos éticos, en donde se generara alguna duda sobre la intervención del estudiante o asesor; principalmente, en los casos en donde hubieran actuado como conciliadoras/es en un conflicto y que, con posterioridad, éste fuera sometido a arbitraje social; por lo que no podrían actuar como apoderados de ninguna de las partes. Para ello, consideramos pertinente crear un Comité de Ética que nos permita validar la existencia del conflicto, garantizando siempre la independencia e imparcialidad de los procesos que se adelanten en Consultorio Jurídico.

Así pues, encontramos que, en la figura del Arbitraje Social, como mecanismo de gestión y resolución de conflictos, se encuentra el engranaje perfecto para, por una parte, concretar la mayor parte de los principios que rigen la

prestación de los servicios en los Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación, tales como el de educación como práctica jurídica, autonomía universitaria, formación integral, interés general, función social, gratuidad y calidad, y, por otra parte, lograr que nuestras/os beneficiarias/os, en los términos del artículo 8 de la Ley 2113 de 2021, tengan mayores posibilidades para resolver sus diferencias, rompiendo las barreras de acceso a la administración de justicia y el paradigma del proceso judicial como única posibilidad real y efectiva para la garantía de sus derechos.

Desde una reflexión académica, entendimos que, si queremos materializar y hacer eficaz este propósito legal vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2012, debemos coadyuvar en la promoción del Arbitraje Social. El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes es consciente y está comprometido con el esfuerzo que implica continuar profundizando en la formación integral de nuestras/os estudiantes en el abordaje y resolución de conflictos mediante mecanismos alternativos y, así mismo, en la práctica y activación efectiva de la figura, para que nuestras/os usuarias/os puedan ser beneficiarios reales de este mecanismo eficaz y de calidad para lograr la resolución de los conflictos, en los términos legales establecidos.

Encontramos en nuestras reflexiones que, a partir de la puesta en marcha de esta alianza, podrían llegar a presentarse conflictos éticos, en donde se generara alguna duda sobre la intervención del estudiante o asesor; principalmente, en los casos en donde hubieran actuado como conciliadoras/es en un conflicto y que, con posterioridad, éste fuera sometido a arbitraje social; por lo que no podrían actuar como apoderados de ninguna de las partes. Para ello, consideramos pertinente crear un Comité de Ética que nos permita validar la existencia del conflicto, garantizando siempre la independencia e imparcialidad de los procesos que se adelanten en Consultorio Jurídico.





ARBITRAJE Y EDUCACIÓN LEGAL: UNA INTEGRACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Carolina Olarte Bácares
Antonio Guzmán Mutis

La educación legal debe contribuir a formar y garantizar la atención de muchas de las necesidades insatisfechas de la sociedad colombiana, como, por ejemplo, el acceso a la justicia. Este estudio revisa el grado de incorporación del arbitraje en la educación legal en Bogotá, como medio para garantizar un mayor acceso a la justicia. En atención a la importancia que este reviste para la prestación de servicios legales en el país, la oferta formativa resulta insuficiente frente a las necesidades legales insatisfechas relacionadas con acceso a la justicia y a la nueva Ley que regula las actividades de los consultorios jurídicos del país.

Es indiscutible que una educación legal reducida a fines instrumentales difícilmente puede preparar o formar todas las capacidades o virtudes deseables de quienes ejercerán la profesión (Nussbaum, 2003 p. 272). Sin embargo, la educación legal es una herramienta fundamental para el beneficio de la sociedad. En su dimensión funcional, la educación siempre debe estar al servicio de la sociedad, como un medio.

En ese sentido, la educación legal, debería contribuir a formar y de este modo a garantizar la atención de muchas de las necesidades insatisfechas de la sociedad colombiana como, por ejemplo, la garantía de acceso a la justicia.

Dentro del abanico de alternativas para solventar algunas dificultades de acceso a la justicia encontramos el arbitraje en cuanto mecanismo alternativo de solución de controversias (en adelante MASC). En efecto, si bien el proceso judicial es uno, pero no el único camino para acceder a la justicia (DNP y Banco Mundial, 2017, p. 21), existen otros mecanismos para solucionar las controversias, como por ejemplo el arbitraje, que puede cumplir satisfactoriamente esta función.

En este orden de ideas, el propósito de este breve estudio es revisar el grado de incorporación del arbitraje en la educación legal en Bogotá.

Para responder a esta inquietud nos proponemos,

- 1) mostrar la relación entre el acceso a la justicia y el arbitraje
- 2) analizar el contenido de las disposiciones que rigen los programas de derecho en Colombia, con el fin de identificar la consideración del arbitraje y en general de los MASC en la estructura curricular
- 3) partiendo de la oferta académica en derecho en la ciudad de Bogotá, identificar el grado de incorporación del arbitraje, y en términos generales de los MASC, en los programas de Derecho.

1. Arbitraje y acceso a la justicia en Colombia

El acceso a la justicia se analiza en varias dimensiones y puede ser entendido, por ejemplo como un derecho humano (e.g. art. 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 14(1) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 229 de la Constitución Política de Colombia).

Del mismo modo, el acceso a la justicia se puede definir como la posibilidad de contar con la información y servicios legales que incluyen la asesoría, la representación formal y el acceso a mecanismos alternativos de solución de conflictos y a la implementación de las decisiones (OECD, 2019, p. 22). Incluso, el acceso a la justicia se considera

como un factor que contribuye al crecimiento económico y a la reducción de las desigualdades multidimensionales de un país (OECD, 2019, p. 37).

Desde la perspectiva constitucional y en el marco de lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, el arbitraje se considera una función pública deferida a los particulares para la administración de justicia. Este hace parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que buscan garantizar el derecho de acceso a la justicia. Lo anterior en virtud de las ventajas que representa para la descongestión judicial y la garantía de la celeridad en los procesos. Y aunque el arbitraje y los MASC no impliquen una desjudicialización de la resolución de disputas, pues no desplazan de manera permanente a la justicia formal (Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001), sí permiten redirigir los conflictos y solucionarlos fuera de los, a veces, congestionados y complejos estrados judiciales. Incluso, se ha llegado a afirmar, que la resolución alternativa de los conflictos permite honrar el art. 95(7) de la Constitución Política, ya que encarna el deber de colaborar con la administración de justicia (Peláez, 2018, p. 246).

Teniendo en cuenta, tanto su naturaleza de derecho, como su capacidad para mejorar el bienestar y la situación económica de las personas, es razonable preguntarse cuáles circunstancias o variables pueden mejorar el acceso a la justicia y cuál es el desempeño del sistema colombiano en las mismas. Esto ayudará a identificar de qué forma la educación legal, y específicamente la formación en arbitraje, pueden contribuir con el objetivo de formación en los servicios que satisfacen las necesidades legales de la población.

La importancia del arbitraje como MASC en el contexto colombiano es relevante. En efecto, las necesidades legales que experimenta la mayoría de personas nunca alcanzan un estrado judicial (OECD, 2019, p. 104). De acuerdo con el *World Justice Project*, Colombia se ubica en el escalafón 79 de 128 jurisdicciones en el *Rule of Law Index*. Esta medición, que recoge información por medio de una vasta cantidad de cuestionarios presenciales, considera 7 factores principales que se desagregan en 44 subfactores. Uno de esos siete factores corresponde al análisis de la justicia civil de cada Estado. Dentro de las variables que considera el análisis de la justicia civil se encuentra la existencia de mecanismos alternativos de solución de controversias accesibles, imparciales y efectivos (Col: 0.71/1) (WJP *Rule of Law Index*, 2020). La calificación más desfavorable para Colombia en el *Rule of Law Index* se relaciona con las demoras injustificadas en la impartición de justicia civil (WJP, 2020).

En este orden de ideas, el propósito de este breve estudio es revisar el grado de incorporación del arbitraje en la educación legal en Bogotá.

Los anteriores resultados, ponen en evidencia la necesidad de contribuir a mejorar el acceso a la justicia. En este punto, el arbitraje y en general los MASC proveen un escenario de impacto favorable para este propósito. En efecto, en lo que va del año 2021, el 86% de las amigables composiciones, y el 73% de los procesos arbitrales se resolvieron en menos de una semana. En ese mismo sentido, el 66% de las conciliaciones se resolvieron en menos de tres meses (Minjusticia, 2021).

Evidenciado así el aporte significativo que puede proveer el arbitraje para la garantía de acceso a la justicia, dadas las condiciones del sector de la justicia en Colombia, vale la pena revisar de qué forma la educación legal plasma esta realidad en la oferta académica para estudiar y promover, por medio del derecho, otros mecanismos que garanticen un acceso a la justicia oportuno, pronto y adecuado. En efecto, la educación legal puede promover la formación en mecanismos alternativos de solución de controversias como un medio para satisfacer y/o fortalecer el acceso a la justicia y suplir un amplio margen de necesidades jurídicas, como el acceso a la justicia en el país.

2. Regulación actual de programas de derecho sobre MASC

La educación superior es un servicio público, en atención a lo dispuesto por el art. 67 de la Constitución Política. En este orden de ideas, las disposiciones que enmarcan los programas de derecho deben garantizar la formación de profesionales del derecho para el beneficio de la sociedad.

En materia de política pública, el gobierno tiene el propósito y el compromiso de impulsar el desarrollo de los MASC, incluido el arbitraje (Borrero, 2019). En materia reglamentaria, este objetivo tiene algunos desafíos. El Decreto 2802 del 20 de diciembre de 2001, reglamenta ciertos estándares de calidad para programas de pregrado en Derecho en Colombia. Este decreto establece que los pregrados en Derecho deben atender *las necesidades reales de formación jurídica en [el] país*. Asimismo, esta norma hace explícito que uno de los objetivos de los programas de derecho debe ser el de crear conciencia del papel mediador y facilitador que cumple el abogado en la resolución de conflictos (art. 4(1)(c)). Adicionalmente, el decreto enfatiza la proyección social que debe tener todo programa (art. 7), aunado a la formación en capacidades “para la conciliación [y] el litigio” (art. 4(2)). Sin embargo, esta norma, que reglamenta los estándares de calidad de la carrera, no exige dentro de lo que denomina como “[a] reas Jurídicas”, ninguna asignatura o área específica sobre arbitraje o en general MASC. De manera correlativa, se advierte que la evaluación de contenidos en las Pruebas Saber Pro, no incluye conocimientos relativos al arbitraje o a los MASC (art. 3, Decreto 1373 de 2002).

En comparación con el anterior Decreto, la recién sancionada Ley 2113 del 29 de julio de 2021 que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, despliega un abanico importante de servicios que estos deberían proveer e involucra aspectos de práctica y formación en MASC, así como concretamente los servicios de arbitraje social.

En este sentido, la norma fija como objetivo de los consultorios jurídicos, impulsar los diferentes métodos de solución de conflictos así como “la justicia restaurativa” (art. 4.5). Dentro de los servicios que deben proveer, se encuentran señalados de manera específica, los servicios de conciliación en equidad y mediación (art. 6 para. 1 de la misma ley) así como el arbitraje social (art. 9.8). Este último, contemplado en el Estatuto de arbitraje nacional e internacional en su art. 117, Ley 1563 de 2012, se entiende como una figura que tiene el objetivo de garantizar el acceso a la administración de justicia a los grupos de la población menos favorecidos (Zamudio, 2019). En este mismo sentido, los Consultorios Jurídicos de las facultades de derecho están habilitados legalmente para organizar su propio centro de conciliación (art. 11, Congreso de la República, Ley 640 de 2001). Incluso, los estudiantes que realicen su judicatura como conciliadores deben capacitarse en esta materia cumpliendo con una *carga mínima en mecanismos alternativos de solución de conflictos*. Esta misma ley les exige a los centros de conciliación (incluyendo los de los Consultorios Jurídicos) la organización de un programa de educación en MASC.

Lo anterior, indica que existen requisitos legales que exigen a las facultades la capacitación en MASC en sus Consultorios Jurídicos, dentro de los cuales se encuentra el arbitraje y de manera específica el arbitraje social.

Es importante mencionar que los ajustes al funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, al tenor de la Ley 2113 del 29 de julio de 2021, se efectuarán dentro de los dos (2) años a partir de la expedición de la misma. En ese sentido, todos los *ajustes curriculares, tecnológicos, de personal y de infraestructura a que haya lugar, para armonizar la estructura y operación de sus consultorios jurídicos con el contenido de esta Ley*, por ejemplo la incorporación del arbitraje social y la formación en MASC, se deben dar en los próximo dos años.

No obstante, estas obligaciones no están definidas con mayores precisiones y no fijan pautas de contenido específico para los programas de derecho que las incorporen. Luego, no existe ninguna regulación puntual o directa respecto de la calidad de los programas de pregrado de Derecho respecto a contenidos específicos (Ceballos Bedoya, 2017, p. 84) y menos aún que involucre, como criterio de calidad, la inclusión de una oferta formativa en MASC o específica en arbitraje.

Lo anterior se explica en atención a la autonomía universitaria y la libertad de cátedra que protegen la determinación de los programas o currículos como una prerrogativa expresa de las universidades (v. art. 29, Congreso de la República, Ley 30 de 1992). Esto estaría de acuerdo con la expectativa de “flexibilidad curricular”, según la cual el programa debería ajustarse para atender “las necesidades cambiantes de la sociedad” (art. 4(4) Decreto 2802 de 2001). Es por esto que, las instituciones deben presentar una justificación que dé sustento al contenido de sus currículos para obtener el “registro calificado”. Esta justificación, deberá evidenciar la pertinencia social del programa, y deberá estar fundada en un diagnóstico que incluya, entre otras, un estudio que tenga por lo menos identificados componentes tales como las necesidades de la región o del país (art. 2.5.3.2.3.2.3. Decreto 1075 de 2015). Por lo tanto, y excluyendo los efectos que tendrá la implementación de la Ley 2113 del 29 de julio de 2021, la decisión de incluir asignaturas como arbitraje o MASC, como una alternativa y un factor de acceso a la justicia, es potestativo de los programas de derecho y dependiente de sus propios diagnósticos.

Con todo, en el contexto global de la educación legal, la doctrina ha reflexionado bastante acerca de la importancia de los MASC y del arbitraje para una formación en Derecho que prepare adecuadamente a los profesionales del Derecho para un ejercicio de éste acorde con las necesidades de la sociedad.

Hay quienes dicen que la lenta incorporación del arbitraje y los MASC en la educación legal puede deberse a la falta de tradición en estos campos (Sklar, 2013, p. 442). Lo anterior llevaría a que, aunque se estudien, esto se haga de manera tangencial o como apéndice de otras instituciones jurídicas como los contratos o el procedimiento civil. Adicionalmente, la enseñanza y uso de mecanismos tradicionales como el litigio, rara vez está acompañado de análisis de riesgos, menos aún de la revisión de alternativas (Sklar, 2013, p. 444).

Otra razón que puede justificar la lenta incorporación del arbitraje y los MASC en el currículo puede hallarse en una limitación práctica. La falta de recursos en muchos casos, como el de algunas universidades africanas, ha impedido que los currículos se adapten a realidades económicas puestas en evidencia por la globalización y su impacto en el Derecho (Ndulo, 2014, p. 12).

3. Oferta académica en arbitraje y MASC en Bogotá

Con el fin de revisar hasta qué punto la oferta académica ha incorporado el arbitraje, se hizo la revisión de los programas de todas las facultades de Derecho de Bogotá, tal y como están descritos en sus portales y páginas Web. Esta información fue recogida entre el 5 y el 9 de agosto de 2021. Este estudio no toma en consideración el momento

en el cual fueron incorporadas al plan de estudios las materias sobre arbitraje. Vale la pena resaltar que del análisis de los currículos disponibles en línea de varios programas, la formación en arbitraje está incluida en las asignaturas que tratan en términos generales los MASC. Por lo anterior, hemos decidido levantar los datos y presentar los resultados, incluyendo en el conteo igualmente las asignaturas relacionadas con MASC.

Los resultados que presentaremos a continuación están divididos en la incorporación del arbitraje y/o de los MASC en los programas de derecho de pregrado, de especialización, de maestría y de doctorado. Esta diferenciación responde a las características y alcances diferenciales de la formación en los diferentes grados de la educación superior.

No obstante, estas obligaciones no están definidas con mayores precisiones y no fijan pautas de contenido específico para los programas de derecho que las incorporen. Luego, no existe ninguna regulación puntual o directa respecto de la calidad de los programas de pregrado de Derecho respecto a contenidos específicos (Ceballos Bedoya, 2017, p. 84) y menos aún que involucre, como criterio de calidad, la inclusión de una oferta formativa en MASC o específica en arbitraje.

3.1. Arbitraje y MASC en pregrados en Derecho

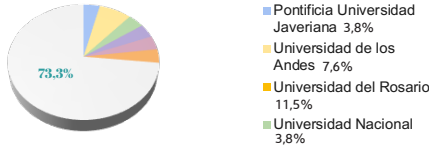
Los programas de pregrado en Colombia están definidos en la Ley 30 de 1992, art. 9, como aquellos programas que *preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos.* Entre estos se encuentran los programas de pregrado de derecho.

De la oferta académica de universidades, instituciones tecnológicas e instituciones universitarias se pudo revisar el programa de 35 pregrados de Derecho ofrecidos en Bogotá (el número asciende a 42 pero varias de ellas no presentan su plan de estudios en línea). Del número de programas de pregrado revisados, 25 de estos (71%) tienen incluidas por lo menos una materia de Arbitraje o de MASC. De este 71%, el total de la oferta de materias de arbitraje o MASC es de 26 asignaturas. El 76% de estas (20) corresponde a MASC o materias con denominaciones como *métodos alternativos de solución de conflictos* o “MASC y conciliación”. De estas materias, el 95% (19) hacen parte del núcleo básico (obligatorio) del programa, y solo una de estas hace parte del componente electivo. Es importante resaltar que solo 6 asignaturas corresponden de manera específica al

arbitraje. Es decir que, solo el 23% de la oferta incluye asignaturas dedicadas especialmente al arbitraje nacional o internacional. Estas asignaturas se denominan “Arbitraje Comercial Internacional”, “Arbitraje de inversión, derecho internacional público y sentencias históricas de la CIJ”, “Arbitraje Nacional e Internacional”, “Arbitraje y métodos alternativos”, y dos de estas se denominan “Arbitramento”. De esta pequeña cantidad se tiene que menos de la mitad (2) son materias obligatorias (o de núcleo), menos de la mitad (2) son asignaturas de énfasis o profundización, una (1) es electiva y otra (1) no presenta información respecto a su naturaleza en el programa. Esto quiere decir que, solo 2 universidades de la ciudad de Bogotá exigen de manera obligatoria la formación específica y dedicada al arbitraje cuando se trata de pregrado.

El Gráfico 1 presenta cómo se distribuye porcentualmente la oferta de estas asignaturas en arbitraje y MASC entre algunas universidades de la ciudad de Bogotá.

Gráfico 1. Porcentaje de oferta por materias en Pregrado por Universidad



3.2. Especializaciones en Derecho, oferta de Arbitraje y MASC

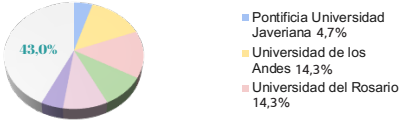
Los programas de especialización en Colombia hacen parte de los posgrados y tienen como propósito la *cualificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias* que permiten el “perfeccionamiento” en una profesión o disciplina (art. 3, Ministerio de Educación, Decreto 1001 de 2006).

Dicho lo anterior, en cuanto a la oferta en especializaciones, se tiene que de las mismas 35 instituciones revisadas, se halló oferta de 156 programas de especialización en Derecho, de los cuales 17 incluyen por los menos una materia de Arbitraje o MASC (10%); sin embargo, nótese que los 156 programas de especialización comprenden toda la oferta de Especializaciones y que en varias de ellas es razonable dicha omisión curricular, al enfocarse en subdisciplinas o aproximaciones para las cuales el arbitraje y en general los MASC no tendrían relevancia.

De los 17 programas con materias relativas a arbitraje o MASC se tiene que 11 de estas especializaciones (64%) se ubican en el campo del Derecho Privado (Derecho Civil, Comercial, Financiero y de Familia). Las materias de arbitraje son especialmente frecuentes en este tipo de programas. 5 de estas pertenecen a especializaciones relativas al Derecho Procesal civil o probatorio (29%), y solo

una se relaciona con el Derecho Público (especialización en derecho administrativo y contractual). Adicionalmente, de estas 17 especializaciones se tiene una oferta total de 21 materias de las cuales 10 tratan directamente del arbitraje nacional o internacional, o del proceso arbitral (48%), mientras que 11 conciernen directamente a los MASC (52% del total de la oferta curricular).

Gráfico 2. Porcentaje de materias ofrecidas en programas de especialización por Universidad



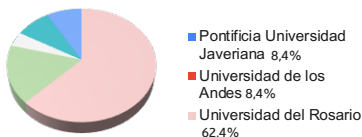
3.3. Maestrías en Derecho, oferta de Arbitraje y MASC

Finalmente, se revisó de la misma manera la oferta en maestrías en Bogotá. Una maestría en Colombia es definida legalmente como un programa de posgrado cuyo objetivo puede ser a) la profundización o, b) la investigación. Estas tienen el propósito de desarrollar competencias en procesos de investigación mientras que aquellas tienen el propósito de desarrollar competencias en la solución de problemas profesionales (art. 6, Ministerio de Educación, Decreto 1001 de 2006). El grado de profundidad y sofisticación de los estudios de maestría provee a quienes las cursan de conocimientos, habilidades y competencias más amplias para un ejercicio profesional mucho más integral y de impacto.

La oferta de maestrías en Derecho es significativamente menor a la de especializaciones. Se hallaron 78 programas de Maestría en Derecho, de los cuales 8 tienen por lo menos una materia de Arbitraje o MASC (10%) y una sola (Maestría Universidad del Rosario) se enfoca directamente en el Arbitraje Nacional e Internacional. La oferta agregada de materias de arbitraje o MASC en maestría asciende a un total de 24. De este total ofrecido, el 75% corresponde a materias relativas a arbitraje (18 materias) mientras que el 25% corresponde a materias que abordan en términos generales los MASC. El cambio de la tendencia presentada hasta ahora que privilegia el número de asignaturas de MASC por sobre aquellas específicas en arbitraje, se explica por la presencia de una maestría especialmente enfocada en arbitraje nacional e internacional, y que representa el 72% del total de la oferta de arbitraje y el 58% del total de la oferta de arbitraje o MASC.

Como en los casos anteriores, el Gráfico 3 ilustra las universidades de la ciudad de Bogotá que lideran la oferta agregada de materias en arbitraje o MASC, cuando se trata de maestrías.

Gráfico 3. Porcentaje de materias (Arbitraje o MASC) ofrecidas en Maestría por Universidad



3.4. Doctorados en Derecho, arbitraje y MASC como objeto de investigación

Un doctorado en Colombia es un programa de educación superior concentrado en la formación de investigadores de nivel avanzado y que toma como base la *disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona en los niveles anteriores de formación* (Congreso de la República, Ley 30 de 1992, art. 13).

Los programas de doctorado en derecho en Bogotá ofrecen en su mayoría una formación desde la perspectiva teórica y epistemológica, por lo cual no se encuentra una programación de asignaturas sobre arbitraje o MASC. Una forma de identificar la creación de conocimiento de segundo orden en la formación doctoral se puede reflejar por el contenido de las tesis doctorales en preparación y/o defendidas.

Sin embargo, solo logramos recoger la información de las tesis de tres programas doctorales en Bogotá, identificando apenas una de estas relacionada con el arbitraje. Por lo anterior, no presentamos análisis de estos datos fragmentarios, pero planteamos la necesidad de revisar el impacto de las tesis doctorales en derecho que aborden el arbitraje y los MASC como un escenario aproximación académica sofisticada que puede enriquecer de manera significativa la formación jurídica en estas áreas.

Conclusión

La formación profesional de base para el abogado contempla una formación escasa, aún no generalizada en MASC y en especial en arbitraje. De lo anterior se puede concluir que, pese a que existe una incorporación interesante de asignaturas sobre MASC en los programas de derecho de la ciudad de Bogotá, en atención a la importancia que estos revisten para la prestación de servicios legales en el país, resulta insuficiente frente a las necesidad legales insatisfechas relacionadas con acceso a la justicia y en especial frente a la expectativa de la nueva Ley que regula las actividades de los consultorios jurídicos del país.

La proporción de especializaciones sobre MASC y arbitraje o que los tratan en su programa, sigue siendo reducida con respecto al universo de la oferta de programas de perfeccionamiento del derecho.

A pesar del número todavía reducido de programas de maestría que ofrecen una formación en arbitraje o en MASC, la aparición reciente de programas específicos pone de presente el importante y creciente ejercicio profesional en torno al arbitraje comercial nacional e internacional, así como al arbitraje de inversiones.

La educación legal derivada de los programas de derecho ofrecidos en la ciudad de Bogotá tiene un desafío importante frente a la provisión de una oferta académica específica en arbitraje como medio para favorecer el acceso a la justicia.

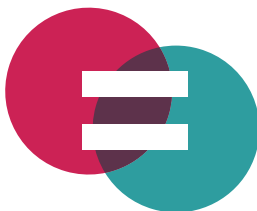
Con todo, tratándose de un mecanismo heteronormativo, el arbitraje, incluso el social, está sometido a muchos límites o retos, entre estos su naturaleza en muchos escenarios considerada elitista, como en el caso del arbitraje comercial o en el de inversiones, o la limitación del arbitraje social para grupos poblacionales menos favorecidos. En este último caso, su uso se restringe a procesos de cuantías menores, sin duda una ventaja para grupos menos favorecidos, pero dejando por fuera una gran cantidad de procesos cuyas partes seguramente no tienen el músculo financiero para sufragar un procedimiento arbitral.

Finalmente, además de las ventajas del arbitraje para la garantía de acceso a la justicia, este debería ser un componente formativo que desde la perspectiva de la educación legal, se acompañe de la identificación y generación de competencias en otro tipo de mecanismos que eviten la materialización de un conflicto y la necesidad de recurrir a las diversas formas de justicia para la garantía de los derechos.

La formación profesional de base para el abogado contempla una formación escasa, aún no generalizada en MASC y en especial en arbitraje. De lo anterior se puede concluir que, pese a que existe una incorporación interesante de asignaturas sobre MASC en los programas de derecho de la ciudad de Bogotá, en atención a la importancia que estos revisten para la prestación de servicios legales en el país, resulta insuficiente frente a las necesidad legales insatisfechas relacionadas con acceso a la justicia y en especial frente a la expectativa de la nueva Ley que regula las actividades de los consultorios jurídicos del país.

BIBLIOGRAFÍA

- Borrero Restrepo, G. M. (2019). Pacto por la legalidad: un nuevo impulso para el arbitraje. Arbitrio: Revista de derecho arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, vol. 1 num. 1. <https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/01>
- Ceballos Bedolla, M. A., (2017). Educación jurídica y reproducción social en Colombia. Estudios Socio-jurídicos, 20(1), 77-105. Disponible en línea: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/5373>
- DNP y Banco Mundial, (2017). Índice de acceso efectivo a la justicia, Colombia 2017, Disponible en línea: <https://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/indice-de-Acceso-Efectivo-a-la-Justicia.aspx>
- Ministerio de Justicia y del Derecho (2021). Duración del Trámite de Arbitraje (documento base 2021-08-30-21-46), ubicación: SICAAC Sistema de información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Conciliación, Disponible en línea: <https://www.sicaac.gov.co/Informacion/EstadisticaArbitraje>
- Ministerio de Justicia y del Derecho (2021). Duración del Trámite Conciliatorio por Año (documento base: Archivo Estadística Conciliación SICAAC), ubicación: SICAAC Sistema de información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Conciliación, Disponible en línea: <https://www.sicaac.gov.co/Informacion/Estadistica>
- Ministerio de Justicia y del Derecho (2021). Duración del Trámite Amigable Composición (documento base: 2021-08-30-21-53), ubicación: SICAAC Sistema de información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Conciliación, Disponible en línea: <https://www.sicaac.gov.co/Informacion/EstadisticaAmigableComposicion>
- Ndulo, M. (2014). Legal Education in an Era of Globalisation and the Challenge of Development. Cornell Law Faculty Publications. Paper 987, <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2479&context=facpub>
- Nussbaum, M., (2003). Cultivating Humanity in Legal Education, The University of Chicago Law Review Vol. 70, No. 1, Centennial Tribute Essays <https://www.jstor.org/stable/1600558>
- Peláez Hernández, R. A. (2018). Arbitramento y derecho de acceso a la justicia: Aspectos Procesales. En O. Woolcott-Oyague, D. F. Monje-Mayorca, G. Comandé, R. A. Peláez-Hernández & A. Alarcón-Peña. Estudios contemporáneos de derecho privado: responsabilidad civil, propiedad, contratos y obligaciones (pp. 241-279). Bogotá: Universidad Católica de Colombia
- Sklar, Stanley. (2013). Arbitration Advocacy: Its Role in Business and Legal Education, and New Options for Dispute Resolution. DePaul Business and Commercial Law Journal vol. 11 issue 4 (symposium record). <https://core.ac.uk/download/pdf/232971135.pdf>
- OECD. (2019). Equal Access to Justice for Inclusive Growth: putting people at the centre, OECD Publishing, Paris. Disponible en línea: <https://www.oecd.org/gov/equal-access-to-justice-for-inclusive-growth-597f5b7f-en.htm>
- Varón Palomino, J. C. (1991). Educación legal: Los abogados del futuro... Hoy. (O por qué debemos redefinir el estudio de la función de resolución de conflictos del Derecho). Revista de Derecho Privado. (9), p. 105-124
- WJP, Rule of Law Index, 2020. Disponible en línea <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Colombia/Civil%20Justice/>
- Zamudio Arias, A. F., (2019). El arbitraje social como herramienta para la construcción de paz. Boletín virtual Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Disponible en línea: <https://procesal.ueexternado.edu.co/el-arbitraje-social-como-herramienta-para-la-construccion-de-paz/>





BLOCKCHAIN AND INTERNATIONAL ARBITRATION

Sophie Nappert

A simple introduction to blockchain

1) At its basic level, the blockchain is an online system of recording information in a way that makes it difficult (or, ideally, impossible) unilaterally to change, because that information is duplicated and distributed across a large network of computer systems, using cryptography to secure the data. Once data, information or a transaction is placed on the blockchain, an immutable, time-stamped and secure record of it is created.

2) By way of context, it is worth recalling that blockchain was rolled out in the aftermath of the 2008 financial crisis, in reaction to the loss of trust in the centralized banking system. The important concepts to keep in mind when thinking of blockchain are (1) the distrust in institutions and in the centralization of information; and conversely (2) the trust in peer-to-peer transactions taking place on an open platform, transparent for all stakeholders to see.

3) One can readily see a convergence between the ethos that underpins the blockchain and that of arbitration: (1) arbitration is a private, decentralised form of dispute resolution sitting alongside the institution of State courts; and (2) arbitration relies on the decision-making of “peers” – private individuals (not State judges) who are selected by the parties for their



experience or gravitas, knowledge of a given industry, or because the parties choose to place their trust in them.

4) It is also worth recalling that, because blockchain's early application was in the financial sector and linked to the creation of the cryptocurrency market, and because this is still a largely unregulated space, blockchain has been perceived as a platform for illegal activity. This, however, is not universally the case and the blockchain technology offers interesting avenues for optimizing the legal field and for arbitration.

5) In the legal space, the concept of "smart contracts" is linked to the blockchain. Smart contracts are programs stored on the blockchain that automate the execution of an agreement when predetermined conditions are met. Smart contracts work by following the metric of "If/when [x happens], then [y happens]" that is written into code on the blockchain. The blockchain network of computers executes the actions when the predetermined conditions have been met and verified. Actions might include releasing funds to a party upon receipt of goods or issuing a ticket upon payment. The blockchain is then updated upon completion of the transaction and that transaction is publicly seen by everyone on the network.

6) Smart contracts and the blockchain remove the need for third parties to handle transactions and the time and costs associated with the involvement of these third parties. The execution of the parties' transaction is immediate and secure. By way of example, the purchase of a book on Amazon involves (i) Amazon as the third party providing the retail platform; and (ii) your credit card company as the third party facilitating payment. With a smart contract recording the purchase of the book on the blockchain, the presence of Amazon and of the credit card provider, and the fees that they charge, are no longer needed – the funds are released directly to the seller once the book is received by the purchaser.

7) Similarly, the use of smart contracts and blockchain has the potential of optimizing the arbitration process by making it less time-consuming, less costly and more efficient, particularly in relation to the management of documents.

8) One can envisage a situation whereby, once a contractual relationship is entered into, the parties agree that the relevant information and documents are stored on the blockchain from the beginning of the contractual relationship. If a dispute later arises, the genesis of that dispute is likely to be more easily identified from the chronological record of that information.

9) One can also envisage the automation of enforcement of an arbitration decision via a smart contract with pre-

determined outcomes – "If/when [payment is not made on a certain date], then [the defaulting party is liable for x damages]". Self-enforcement would work well for simple, binary disputes that can be enforced on-chain.

10) More nuanced or complex disputes (such as cases where force majeure is pleaded, for example, or fraud) and disputes where enforcement is to be carried out off-chain (i.e. where there are no assets on-chain) still require the involvement of a human decision-maker and/or State courts.

The important question of trust

11) One of the core tenets underpinning blockchain, given the fact that stakeholders are anonymized and do not know each other, is that of "trustless trust". The theory is that the technological attributes of distribution and cryptographic security guarantee the "trustlessness" of the entire system, in contrast to traditional ledgers for which the trustworthiness of the ledger keeper is fundamental.

12) Scholarship on blockchain governance argues that the apparent void created by doing away with trust in a centralized system is in fact being filled with increased confidence in the decentralized system, thereby indirectly reducing the need for trust.

13) What emerges from this is the interesting observation that the role played in traditional centralized justice by procedural fairness as an enabler of trust via user satisfaction is being replaced, in the world of online interaction, by confidence that the technology will produce a result that meets user expectations. It is this shift, from trust in traditional procedural fairness towards growing confidence in the near-immediate outcomes delivered by a technology-enabled, decentralized mechanism, that presents the greatest potential for disruption to the arbitral process as currently conceived, wedded as it is to its time-reliant principles of due process and burdened by delay and cost concerns.

14) Naturally, it is not the case that the trust element is completely eradicated from decentralized ledger transactions. However, the developing importance of confidence, in the output of decentralized technology as a proxy for procedural fairness, is an emerging phenomenon with which traditional arbitration, with its focus on trusted decision-makers and due process, cannot afford to ignore. This reckoning would usefully start with gaining awareness of the phenomenon of blockchain-based dispute resolution systems that call themselves, rightly or wrongly, "arbitration".



Blockchain arbitration platforms

15) A number of emerging platforms are starting to offer dispute resolution for blockchain-related disputes. Some of these platforms refer the on-chain dispute to an off-chain arbitrator – which is similar to traditional arbitration (<https://www.jur.io>). Others offer a service of on-chain peer-to-peer dispute resolution, whereby the dispute is referred to a panel of (often anonymous) blockchain users randomly selected who are incentivized to come to a consensus decision (<https://www.kleros.io>). Both models provide decisions in a matter of days – an enormous saving of time and costs.

16) It is important to emphasise that, as things stand currently, on-chain dispute resolution is being used primarily for crypto-related disputes. It comes with little or no due process guarantees – meaning that the immediacy of dispute resolution by peers who are not trained to handle a dispute resolution procedure comes with a great deal of unpredictability and uncertainty as to the basis for any given decision. There are no requirements for equality of arms, for giving a reasoned decision or taking fairness into account.

17) That said, blockchain technology offers a welcome opportunity for traditional arbitration to diversify and adapt to the new online marketplace and become more responsive to its immediacy and efficiency.

The challenge of regulation

18) The question of blockchain governance and regulation is at the forefront of the technological agenda for many States, and for the European Union. For all its efficiency, on-chain self-enforcement of decisions presents the potential for abuse in the absence of regulation – for example, an automatic finding of damages against Consumer X for failure to make payment on time completely ignores consumer protection rights. “Letting the code run itself” therefore presents the potential of serious aggravation.

19) A related question is what format that regulation might take. There is no doubt that on-chain regulation will involve embedding a “law of software” to a large degree. Encoding legal and equitable notions such as “fairness”, “equality” and “due process” present acute challenges, at both the conceptual and practical levels.

20) “Regulatory sandboxes” are programmes set up by a regulatory agency allowing innovative start-ups in the blockchain eco-system to engage in certain activities with government agencies that might otherwise require regulatory approval. These have so far placed focused on the financial and securities law spheres but could usefully turn their attention to on-chain dispute resolution.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS QUE GENERA EL LAUDO ARBITRAL?

Un laudo que no cumpla con los requisitos mínimos, que debe contener todo documento decisonal, defrauda las expectativas de justicia, idoneidad y argumentación jurídica.

**DESCARGA Y COMPARTE NUESTRA GUÍA
“ESTRUCTURA DEL LAUDO ARBITRAL”
EN WWW.CCB.ORG.CO/CAC**

Centro de Arbitraje
y Conciliación

Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

 **Cámara
de Comercio
de Bogotá**
#SoyCámpresaria





ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, WILSON RUÍZ OREJUELA

Wilson Ruiz Orejuela

Ministro del Justicia y del Derecho

Las iniciativas legislativas, en materia de arbitraje y conciliación, optimizan el sistema de administración de justicia? ¿Por qué?

R/ Ambos proyectos de ley fueron estructurados de manera conjunta con quienes operan dichos mecanismos, con el objetivo de realmente tener un impacto en la eficiencia de los procesos que se llevan a cabo bajo el esquema de estos mecanismos de resolución de conflictos, partiendo de la base que su impulso, contribuyen de forma directa con la descongestión y eficiencia de la administración de justicia.

El proyecto del Estatuto de Conciliación optimiza el sistema de administración de justicia, ya que encontramos las normas de procedimiento que regulan esta función en los términos del artículo 116 de la Constitución Política y se definen con mayor precisión las diferentes etapas: inicio de la actuación, contenido de la solicitud, recepción y corrección de la solicitud, constancia de asunto no conciliable, citación, suspensión del término de caducidad o prescripción, designación del conciliador, asistencia y representación en la audiencia de conciliación, inasistencia a la audiencia, término para realizar la audiencia, desarrollo de la audiencia, suspensión de la audiencia. Con ello se le da mayor nivel de seguridad jurídica al

procedimiento, con lo cual se encamina al conciliador a respetar el debido proceso, y a que las partes tengan mayor acercamiento con el procedimiento.

Con referencia al proyecto de Arbitraje, ante los reiterados llamados para mitigar la barrera de acceso que implica para muchas personas el costo de este procedimiento, se propone fortalecer el Arbitraje Social, mejorar los tiempos del procedimiento, y esclarecer algunas disposiciones que en la práctica del procedimiento obstaculizaba su eficiencia y seguridad jurídica. Estos cambios fortalecen el derecho de acceso a la administración de justicia llevándolo de manera gratuita a zonas y poblaciones apartadas y permitiendo procesos ágiles como una alternativa para solución pacífica de las controversias.

Los mecanismos de resolución de conflictos (MRC) se han impulsado como un apoyo a la descongestión de justicia. ¿El arbitraje y la conciliación han cumplido con este objetivo?

R/ La conciliación, como mecanismo de resolución de controversias, ha cumplido satisfactoriamente con el objetivo de descongestionar la justicia, pues el conciliador, como tercero neutral e imparcial, tiene como función primordial el dirigir sus esfuerzos a acercar las posiciones y los intereses de las partes, ello con el fin de que las mismas lleguen a un acuerdo que, resultando favorable para ambas, les permita dirimir el conflicto, evitándose así la necesidad de acudir a los estrados judiciales.

A través del proyecto del Estatuto de Conciliación, este interés se refuerza, pues la iniciativa trae consigo, entre otros, las siguientes propuestas:

- La ampliación del ámbito de competencia de la conciliación a todos aquellos asuntos respecto de los cuales no haya prohibición legal, evitando el riesgo de excluir alguno que, siendo conciliable, no quede consagrado en la norma, lo que fortalece la utilización de la conciliación como una herramienta de acceso a la justicia, y no solo como un mecanismo alternativo de solución de conflictos.

- La ampliación del ámbito de la conciliación como requisito de procedibilidad a todos los asuntos susceptibles de conciliación, salvo excepción legal.

- La regulación de la conciliación virtual como herramienta eficaz, eficiente y económica para garantizar el acceso a la justicia.

- La creación de centros de conciliación por parte de notarios, la cual permite aumentar la oferta del servicio de conciliación.

- La creación de programas locales de justicia en equidad como medio para acercar la justicia, sobre todo, a las zonas rurales y a la población vulnerable.

- Reiterar la gratuidad de la conciliación celebrada ante los conciliadores en equidad, los servidores públicos facultados para conciliar, los centros de conciliación de entidades públicas y los consultorios jurídicos universitarios, a fin de eliminar barreras de acceso a la justicia.

De la misma manera, el arbitraje resulta ser un instrumento exitoso para contribuir a la descongestión de la justicia, pues sus características permiten impartir celeridad a los asuntos que se tramitan, los cuales, además, son adelantados por profesionales en Derecho con conocimientos específicos de la materia litigiosa, lo que ciertamente impulsa a las partes, que se ven involucradas en una controversia, a preferirlo, muchas veces, sobre la justicia tradicional.

En esta medida, ambos mecanismos presentan una alternativa pacífica y eficaz para la solución de conflictos de toda la población y el territorio, lo cual, a su vez, contribuye a una cultura de paz y una nueva perspectiva sobre la manera en la que se tramitan las controversias en una sociedad.

¿Cuáles son las principales mejoras que plantea el proyecto de reforma al Estatuto Arbitral?

R/ Las principales mejoras que plantea el proyecto del Estatuto Arbitral son:

- Tiempos del trámite: respetando los principios de celeridad y agilidad se incluyó la facultad de los apoderados para designar árbitros, toda vez que son ellos quienes conocen los centros autorizados y los árbitros inscritos en las listas; de igual forma, se exige la manifestación expresa de los árbitros sobre disponibilidad de tiempo; se establecen 15 días como plazo máximo para instalar tribunal; se limitan las suspensiones; se conceden 10 días de plazo para presentar reforma de la demanda y, finalmente, se autoriza el laudo anticipado total o parcial.

- Transparencia durante el proceso: se estableció como deber de los árbitros dar a conocer cualquier circunstancia que pueda afectar su neutralidad, imparcialidad o independencia, y no solo aquellas señaladas legalmente; además, se amplió a tres (3) años el plazo mínimo para su ocurrencia, acogiendo estándares internacionales sobre la materia.

- Facultades de los árbitros: un punto de discusión ha sido definir el momento desde el cual los árbitros adquieren las facultades jurisdiccionales; unos expertos opinan que esto ocurre desde la primera audiencia, mientras que otros sostienen que es desde la instalación

misma del tribunal. La propuesta del Gobierno se inclinó por esta segunda interpretación:

“Ha surgido la discusión acerca de cuál es el alcance de las facultades de los árbitros a partir de la instalación y hasta que se hayan declarado competentes en la primera audiencia de trámite. En este sentido se ha controvertido, por ejemplo, que puedan decretar medidas cautelares. Si se examina la ley, la misma prevé que desde la instalación los árbitros actúan como jueces pues realizan una serie de actuaciones propias de los mismos antes de declararse competentes, lo que implica que el ordenamiento les reconoce la capacidad de actuar en tal carácter antes de la primera audiencia de trámite. Por ello el proyecto precisa que desde que el tribunal se instala puede realizar todas las actuaciones necesarias para desarrollar el trámite, si es del caso decretando medidas cautelares”. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

- Honorarios: en cuanto a los emolumentos que se consignan por dicho servicio, se establece que la oportunidad para su fijación inicia desde la admisión de la demanda, y los puede recaudar el centro de arbitraje, no solo el presidente del tribunal arbitral.

- En relación con las pruebas: la iniciativa aclara la regulación sobre la prueba pericial, así como la ratificación de testimonio de acuerdo con el Código General del Proceso.

- En cuanto a las medidas cautelares, se reconoce el árbitro de Emergencia y la posibilidad de que los jueces las ordenen.

- Procesos especiales. Esta iniciativa permite aplicar reglas procesales propias para casos especiales.

- Como innovación se admite el Laudo Anticipado y la notificación por correo electrónico.

- En cuanto a las posibilidades de impugnación del Laudo, se prevé el Recurso de Anulación, el cual solo procede contra el laudo que pone fin al proceso y no contra los laudos parciales (eso dilata innecesariamente el trámite); y, además, se señala que interponer recursos no impide la ejecución del laudo.

- Se establece, además, que cuando las partes solicitan a un centro de arbitraje la constitución de un Tribunal arbitral con el fin de gestionar un conflicto, y no expresan manifestación en contrario, se están sometiendo a los parámetros y procedimientos institucionales establecidos en lo que se denomina un Acuerdo Tácito.

- Finalmente, y ante los reiterados llamados para mitigar la barrera de acceso que implica para muchas personas el costo de este procedimiento, se propone fortalecer el

Arbitraje Social, ya que, a pesar de ser poco utilizado (tal vez por desconocimiento de su existencia), es una posibilidad de fortalecer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia llevándolo de manera gratuita a zonas y poblaciones apartadas.

La tecnología se ha mostrado como un aliado para el sistema de administración de justicia. ¿Cómo se implementan los avances tecnológicos en el proyecto de reforma al Estatuto Arbitral?

R/ Desde su instalación, el Gobierno nacional liderado por el señor presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez, ha sido insistente en el propósito de impulsar una reforma integral a la administración de la justicia que acerque la institucionalidad a las comunidades, garantice el derecho fundamental de acceso a la justicia, afronte de manera ágil la descongestión de los despachos judiciales y fortalezca la ética de los operadores de justicia y una cultura de la legalidad por parte de la ciudadanía.

Dentro de las múltiples estrategias implementadas para ello, ha propuesto impulsar los métodos de solución de conflictos tal y como lo expresó a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia – Pacto por la Legalidad”. En ese sentido, desde el 2019 se presentó ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa por medio de la cual se espera fortalecer el Arbitraje tanto del orden nacional como internacional.

En este orden, el proyecto establece la posibilidad de tramitar procesos de mínima cuantía, de acuerdo con unas reglas abreviadas y por medios electrónicos. Igualmente se acogen disposiciones del Decreto 806 del 2020, en el que se establecieron las medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. Por último, se establece el deber de dar prevalencia a las herramientas tecnológicas en el proceso arbitral, siempre respetando los derechos fundamentales al debido proceso.

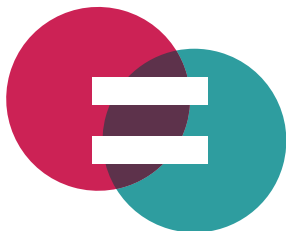
Unificar la normatividad es uno de los objetivos principales del Estatuto de Conciliación. ¿Qué impacto generará respecto a la percepción de la seguridad jurídica en la conciliación?

R/ El proyecto de ley pretende compilar en un único estatuto toda la legislación existente en materia de conciliación, promoviendo el desarrollo integral de este mecanismo de solución de conflictos como herramienta para acercar la justicia a los ciudadanos y construir una cultura de legalidad, pues actualmente la regulación de la conciliación en Colombia se encuentra dispersa en normas

de diversos niveles, destacándose las siguientes: la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1395 de 2010, y Ley 1801 de 2016; y el Decreto 1818 de 1998, Decreto 2511 de 1998, Decreto 1908 de 2000, Decreto 1716 de 2009, Decreto 1829 de 2013, y Decreto 1069 de 2015.

Varias de dichas disposiciones normativas han sido modificadas, otras han sido derogadas, ya sea de manera expresa o tácita, otras han sido recopiladas en normas posteriores, y otras continúan vigentes parcial o totalmente.

Lo anterior ha generado una proliferación normativa que impide tener claridad respecto a la regulación vigente, lo que necesariamente exige integrar en un solo cuerpo normativo, y de manera armónica, toda la regulación aplicable en la materia, lo que otorga mayor confianza en el proceso conciliatorio y certeza en la justicia.



SERVICIOS DE AMIGABLE COMPOSICIÓN

¿QUÉ BUSCA?

Definir las controversias que se generen sobre la forma de cumplimiento de los contratos o la responsabilidad de los contratantes.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?

Particulares, entidades públicas o quienes desempeñen funciones administrativas, siempre que hayan incluido un pacto de amigable composición en el contrato o se pongan de acuerdo para llevar el conflicto ya existente al amigable componedor.

¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD?

radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co

¿QUÉ DEBO ANEXAR?

El interesado debe presentar su solicitud, identificando los aspectos a ser resueltos por el panel, los datos de los involucrados y las pruebas que allega o solicita. Deberá anexar copia del recibo de pago de los gastos iniciales del Centro, del pacto de amigable composición y demás documentos que considere pertinentes.

Conoce toda la información en:

www.centrodearbitrajeconciliacion.com

o en la línea: 7458019

Centro de Arbitraje
y Conciliación

 Cámara
de Comercio
de Bogotá

#SOYEMPRESARIO

#ESTAEMPRESAEDETODOS



ANÁLISIS DE LA DECISIÓN PROFERIDA EN EL CASO ECO ORO MINERAL CORP. VS. COLOMBIA (ICSID CASE No. ARB/16/41)

Luis Felipe Estrada Escobar

El pasado 9 de septiembre se profirió el laudo que resolvió de fondo -aunque de manera parcial- la controversia surgida entre la minera canadiense Eco Oro Mineral Corp. y la República de Colombia en relación con la actividad minera que la primera venía desarrollando en el páramo de Santurbán (proyecto Angostura), en ejecución del contrato de concesión minera No. 3452 del 8 de febrero de 2007.

Básicamente, la empresa minera sostuvo que las medidas tomadas por diferentes autoridades colombianas para proteger el páramo de Santurbán fueron violatorias de los artículos 805 (estándar mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario) y 811 (prohibición de expropiación sin compensación) del tratado de libre comercio suscrito entre Canadá y Colombia (TLC).

En lo relativo a la alegada expropiación indirecta, el Tribunal encontró que:

- Si bien para la fecha de entrada en vigencia del TLC (15 de agosto de 2011) las actividades mineras en zona de páramo estaban suspendidas por cuenta de diferentes medidas tomadas por el Estado Colombiano, lo cierto es que para ese momento Eco Oro ya había adquirido el derecho de explorar y explotar minerales en la totalidad del área concedida en virtud del contrato de concesión No. 3452, sujeto a que para la etapa de explotación se obtuvieran la aprobación del PTO (Programa de Trabajos y Obras) y la licencia ambiental requerida.

- Las medidas tomadas por diferentes autoridades colombianas (entre ellas, la Resolución 2090/14 expedida por el Ministerio de Ambiente, la Ley 1753/15, la Sentencia C-035/16 y la Resolución 829/ expedida por la ANM), privaron a Eco Oro de ejecutar la etapa de explotación; etapa que si bien estaba sujeta a la aprobación del PTO y a la licencia ambiental, las chances de obtener dichas aprobaciones fueron llevadas a su mínima expresión por cuenta de las medidas cuestionadas, situación que determinó la pérdida total del valor de los derechos del inversionista y, por ende, bien podría ser calificada como una expropiación indirecta.

- No obstante lo anterior, al analizar la aplicación del Anexo 811 (2) (b) del TLC, el Tribunal llegó al convencimiento de que las medidas tomadas por Colombia -a pesar de calificar como expropiatorias a la luz del artículo 811-, fueron tomadas: (i) de buena fe, (ii) sin que ello comportara una decisión discriminatoria respecto de los inversionistas extranjeros y (iii) en ejercicio legítimo de las facultades regulatorias encaminadas a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales no renovables, facultades que el mismo tratado le reconoció a los estados firmantes.

- De esta manera, no prosperaron las pretensiones de Eco Oro que buscaban que se declarara la existencia de una expropiación indirecta.

Por su parte, al analizar si el Estado colombiano violó o no el artículo 805 del tratado, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones:

- El estándar mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario no es estático y, por el contrario, es un concepto que está en constante

evolución. Sin embargo, en los términos en que el estándar fue pactado en el TLC, debe tenerse en cuenta que el mismo no puede ser entendido como un estándar de “trato justo y equitativo” autónomo, sino que debe entenderse y aplicarse como estándar de trato mínimo, haciendo imperativa una interpretación restrictiva del mismo.

- A la luz del artículo 805 del TLC, el inversionista podía esperar razonablemente que Colombia promovería la inversión extranjera y garantizaría un entorno regulatorio predecible, sin que ello significara una regulación estática, o la imposibilidad del Estado colombiano de ejercer legítimamente la actividad regulatoria para proteger bienes e intereses públicos, siempre que dicha actividad no implicara la falta de transparencia, la frustración de expectativas legítimas, la adopción de medidas arbitrarias o de cambios regulatorios abruptos.

- Al analizar en concreto si Colombia frustró expectativas legítimas que Eco Oro pudiera tener en relación con el inicio de la etapa de explotación, el Tribunal no sólo advirtió que el Estado sometió al inversionista a una auténtica “montaña rusa regulatoria” (Par. 791), sino que también concluyó que actuó de manera inconsistente pues, aún a la fecha en que se profirió el laudo, continuaba en mora de delimitar definitivamente el páramo de Santurbán, incumpliendo su obligación de garantizar a Eco Oro un ambiente regulatorio estable y predecible.

- Para los efectos del artículo 805 del TLC, se calificó la conducta del Estado colombiano como manifiestamente arbitraria, al evidenciarse que los diferentes ministerios o entidades involucradas no han actuado de una manera coordinada respecto del objetivo de proteger los páramos pues, por una parte, promueven la actividad minera para garantizar los beneficios económicos que las inversiones en ese sector traen al país, pero por otra, no se ha cumplido con el propósito de delimitar las zonas de páramos en donde esa actividad está prohibida.

- Agregó el Tribunal que el completo fracaso de una política pública coordinada, lo único que ha hecho es impedir la protección efectiva de las fuentes hídricas, el sustento de los campesinos y mineros artesanales, así como de los puestos de trabajo que crea la actividad minera legal, y lo único que ha hecho es contribuir con la proliferación de la actividad minera ilegal, la que a su turno resulta más peligrosa para los páramos.

- Así, se concluyó que Colombia ha mostrado un desdén total por los principios básicos de justicia y coherencia, con base en lo cual se determinó que no se otorgó a Eco Oro un trato de acuerdo con el estándar mínimo según el derecho internacional consuetudinario, incluyendo un trato justo y equitativo, declarándose, así, el incumplimiento del artículo 805 de TLC.



Una vez adoptada esa decisión, el Tribunal se concentró en analizar el alcance del artículo 2201 (3) del TLC, en el que básicamente se indica que para los propósitos del Capítulo 8 (en donde están reguladas las prohibición de expropiación y el estándar de trato justo y equitativo) que ninguna de las provisiones acordadas podrá ser interpretada de tal manera que impida a los Estados firmantes adoptar medidas para proteger, entre otros aspectos, el medio ambiente y los recursos no renovables, siempre que estas no sean arbitrarias o discriminatorias.

La discusión en torno al alcance de esta provisión del TLC era determinante en este caso, por las siguientes razones:

- Desde la Orden Procesal No. 11 (proferida el 28 de enero de 2020), el panel arbitral le solicitó a las partes pronunciarse sobre su alcance y, en concreto, las requirió para que presentaran sus consideraciones en torno a por qué en el artículo 2201 (3) no se había hecho una salvedad igual a la que contiene el artículo 2201 (4), en el que expresamente se dice que cuando los Estados firmantes tomen medidas respecto de los nacionales del otro Estado examinadas a preservar el orden público, siempre y cuando no sean arbitrarias o injustificablemente discriminatorias, todos los estándares de protección consagrados en el Capítulo 8 permanecerían vigentes y aplicables.

- En otros términos, lo que se preguntó el Tribunal desde la Orden Procesal No. 11, fue si el entendimiento correcto del artículo 2201 (3) era que en aquellos casos en donde el Estado receptor de la inversión tomara medidas para proteger, entre otros aspectos, el medio ambiente y los recursos no renovables, no se aplicarían los estándares consagrados en el Capítulo 8; duda que surge precisamente al evidenciar que en el artículo 2201 (4), que contempla la misma posibilidad respecto de medidas encaminadas a preservar el orden público, sí se indica expresamente que los estándares de protección del Capítulo 8 permanecerán vigentes y aplicables.

- El Tribunal se decantó por concluir que los estándares del Capítulo 8 se conservan vigentes y aplicables a los supuestos del artículo 2201 (3). Para ello se basó en el artículo 31 (1) de la Convención de Viena y en el Preámbulo del TLC, para decir que si la intención de las partes hubiera sido la de inaplicar el Capítulo 8 a los supuestos contemplados en el artículo 2201 (3), lo hubieran hecho de manera expresa, como lo hicieron, por ejemplo, para el supuesto consagrado en el Anexo 811 (2) (b).

Posteriormente, al analizar el tema de los daños, el Tribunal sostuvo que:

- Encontró que la solicitud de indemnización elevada por Eco Oro no era necesariamente especulativa, aún cuando era claro que no hubiera podido iniciar la etapa de

explotación mineral sin contar con el PTO aprobado y con la licencia ambiental, instrumentos con los que no contaba.

- No cuenta con los elementos necesarios para determinar si los daños sufridos por Eco Oro realmente provienen de la pérdida de la oportunidad al haberse visto en imposibilidad de aplicar para obtener la licencia ambiental respectiva o por pérdidas directas adicionales que sean consecuencias de la violación del artículo 805 del TLC por parte de Colombia.

- Se optará por usar la metodología del análisis comparativo de precios de transacciones ejecutadas sobre proyectos similares, en los términos que lo propuso Eco Oro, sin embargo, manifestó el Tribunal que no cuenta con elementos suficientes para usar esa metodología para evaluar la pérdida de la oportunidad experimentada por el inversionista al ver frustrada la posibilidad de aplicar para la obtención de la licencia ambiental.

- Igualmente se admitió la pretensión de Eco Oro relativa a que se condene a Colombia a pagar intereses a una tasa "comercial razonable".

En ese sentido, se decidió abrir una nueva etapa del procedimiento para que las partes presenten sus consideraciones y absuelvan unas preguntas específicas elevadas por el panel arbitral, para, posteriormente, decidir el asunto de los daños.

Finalmente, vale la pena resaltar que la decisión fue bastante controvertida, pues dos de los árbitros emitieron salvamentos parciales de voto:

- El árbitro H. Grigera Naón consideró que en este caso, además de la violación del artículo 805 del TLC, también se configuró una expropiación indirecta.

- Por su parte, el árbitro F. Sands consideró que no se presentó ni violación al artículo 805, ni al 811, mostrando con especial énfasis que, a su juicio, el alcance que el Tribunal le dio al estándar de trato mínimo a la luz del derecho internacional consuetudinario fue extensivo a supuestos que originalmente ese concepto no contempla, en concreto, a aspectos propios del estándar autónomo de trato justo y equitativo.





GENERALIDADES DE LAS DECISIONES DE LOS CONTRATOS OBRA PRIVADA: ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES

El grupo de investigación ANCLA (análisis del conflicto y los laudos arbitrales), liderada por el área de gestión del conocimiento del CAC, presenta su nueva investigación sobre las decisiones en obra privada, resultado del análisis de laudos arbitrales que adelanta de forma permanente.

A continuación, se presentan reflexiones, tendencias y análisis sobre las decisiones arbitrales que pueden ser de interés para la comunidad arbitral y los empresarios del sector.

1. MODALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra puede tener diferentes modalidades según la forma en que se remunera al contratista y los riesgos que asumen las partes, a saber: precio global o precio único prefijado; bajo el sistema de precios unitarios; contratos por costo y por presupuesto o administración delegada (Cfr. Laudo, 2019, Constructora Concreto S.A. contra Promotora Parque Washington Barranquilla S.A.S).



a) CONTRATO DE OBRA PACTADO A PRECIO GLOBAL, TAMBIÉN DENOMINADO A PRECIO ÚNICO PREFIJADO

El contratista recibe el pago del valor pactado por concepto de la totalidad de la obra. Se incluyen todos los costos y gastos necesarios para su ejecución (Cfr. Laudo, 2018, CDI Ltda. contra Inversiones y Valores Wilcorts S.AS). El contratista, por tanto, no puede reclamar los mayores valores en que haya incurrido debido a que asumió el riesgo del aumento de dichos costos. De los laudos objeto de análisis sobre esta modalidad resaltamos dos reglas:

- El precio a pagar por la obra comprende, además de la utilidad, todos los costos y gastos en que incurra el contratista. La tendencia decisonal arbitral indica que la invariabilidad del precio no es óbice para proteger los derechos del contratista cuando ha sufrido perjuicios que no le son imputables durante la ejecución del negocio, como lo serían los hechos imprevistos que superan el alea normal y ordinario del contrato y los incumplimientos del contratante (Cfr. Laudo, 2017, Hidro Consulta S.A.S. contra Procesos y Diseños Energéticos S.A)

- Los tribunales han comprendido que no todas las actividades inherentes a un proyecto constructivo deban estar a cargo del contratista, principalmente aquellas que no fueron expresamente pactadas y que son extraordinarias, sustanciales y económicamente gravosas. Estas deberán ser remuneradas como actividades adicionales (Cfr. Laudo, 2019, de Odicco Ltda. contra Patrimonio Autónomo Fideicomiso Proyecto Construcción Vivienda Nueva administrado por Fidubogotá S.A)

b) SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

La forma de retribución convenida resulta de multiplicar las cantidades de construcción ejecutadas por el precio unitario que correspondan a cada actividad. El contratista se obliga a desarrollar las obras señaladas en el contrato.

El constructor se compromete a sostener los precios unitarios estipulados en cada uno de los ítems de la obra, aun cuando estos puedan sufrir alzas. Este es uno de los riesgos asumidos por el contratista, propios de esta modalidad.

El contratante se obliga al pago de las cantidades ejecutadas, asume el riesgo derivado de la diferencia entre las cantidades que pudieran estimarse antes de la fase de ejecución y las resultantes a su finalización.

c) EL CONTRATO POR COSTO

En esta modalidad el ejecutor de la obra se obliga a su construcción y, como remuneración, el dueño de la obra le pagará los costos en los que ha incurrido más una suma variable o fija de acuerdo con su utilidad.

d) POR PRESUPUESTO O ADMINISTRACIÓN DELEGADA

El administrador delegado presta los servicios para la construcción y actúa en nombre del dueño de la obra; dentro de sus funciones están las de ejecutarla, asumir su buen resultado y actuar como director técnico. No es un contratista independiente, por tanto, no asume los riesgos propios de esta figura, como la variación del precio de los materiales o el bajo rendimiento del personal.

Este contrato comprende dos grupos de obligaciones principales: las propias del contrato de “arrendamiento para la confección de una obra material”, cuyo objeto principal es la ejecución de la obra contratada dentro de las especificaciones y los plazos convenidos y las que conciernen a la administración de los fondos del dueño de la obra, que deben invertirse para la ejecución de la misma y que se regulan por las normas relativas al contrato de mandato.

A juicio del tribunal arbitral al que hacemos referencia, esta mixtura de obligaciones, debe ser entendida de acuerdo con la clasificación que hizo la Corte Suprema de Justicia¹ sobre la combinación de diferentes tipos de contrato o de prestaciones correspondientes a diversos tipos de convenios.

La administración delegada es un contrato gemelo, pues combina prestaciones propias del arrendamiento para la confección de una obra material y del contrato de mandato, a cambio de una única prestación. En consecuencia, se aplicarán las reglas del contrato de obra a las actividades de ejecución, dirección y vigilancia de la obra - obligaciones de resultado - y las reglas del mandato a la contratación que se hace a nombre y por cuenta del dueño de la obra - obligaciones de medio -.

Frente a este contrato existe un entendimiento diferente por parte de un tribunal que lo consideró como un contrato de obra en el que pueden pactarse obligaciones “que participan de distintas relaciones obligatorias”, cuando esto sucede, se deberán aplicar “las reglas de los respectivos contratos sin que con ello se desnaturalice la convención”. Así las cosas, si la obligación a analizar es de medio, “sea cual fuere la denominación que se le diere al negocio jurídico, se accederá a la reglamentación del caso” (Cfr. Laudo, 2004, Conavi Banco Comercial y de Ahorro S.A. contra Concreto S.A.).

2. TRATAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RESULTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIVADA

Como punto de partida se plantean las siguientes preguntas ¿es el contrato de obra privada de resultado? o ¿es posible que este incluya obligaciones de medio?

Los tribunales arbitrales son concluyentes en afirmar que, primero, debe “estarse a lo pactado por las partes”, pero lo

¹ Sentencia del 31 de mayo de 1938 de la Corte Suprema de Justicia que se puede consultar en la Gaceta Judicial, tomo XLVI, páginas 670 y siguientes.

habitual al celebrar un contrato de este tipo es que se pacte una obligación de resultado, que consiste en entregar la obra en un estado funcional, en el plazo estimado y que, además, cumpla con las especificaciones técnicas.

Los árbitros suelen abordar el estudio de la obligación de resultado en los contratos de obra privada con la siguiente metodología:

- 1) revisan lo pactado por las partes
- 2) establecen las diferencias entre las obligaciones de medio y resultado, en el contexto del contrato de obra
- 3) explican cómo se alcanza el estándar de cumplimiento de la obligación
- 4) indican las causales eximentes de responsabilidad

Los árbitros, al abordar los puntos 3 y 4 de la metodología, desarrollan la regla de derecho aplicable al caso y, con base en ella, determinan si se cumplieron o no las obligaciones contractuales, con las consecuencias que esto trae.

En el laudo que decidió la controversia entre la Constructora de Infraestructura Vial S.A.S. - CONINVIAL S.A.S. contra Gisaico S.A. de marzo de 2020 se puede ver ejemplificada esta situación. Recordemos que este laudo decide algunas de las controversias ocasionadas por el desplome del puente de Chirajara (Cfr. Laudo, 2020, Constructora de Infraestructura Vial S.A.S. - Coninvial S.A.S. contra Gisaico S.A.).

El tribunal estimó que el constructor tenía a su cargo una típica obligación de resultado, la cual se concretaría con la entrega de la construcción conforme a las especificaciones técnicas pactadas, lista para funcionar y en el plazo dispuesto en el contrato.

No entregar la obra, en principio, implica el incumplimiento de un contrato enmarcado en obligaciones de resultado. Por ello, el tribunal arbitral invirtió la carga de la prueba con base en la regla según la cual, si se trata de una obligación de esta índole, la culpa del deudor de la obligación se presume.

El constructor debe destruir el nexo causal entre la conducta imputada y el daño causado para exonerarse. Para lograrlo, debe demostrar la causa extraña que le impidió cumplir con el resultado, bien sea que aduzca la ocurrencia de fuerza mayor, caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima (que para el caso concreto se conoce como culpa exclusiva del dueño).

Para determinar si la obligación en cabeza de Gisaico S.A. era de resultado, el tribunal realizó algunas precisiones sobre los principios Unidroit y cómo estos ayudan al juzgador a determinar si las partes han pactado una obligación de este tipo.

El estándar descrito en el paso 3 de la metodología que usan los tribunales arbitrales se estructura de la siguiente manera:

1. El juzgador interpreta las cláusulas del contrato para verificar si se han pactado o no obligaciones de resultado.

1.1. Si no lo encuentra de manera expresa, puede acudir a otras fuentes, como los principios Unidroit.

2. Una vez alcance certidumbre sobre si es una obligación de resultado, debe presumir la culpa del deudor e invertir la carga de la prueba.

3. En ese contexto, establece que el constructor sólo se eximirá de la responsabilidad si destruye el nexo causal entre la conducta imputada y el daño irrogado, lo cual sólo se lograría si se prueba la presencia de un elemento extraño.

El tribunal arbitral también debe estudiar los argumentos de fuerza mayor o caso fortuito. Es claro que no cualquier circunstancia configura estos fenómenos, pues debe tratarse de un hecho imprevisible e irresistible. Incluso, deben presentarse coetánea o concomitantemente para conceder su eficacia.

Cuando el dueño de la obra no presta su debida colaboración se desestima la responsabilidad del constructor. Esta es una de las circunstancias particulares que se ha encontrado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de resultado.

En aquellos eventos en los que se estableció que la cooperación de quien encarga la obra era necesaria, y éste no la prestó, se consolida la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva del dueño (Cfr. Laudo, 2002, Augusto Ruiz Corredor y Cia. contra Constructora Andrade Gutiérrez).

En síntesis, una vez analizado el espectro decisional de algunos tribunales arbitrales, se evidencian reglas de derecho claras, que llegan a formar una tendencia en cuanto a las obligaciones de las partes en el contrato de obra privada (Cfr. Laudo, 2002, Instituto Nacional de Vías – INVÍAS contra HB estructuras metálicas S.A.S, Laudo, 2018, CORA S.A.S contra Mansarovar Energy Colombia LTD y otros)

Dicha tendencia lleva a reconocer que las partes estructuran este tipo de contratos bajo el marco de obligaciones de resultado, y que de su desarrollo no se espera menos que la entrega de una obra lista para ser usada.

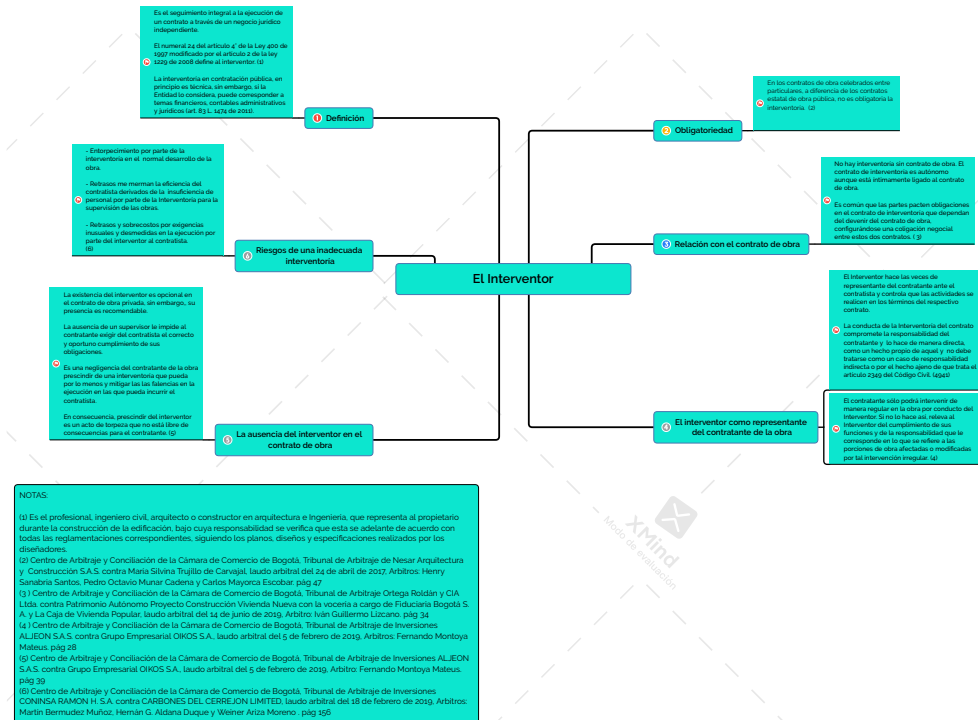
Entre las reglas de derecho se encuentran las siguientes:

- La obligación de resultado en el contrato de obra privada se materializa cuando el constructor entrega la obra en el plazo acordado, con las especificaciones técnicas convenidas y lista para ser puesta en funcionamiento.
- Cuando se trata de obligaciones de resultado basta la prueba del contrato. El hecho de que el dueño de la obra demande el incumplimiento contractual, en este tipo de contratos, lleva al juzgador a un escenario donde debe, al momento de hacer la valoración probatoria, encuadrar la culpa en cabeza del constructor, siempre que encuentre probado el vínculo contractual. Éste, a su vez, debe probar la causa extraña, no basta la muestra de diligencia.

• El dueño de la obra, cuando así lo contemple el contrato, debe prestar su cooperación y colaboración para alcanzar el resultado convenido. Si no lo hace, puede generarse un evento eximente de responsabilidad.

• Se debe cumplir con la entrega de la obra, a pesar de que un tercero haya realizado obras previas, mas aún si contractualmente se traslada el riesgo de estas al contratista.

3. LA INTERVENTORIA



4. CONSIDERACIONES A LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA

El plazo convenido por las partes en los contratos de obra es consecuencia de la elaboración de un plan detallado de trabajo (PDT) en el que se enumeran y planean todas las actividades – simultáneas y sucesivas – a ejecutar. Es frecuente que circunstancias de distinta naturaleza impacten en el cumplimiento del PDT haciendo que el contratista emplee más tiempo del pactado. Las consecuencias inmediatas son los sobrecostos, así como el aumento del tiempo originalmente previsto en la obra. Como lo resalta el tribunal que falló la controversia entre Noarco y Sacsá, 2017:

"sin duda el factor tiempo es uno de los determinantes en el precio del contrato. El oferente estructura sus

costos según el periodo dispuesto para la ejecución. Si este cambia, así la obra sea la misma, por lo general se causan unos costos mayores a los previstos".

El concepto de mayor permanencia en obra se emplea de manera genérica a los costos ocasionados por la sobreestadía del contratista, sin embargo, estos se clasifican en dos:

- los directos, que corresponden al personal dedicado a la obra propiamente dicha y a la maquinaria empleada
- los indirectos, derivados de los costos administrativos que incluyen rubros tales como: pólizas de seguros, bodegas, mantenimiento, limpieza, oficinas, personal administrativo y de soporte

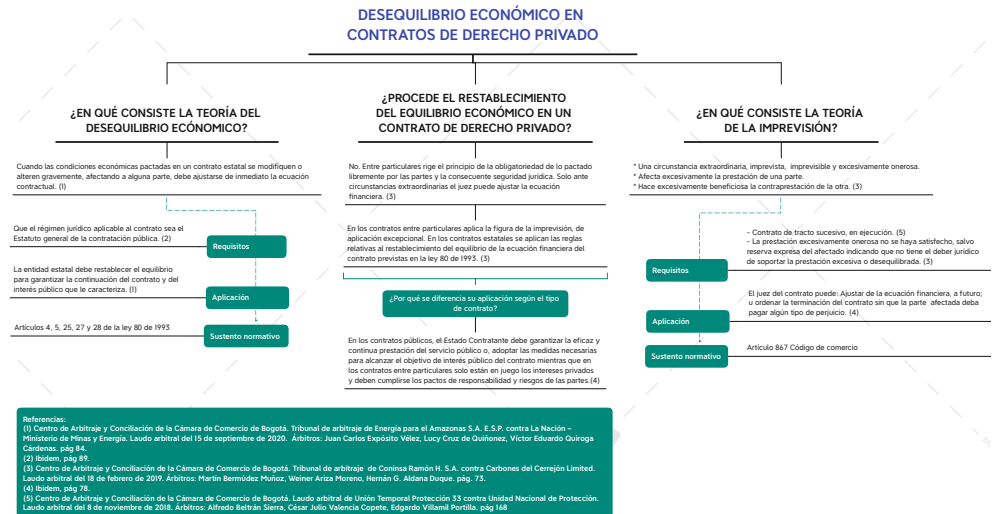
Los sobrecostos por mayor permanencia en obra no son exclusivos de los contratos pactados bajo el sistema de precios unitarios. En los contratos bajo la modalidad de precio global fijo – que como ya lo indicamos – el riesgo de mayor permanencia en obra es asumido por el contratista, se reconocen estos sobrecostos en tanto sean consecuencia de circunstancias imprevisibles surgidas en la etapa de ejecución que modifiquen el diseño inicial y que correspondan a hechos no atribuibles a la falta de previsión o diligencia del contratista (Cfr. Laudo, 2017, Compañía de Puertos Asociados s.a., contra Centra Ingeniería y Construcción).

El concepto de mayor permanencia en obra ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en donde se impone, a quien la alega, la carga de acreditar los siguientes cuatro elementos: “(i) la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada; (ii) que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista, e imputables a su contraparte; (iii) que el contratista cumpla con su débito contractual, y (iv) que se acrediten los mayores extra costos generados por la mayor permanencia en la obra” (Consejo de Estado, 2018, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente. 17.031).

Esta regla de derecho ha sido recogida por los tribunales arbitrales en aquellas controversias derivadas de la ejecución de contratos de obra, aun cuando este se rija por las reglas del derecho privado (Cfr. Laudo, 2017, Ci Grodco S. En C.A. Ingenieros Civiles y Construcciones Sánchez Domínguez – Sando S.A. Contra Isagén S.A. E.S.P.).

En las controversias sobre contratos de obra que se rigen por la normativa de contratación estatal, la misma sentencia advierte la necesidad de demostrar la afectación al equilibrio económico del contrato. Sin embargo, al ser la figura del desequilibrio económico incompatible con los contratos que se rigen por el derecho privado, el análisis que hacen los tribunales arbitrales sobre la mayor permanencia en obra se hace a través de las reglas relativas a la responsabilidad contractual, indemnizando al contratista que se ve perjudicado por el lucro cesante que experimenta por el incremento de los costos de ejecución al tener que mantener su personal, maquinaria y herramientas improductivos o con una eficiencia menor a la planeada (Cfr. 2015, C & CO DRILLING S.A.S. Contra TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD).

5. EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO





6. LA RETENCIÓN EN GARANTÍA

Es habitual encontrar en contratos de obra una cláusula denominada “retención en garantía”, según la cual, el contratante retiene un porcentaje de los pagos parciales que realiza al contratista durante la ejecución del contrato.

La retención en garantía crea un fondo constituido con el dinero retenido y no pagado al contratista para que el contratante descuente en cualquier momento (sin necesidad de requerimiento previo, privado o judicial) sumas que el contratista adeude o debiere pagar como gastos, multas, reembolsos derivados de un incumplimiento total, parcial o cualquier otro escenario acordado por las partes sobre el que se haga extensiva la garantía.

Uno de los aspectos que mayor controversia suscita entre las partes contratantes es la devolución del dinero retenido al contratista. Sobre lo que hay que mencionar que las partes son libres de determinar si al momento de la restitución de los recursos retenidos se genera algún tipo de intereses, reajustes o rendimientos.

Hasta que el contratante no tenga certeza del cumplimiento de las obligaciones del contratista, el primero no procederá a realizar la devolución de los dineros, por esta razón, es común que se pacten como condiciones para la restitución:

- Suscripción de acta de entrega y de liquidación del contrato.
- Que la obra sea entregada, aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del contratante o el interventor.
- Vencimiento de un plazo en días o meses posterior al recibo a satisfacción.

Las condiciones aprobadas por el interventor, evitando supeditarlas a la mera aprobación del contratante “implicaría considerar que la obligación de restituir el depósito en garantía está sujeta a una condición meramente potestativa y nula en los términos del artículo 1535 del Código Civil” (Cfr. Laudo, 2019, Coninsa Ramon H. S.A. Vs Carbones Del Cerrejon Limited).

Al cumplirse las condiciones suspensivas y plazos establecidos por las partes en el contrato, surge el derecho para el contratista, tanto de reclamar como que se le restituyan los montos retenidos. Si el contratante no satisface el derecho de restitución del contratista, se encontrará en mora por no cumplir la obligación dentro del término estipulado, de conformidad con el artículo 1608 del Código Civil.

Cumplida o no la condición para la restitución del depósito, cabe preguntarse ¿cuál es el alcance de la cobertura de la retención en garantía? ¿va hasta la

terminación a satisfacción y su consecuente declaración en el acta de liquidación o tiene la capacidad de otorgar garantía sobre fallas posteriores?

Es habitual que la retención en garantía esté prevista para el pago de errores en la ejecución de las labores contratadas. Existe también la garantía de estabilidad y calidad de las obras que tiene por objeto la reparación de los daños que deriven de defectos en la calidad de las obras ya recibidas a satisfacción por el contratante.

Estas operan en momentos diferentes, pues mientras la primera busca amparar un riesgo propio de la ejecución del contrato, la segunda cubre eventos postcontractuales de calidad (...). Las garantías mencionadas amparan prestaciones distintas, por lo que salvo pacto en contrario, no podría pretenderse que la “retención en garantía” cobije la estabilidad de las obras luego de cumplidas las condiciones y plazos para su restitución, puesto que ese no es el objeto de ella y para tal propósito se contempla otra garantía diferente como lo es la de Estabilidad y Calidad de las Obras (Cfr. Laudos, 2019, Asoincon S.A.S. Vs Grupo Empresarial Oikos S.A.S.).

Uno de los argumentos por parte del contratante para no devolver al contratista la retención en garantía, producto de fallas constructivas que se evidencian con posterioridad a la liquidación del contrato y recibo a satisfacción, es la compensación como medio de extinguir las obligaciones. Al respecto, el Tribunal de Arbitraje (10 de junio de 2019) Radicado No.15666, analizando esta situación consideró que en el caso particular no se acreditaron los requisitos que establece el art. 1715 del Código Civil, así:

De tal manera, que al no encontrarse en el expediente documento contentivo de la deuda a cargo de la parte CONVOCANTE ni prueba de la existencia o de su exigibilidad, mal podría el presente Tribunal, decretar cumplidos los requisitos legales que dan lugar a la procedencia de la compensación legal, al no identificar la existencia de deudas recíprocas ni que las mismas sean de las definidas como de género (...). Por otra parte (...) la liquidez de las deudas se refiere a que las deudas deben ser ciertas y determinadas en su cuantía, lo que se aprecia cuando por una simple operación aritmética, permite determinar la existencia recíproca de las deudas y su valor. De tal manera que la compensación no procedería cuando se enfrentan obligaciones originadas en el pago de una suma de dinero por una parte y por la otra, la ejecución de una tarea específica. (Negrilla fuera de texto)

En consecuencia, no prosperó la excepción de compensación puesto que no se presentan los parámetros señalados en el artículo 1715 del Código Civil, ordenando la devolución de lo retenido en garantía.

BIBLIOGRAFÍA

- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2019, Tribunal de Arbitraje de Constructora Conconcreto S.A. contra Promotora Parque Washington Barranquilla S.A.S.
- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de CDI Construcciones Diseños e Interventorias Ltda. contra Inversiones y Valores Wilcorts S.A.S.
- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Hidro Consulta S.A.S. contra Procesos y Diseños Energéticos S.A.
- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Odicco Ltda. contra Patrimonio Autónomo Fideicomiso Proyecto Construcción Vivienda Nueva administrado por Fidubogotá S.A.
- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2020, Tribunal de Arbitraje de Conavi Banco Comercial y de Ahorro S.A. contra Conconcreto S.A..
- Centro de arbitraje y conciliación Cámara de Comercio de Bogotá, 2002, Tribunal de Arbitraje de Constructora de Infraestructura Vial S.A.S. - CONINVIAL S.A.S. contra Gisaico S.A.
- Centro de arbitraje y conciliación Cámara de Comercio de Bogotá, 2002, Tribunal de Arbitraje de Augusto Ruiz Corredor y Cia contra Constructora Andrade Gutiérrez.
- Centro de arbitraje y conciliación Cámara de Comercio de Bogotá, 2002, Tribunales de Arbitraje de Instituto Nacional de Vías – INVIAS contra HB estructuras metálicas S.A.S.
- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, Tribunal de Arbitraje de NOARCO S.A. contra SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A.
- Sentencia del 20 de noviembre de 2008, Expediente. 17.031, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN



Álvaro Gutierrez Godoy
(coordinador de la publicación)

Abogado con posgrados en derecho de los negocios y legislación Financiera. Amigable componedor del CAC -CCB y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. También es conciliador. En la actualidad es socio de Gutiérrez Godoy Abogados S.A.S.



David Reyes Hincapié

Abogado en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Universidad de Caldas. Integrante grupo de investigación ANCLA.



Rocío Pinzón Florez

Abogada, especialista en derecho administrativo y magister en Arbitraje Internacional. Secretaria de Tribunales Arbitrales e investigadora del CAC de la CCB. Se desempeñó como auxiliar judicial en las Altas Cortes, fue asociada de la Firma Silva Abogados y asesora independiente. Actualmente, abogada de defensa judicial en la Agencia Nacional de Infraestructura.



Jessica Andrea Vargas

Rueda Ordóñez Abogados firma especializada en arbitraje y derecho de seguros. Integrante del consejo directivo de la Red Juvenil de Arbitraje y del grupo de investigación ANCLA del CAC-CCB.



Jeffrey Juliam Pantano Carrillo

Abogado y estudiante de la especialización en derecho financiero y bursátil. Actualmente trabaja como asistente de investigación en el Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura del Transporte en la Universidad Externado.



Michelle Bernier

Abogada, estudiante de la Maestría en Derecho y Negocios Internacionales, con doble titulación en la Universidad Europea del Atlántico y la Universidad Iberoamericana de Mexico. Es abogada enfocada en el derecho internacional y derecho comercial del Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solutions y Chief Operations Officer en Adrianople Group.

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO EN LA RED JUVENIL DE ARBITRAJE: RETOS Y COMPROMISOS

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá le da la bienvenida a los nuevos miembros del consejo directivo de la Red Juvenil de Arbitraje, quienes llegarán a ser los voceros y representantes de las nuevas generaciones del arbitraje en Colombia. Estamos seguros de que, con un trabajo mancomunado, lograrán fortalecer este espacio que año tras año ha generado espacios académicos, de investigación y promoción del arbitraje.

Extendemos un sincero agradecimiento y reconocimiento a los miembros del anterior consejo, quienes se destacaron por su innovación, trabajo en equipo y persistencia.

Le preguntamos a los nuevos integrantes del consejo sobre los retos del arbitraje juvenil en Colombia y su compromiso con la Red y esto nos respondieron:



Mario Alejandro Vanegas

La juventud está llamada a demostrar que el arbitraje no es solo practicado y estudiado por los abogados de renombre, sino también por todos nosotros que, como siguiente generación, buscaremos ampliar su ejercicio y mostrarle a la comunidad los retos que plantea y los beneficios que trae.

Como miembro del Consejo Directivo de la RJA buscaré la participación efectiva de todos los miembros de nuestra organización, procurando espacios de conocimiento y fraternidad para lograr que los apasionados por el arbitraje puedan acceder realmente a oportunidades de crecimiento profesional.



Daniela Molina Trujillo

Aunque a veces no lo percibamos, el mundo del arbitraje está lleno de oportunidades, sin embargo, una gran cantidad de esos espacios suelen perderse debido a que su difusión no se realiza por los medios adecuados, haciendo que los jóvenes los desconozcan.

Como miembro del Consejo Directivo de la Red tengo el propósito no sólo de conectar a las nuevas generaciones de abogados, interesadas en el arbitraje, con espacios que permitan su desarrollo académico y profesional, sino de, además, crear nuevas oportunidades que contribuyan al impulso de sus carreras.



Andrés Segura Segura

El arbitraje no es tan conocido ni aplicado entre los pequeños y medianos comerciantes, cosa que podría cambiar con dos cosas: la construcción de laudos que sean de fácil lectura y entendimiento para esos comerciantes, y la difusión de la agilidad de este mecanismo de resolución de conflictos. Los jóvenes abogados involucrados en el arbitraje están llamados a hacer ese cambio.

Mi aporte a la Red Juvenil de Arbitraje, como miembro de su Consejo Directivo, se enfocará en permitir a nuevos talentos incursionar en el mundo del arbitraje. Muchas veces se ha hecho referencia a la Red como el medio para garantizar el relevo generacional en el arbitraje, cuando sea necesario.



Jessica Andrea Vargas Ferrucho

Uno de los retos que tenemos las nuevas generaciones del arbitraje es el de promover e impulsar áreas innovadoras como el arbitraje deportivo o médico. Sin embargo, la innovación no se queda allí, somos conscientes que esto nos reta a apropiarnos de nuevas y mejores herramientas que pasan por lo tecnológico, sustancial y procesal. También, soy una convencida de que el arbitraje internacional debería llamar la atención de las nuevas generaciones. Solo siendo competitivos y formándonos con los más altos estándares de calidad lograremos fortalecer la confianza de usuarios, operadores y percepción internacional sobre la forma en la que se hace arbitraje en Colombia.

Como miembro del Consejo Directivo de la Red espero generar espacios de debate y de participación para los jóvenes abogados que desde la academia y la práctica quieren consolidar el arbitraje en Colombia, y trasladar estos diferentes espacios a las regiones y municipios del país.



Carlos Miranda

Las nuevas generaciones del arbitraje deberán hacerlo más amigable con las nuevas tecnologías y con el medio ambiente, deberán hacerlo más incluyente en cuanto a operadores jurídicos y más accesible para usuarios que normalmente no hacen uso de él.

Mi principal objetivo será consolidar la Red como un medio para que muchos más abogados jóvenes tengan la preparación y el acceso a oportunidades para ejercer el arbitraje desde el litigio, la administración de justicia o la vida académica.



Alejandra Gómez

Las nuevas generaciones tenemos un reto mayúsculo, lograr que la diversidad no sea un tema del que mucho se habla, sino que sea un hecho. La inclusión y la diversidad en el arbitraje debe ser una política que conlleve a la erradicación de cualquier tipo de discriminación, sea de género, afiliación política, racial y cultural.

Como miembro del Consejo Directivo de la Red al que fui designada por parte del Comité Colombiano de Arbitraje buscaré generar espacios que difundan los principios de diversidad e inclusión, procuraré que los jóvenes practicantes del arbitraje nacional e internacional encuentren en la Red un “trampolín” para sus sueños.



Camilo Narvaez

La expansión de asuntos arbitrables en diversas especialidades del derecho, así como el uso del arbitraje social, incrementarán la demanda y oferta de administración de justicia. En consecuencia, las futuras generaciones del arbitraje deberán formarse de manera constante en materia jurídica, otras disciplinas y las tecnologías de la información.

Como miembro del Consejo Directivo continuaré brindando mi vocación, dedicación y experiencia en la consolidación de la Red Juvenil del CAC-CCB. La creación, estructuración y ejecución de más de 30 proyectos de formación profesional, académica y de networking para todos sus miembros, son solo el inicio de nuevos retos e iniciativas.



Angela Cristina Villate

A quienes creen que todo futuro será mejor, la juventud les inspira un extraño optimismo que los lleva a apostar por que las nuevas generaciones lograrán cumplir o acercarse al “sueño prometido” de construir un lugar más equitativo, promisorio y que avanza hacia el progreso.

Seguramente no lograremos cumplir esta misión que, en últimas, es el reto de la humanidad generación tras generación. Sin embargo, como juventud, hemos comprendido que en tiempos de información, conectividad e intereses dispersos ser flexibles, adaptarnos y reconocer lo valioso de todos los saberes nos servirá para afrontar los retos de nuestra época.

El arbitraje no se resiste a estas exigencias. Los MRC van más allá de la normatividad. El conflicto (fenómeno complejo), pasa por comprender el mundo desde lo económico, etnográfico, cultural, etc. Brindar una comprensión multidisciplinar del arbitraje será mi aporte como representante del CAC ante el Consejo directivo de la Red.



José Cano Valencia

El reto principal es contribuir a la resolución de conflictos jurídica y técnicamente complejos como apoderados, secretarios y árbitros de manera eficiente y con los mayores estándares de calidad, en un entorno cada vez más digital e internacionalizado.

Mi aporte para la Red será generar oportunidades novedosas y disruptivas de creación y difusión académica, que den visibilidad a nuestros miembros y permitan la conexión entre ellos. Igualmente, será consolidar el papel de la Red a nivel nacional e internacional, con el fin de que sea cada vez más un referente de los jóvenes en el arbitraje.



CARTILLA DIGITAL

EL CAC EN CIFRAS:

índice estadístico 2021

centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/Gestion-del-conocimiento

VISITAR

Centro de Arbitraje
y Conciliación

 Cámara
de Comercio
de Bogotá
#SOYEMPRESARIO



NOVEDADES LEGISLATIVAS

En este número de Arbitrio se analizaron los principales aspectos del Proyecto de ley de reforma a la administración de justicia en Colombia, asociados al origen del proyecto, sus principales aportes y los comentarios más relevantes que recibió por parte de sus detractores.

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA

El proyecto que modifica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 270 de 1996 surgió de la unificación de distintas iniciativas que fueron presentadas por el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y algunos congresistas en el 2002. Luego de que el proyecto surtiera los trámites de aprobación requeridos por parte del Senado y la Cámara de Representantes, fue aprobado en el último debate legislativo que se llevó a cabo el día 15 de junio de 2021 en la plenaria del Senado con 68 votos a favor y 15 en contra.

El siguiente trámite estará a cargo de la comisión de conciliación, encargada de la unificación del articulado

aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado, con el fin de tener el control previo de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional y pueda ser sancionada por el presidente de la República.

El objetivo del proyecto de Ley es mejorar y modernizar el aparato judicial mediante la inclusión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, eliminar los obstáculos que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia, ayudar a la descongestión de la rama judicial y, en especial, garantizar la seguridad jurídica.

El texto de la reforma define importantes cambios y logros que serán a favor de la comunidad jurídica. Soluciona diferentes necesidades en la administración de justicia.

Dentro del proyecto se introducen varios cambios, los más destacados son:

- Adopción del expediente digital en todas las disciplinas jurídicas.



- Creación de jueces itinerantes (jueces y magistrados) en los municipios con más congestión judicial.
- Fortalecer la equidad de género, el 50% de las listas para elección de magistrados a las altas cortes estarán conformadas por mujeres.
- Exigir más experiencia para los aspirantes a ser nombrados por méritos en los cargos de Juez Municipal, Juez del Distrito y Magistrado de Tribunal.
- Cambiar los requisitos (más flexibles) para ser Procurador, Fiscal, Registrador y Defensor del Pueblo Registrador Nacional del Estado Civil.
- No se limitará la recepción de querellas o denuncias, por cambio de turno de funcionarios.
- Designar dos magistrados adicionales para el Consejo de Estado que harán parte de la Sección Primera del Consejo de Estado.
- La Justicia tendrá una asignación del 3% del presupuesto general de la Nación

Finalmente, entre las críticas surgidas en diferentes sectores de la opinión pública, se recogen las siguientes:

- El artículo que modifica los requisitos para ser Procurador, Fiscal, Registrador Nacional del Estado Civil y Defensor del Pueblo, por no hacer parte de la propuesta inicial del texto del proyecto.
- Con el proyecto se pretende modificar el artículo 128 de la Ley 270 de 1996, al flexibilizar los requisitos exigidos para los aspirantes a los cargos Procurador, Fiscal, Registrador Nacional del Estado Civil y Defensor del Pueblo.
- Con la flexibilización de los requisitos del ítem anterior, se abre la puerta para que personas sin la experiencia y el conocimiento necesario, lleguen a ocupar cualquiera de los cargos señalados anteriormente.
- Sobre los costos, los detractores aseguran que no hay necesidad de crear una oficina permanente de la Defensoría del Pueblo en cada municipio, puesto que es suficiente con los personeros municipales, pues esta situación generará un mayor gasto.
- Censuran la creación de nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes, consideran que es un gasto negativo de acuerdo con el concepto que el Ministerio de Hacienda dio al respecto.

APARTADOS JURISPRUDENCIALES

Estudiamos los recursos extraordinarios de revisión proferidos por la Corte Suprema de Justicia y recursos extraordinarios

de anulación contra laudos arbitrales dictados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Los recursos extraordinarios de revisión y de anulación son la excepción a la cosa juzgada, mediante los cuales se puede impugnar una sentencia que se encuentre en firme, sin embargo, los mismos no se pueden considerar como una instancia adicional.

El fin de estos mecanismos es conferir un medio de defensa extraordinario de acuerdo con la taxatividad de las causales de revisión y anulación señaladas en la ley. La decisión que sea recurrida debe ser producto de la adopción de actuaciones procesales afectadas por graves irregularidades.

ANÁLISIS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN:

Recurso extraordinario de revisión: solicitado por Ross Energy S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sala de Casación de la CSJ de 27 de julio de 2011.	Fecha: 24 de mayo de 2017 No. Radicación: 11001-02-03-000-2012-02952-00
Entidad: Corte Suprema de Justicia – CSJ. Consejero ponente: Ariel Salazar Ramírez.	Entradas léxicas: laudo extranjero, homologación de laudo, litisconsorcio.

La compañía Ross Energy S.A.S. interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que expidió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación el 27 de julio de 2011 (en adelante la Corte), que declaró la homologación del laudo arbitral extranjero proferido por el Centro Internacional para la Resolución de Litigios de la Asociación Americana de Arbitramento - CIDR con sede en New York el 19 de junio de 2006.

Como fundamento del recurso el recurrente invocó la causal 8 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, afirmando que existieron nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso de homologación del laudo.

Al entender del demandante, la Corte homologó un laudo que desbordaba los alcances del negocio jurídico sometido al conocimiento del Tribunal de arbitraje, el cual se pronunció sobre el contrato de la conformación del consorcio y respecto al contrato público, suscrito entre el consorcio y ECOPETROL, temas que no hacían parte de su competencia al estar regulados por la legislación colombiana.

Para el accionante, el fallo de homologación afectó el contenido material del contrato público firmado con ECOPETROL, al considerar que: (i) con la orden de cumplimiento de la decisión judicial se produciría la disolución y liquidación del consorcio por desaparición de uno de los consorciados (Ross Energy S.A.S.); (ii) la



sentencia violaba normas de orden público, relacionadas con la prohibición expresa de realizar cesiones entre los miembros consorciados, y que; (iii) en el fallo se omitió estudiar aspectos como la integración del litisconsorcio necesario entre los consorciados y ECOPEL a fin de que esta entidad estatal aprobara la cesión del cien (100%) por ciento de la participación del impugnante en el contrato público señalado anteriormente.

En este caso, la Corte indica que a través del recurso extraordinario de revisión, no se pueden “plantear temas ya litigados y decididos en un proceso anterior, ni es la vía regular para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en el litigio precedente”, así mismo, la Corporación manifiesta que respecto al motivo de revisión de la causal señalada, el fallador debe incurrir en nulidades, tales como, “el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso”, es decir, para la Corte la irregularidad que se alegue en un recurso de revisión, tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal, además, debe encuadrar en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, y que los mismos se hayan configurado exactamente en el momento de proferir la sentencia y no antes.

Finalmente, la Corporación concluyó que el recurso extraordinario objeto del pronunciamiento no prosperaba, “pues las irregularidades alegadas por la recurrente no solo no configuran la causal de revisión invocada, sino que fueron objeto de discusión y análisis en el trámite del exequátur”. Por esta razón declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

Recurso extraordinario de revisión: interpuesto por Conalvias Construcciones S.A.S., respecto de la sentencia que resolvió el recurso de anulación proferido el 5 de febrero de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.	Fecha: 30 de mayo de 2018 No. Radicación: 11001-02-03-000-2016-03364-00
Entidad: Corte Suprema de Justicia - CSJ Consejero ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. Recurrente: Conalvias Construcciones S.A.S	Entradas léxicas: prueba documental, preexistir, fuerza mayor o caso fortuito, cosa juzgada.

En la sentencia analizada, la Corte Suprema de Justicia (en adelante la Corte) declara infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Conalvias Construcciones S.A.S, contra la sentencia

proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 5 de febrero de 2016, la cual resolvió el recurso extraordinario de anulación frente al laudo arbitral expedido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 4 de agosto de 2015.

El recurrente fundó el recurso extraordinario de revisión en la causal señalada en el numeral 1º del artículo 355 del Código General del Proceso-CGP, aportando copia del «INFORME PERICIAL ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS POR ATRASO Y DISRUPCIÓN EN OBRA CIVIL – PLANTA TERMOELÉCTRICA GECELCA 3» (...) elaborado en noviembre de 2015. Adujo el demandante que el documento fue conocido después del proceso, y que el propósito con esta prueba documental es demostrar que gran parte de las excepciones presentadas por la contraparte en el proceso arbitral, no son directamente responsabilidad de Conalvias, y que si por el contrario el Tribunal de Arbitramento hubiese conocido este documento, a su sentir, la motivación del laudo habría sido diferente o tal vez habría prosperado la prueba de la fuerza mayor.

Una vez realizado el análisis por parte de la Corte a los argumentos y la causal invocada por el demandante, la Corte sostiene que no se configura la causal implorada, pues a su juicio esta carece de los elementos imprescindibles como son: a) se trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea trascendente.

La Corporación, luego de analizar cada elemento que se debe cumplir para que el recurso extraordinario de revisión prospere, señala que la prueba aportada en revisión será eficaz, cuando haya preexistido antes del inicio del litigio o en su defecto, en la última fecha de la oportunidad procesal de presentación de pruebas y no después de dictarse sentencia; demostrarse que medio la fuerza mayor o caso fortuito, por lo tanto fue imposible allegarla al proceso arbitral y como resultado se profirió un fallo contrario a los hechos.

Indica la Corte que este recurso está llamado a no prosperar, toda vez que el laudo fue dictado el 4 de agosto de 2015 y la ausencia del documento aparecido aportado al recurso de revisión tiene fecha de elaboración de noviembre de 2015 fecha que no es anterior al proceso arbitral, sino posterior al inicio del Tribunal de Arbitramento y no hizo parte de los anexos de la demanda, es decir, no cumple con los elementos para que se configure la causal implorada.

La Corporación recuerda al demandante que el recurso extraordinario de revisión fue creado para



enmendar circunstancias que distorsionaron la correcta administración de justicia y no para corregir errores jurídicos, exponerse las pretensiones o excepciones que fueron debatidas y decididas mediante laudo arbitral, ni mucho menos es camino para mejorar la prueba mal alegada o de producirla después del fallo, pues de lo contrario no existiría nunca la cosa juzgada.

La Corte concluye que el recurso extraordinario de revisión aquí solicitado no es procedente por lo que resuelve declararlo infundado por no cumplir con los requisitos de la causal rogada en el presente asunto.

Recurso extraordinario de revisión: formulado por Primavera Desarrollo y Construcción S. en C. frente a la sentencia de 26 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá	Fecha: 19 de octubre de 2020 No. Radicación: 11001-02-03-000-2017-03567-00
Entidad: Corte Suprema de Justicia - CSJ Consejero ponente: Luis Alonso Rico Puerta. Recurrente: La Primavera Desarrollo y Construcción S. en C.	Entradas léxicas: nulidad, taxatividad, carencia de motivación.

En este caso, la Corte Suprema de Justicia (en adelante la Corte) analiza el Recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Primavera Desarrollo y Construcción S. en C. con el fin de impugnar la decisión del 26 de septiembre de 2017 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (en adelante la Sala) la cual declaró infundado el recurso de anulación que había presentado la impugnante contra el laudo del 23 de marzo de 2017.

El recurso de revisión fue presentado con base en lo consignado en el numeral 8 del artículo 355 del Código General del Proceso, en su criterio, el demandante consideró que la sentencia que negó el recurso de anulación estaba viciada de nulidad, toda vez que, en la misma no se dio ninguna respuesta al resolver la petición de anulación del laudo en relación con la causal octava del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, causal que utilizó la impugnante para denunciar la existencia de disposiciones contradictorias entre la parte motiva y la parte resolutive del laudo, con lo cual manifestó que al no existir ninguna referencia a la causal citada, era evidente que existía una «carencia de motivación» aspecto que hace que la sentencia sea nula.

Respecto a la teoría de la carencia de motivación como origen de anulabilidad de las sentencias, expuesta por la sociedad impugnante, la Corte hizo las siguientes precisiones:

- 1) No se puede afirmar que la justificación «deficiente» o «insuficiente» de una sentencia conlleva a su anulación, porque estas hipótesis no se encuentran dentro de los motivos abstractos de invalidación procesal que consagra el artículo 133 del Código General del Proceso
- 2) Las causales de nulidad deben obedecer al principio de taxatividad, es decir, que ninguna actuación del proceso puede ser declarado nulo si la causal no está expresamente señalada en la ley.
- 3) Para que prospere la causal del numeral 8º del artículo 355 del Código General del Proceso, el recurrente debe demostrar la existencia de irregularidades con la fuerza suficiente para invalidar la sentencia que pone fin al proceso, esto es, que el vicio que se alegue como causante de nulidad debe ser de naturaleza procesal, con lo cual se deben excluir los errores de juicio relacionados con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al juez, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a abolir una sentencia cuando en la misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa.

Por las anteriores razones, la Corte declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por la sociedad impugnante, en la medida que la «carencia de motivación» del fallo de anulación no corresponde a ninguna de las causales de nulidad procesal estipuladas en el Código General del Proceso.

ANÁLISIS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE ANULACIÓN:

Recurso extraordinario de Anulación contra el laudo arbitral dictado dentro del proceso de Espumaltex S.A. contra Proyectos Montajes y Construcciones S.A. - Promoción S.A.	Fecha: 6 de diciembre de 2019 No. Radicación: 00020190205400
Entidad: Tribunal Superior de Bogotá – Sala Primera Civil de Decisión. Consejero ponente: Marco Antonio Álvarez Gómez. Recurrente: Espumaltex S.A.	Entradas léxicas: fallo en equidad, fallo en derecho, juicio de valor.



Decide la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá (en adelante la sala) el recurso extraordinario de anulación impetrado por la compañía Espumaltex S.A contra el laudo proferido el 16 de julio de 2019 dentro del proceso iniciado por la impugnante, contra la empresa Proyectos Montajes y Construcciones S.A. (en adelante Promocón S.A.)

En el presente caso el recurrente fundamentó el recurso señalado, en las causales 7, 8 y 9 de anulación, contempladas en el artículo 41 de Ley 1563 de 2012, referentes a: (i) fallo en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, (ii) disposiciones contradictorias en el laudo, en la parte resolutoria o que influyan en ella, y (iii) recaer el laudo sobre elementos no sometidos a la decisión de los árbitros.

Con respecto a la causal 7, la Sala destaca que los árbitros, aun cuando deben fallar en derecho, están habilitados para exponer razones de equidad en orden a justificar su decisión porque así lo autorizan el artículo 230 de la Constitución Política y el artículo 280 del Código General del Proceso, en el sentido de que el laudo debe contener una explicación coherente con base a las pruebas aportadas, normas constitucionales, legales de equidad y doctrinarios que sean necesario para fundamentar las conclusiones del caso en concreto.

En este caso la señora árbitro fundamentó su decisión en normas jurídicas vinculadas al litigio, en jurisprudencia sobre el contrato de obra por precios unitarios fijos y posición dominante; en doctrina relativa a la libertad contractual, las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, la buena fe y las facultades contractuales de ejercicio unilateral, en el principio de conservación del contrato, lo mismo que en un escrutinio conjunto de las pruebas aportadas y practicadas, con lo cual no es posible afirmar que su fallo fue exclusivamente en equidad, por lo tanto la Sala consideró que no prosperaba la causal citada anteriormente.

Frente a la causal 8, la Sala manifiesta que la argumentación dada por la sociedad recurrente, constituye un juicio de valor en relación con la coherencia de las consideraciones incorporadas en el laudo, a pesar de que en el mismo no hay nada de contradictorio, en opinión de la Sala, esta argumentación era suficiente para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, calificar o modificar los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral al adoptar el laudo, motivos que resultaban suficientes para desestimar esta causal de anulación.

Por último, en relación con la causal 9, la Sala Civil del Tribunal desarrolló la teoría de la Corte Suprema de Justicia al señalar que “los motivos previsto en la ley para hacer viable la anulación, de una u otra forma únicamente

tienden a corregir posibles excesos, por degeneración o por extralimitación, en el ejercicio de la potestad arbitral, sin que en ningún caso le sea permitido a la Sala interferir todo el proceso de elaboración intelectual del laudo sino hay de por medio, verificable con naturalidad y sin la ayuda de rebuscados rodeos, un exceso de poder con influencia notoria en la decisión”. Así mismo, manifestó que en otros de sus fallos, la misma Corte ha expresado que “por esta vía no es factible revisar las cuestiones de fondo que contenga el laudo... sino que su cometido es el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral... y garantizar subsecuentemente el superlativo derecho de defensa de las partes”.

Por consiguiente, la Corporación consideró que en la medida que en la demanda de arbitraje se hace mención a las obligaciones de duración del contrato y a la atribución de los tiempos muertos que dieron lugar al retraso en la ejecución de la obra, le está prohibido a la Sala indagar si le asistió, o no, razón a la señora árbitro para fallar del modo en que lo hizo, por cuanto esa tarea requiere un análisis de las pruebas aportadas al proceso, el cual no se puede realizar bajo el pretexto de indagar si existió incongruencia en el laudo arbitral, pues esto significaría la revisión de cuestiones de fondo que contenga el laudo, las cuales, de acuerdo con el planteamiento de la jurisprudencia, no se pueden hacer a través del recurso extraordinario de anulación.

Por las anteriores razones, el Tribunal Superior de Bogotá declaró infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el accionante contra el laudo proferido el 16 de julio de 2019 dictado dentro del proceso iniciado por la impugnante, contra la empresa Proyectos Montajes y Construcciones S.A.

Recurso extraordinario de Anulación contra el laudo arbitral originado dentro del proceso Turgas S.A. E.S.P. frente a VP Ingeniería S.A. E.S.P.	Fecha: 6 de noviembre de 2020 No. Radicación: 11001 2203 000 2020 01325 00
Entidad: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Séptima de Decisión Civil Consejero ponente: Oscar Fernando Yaya Peña. Recurrente: Turgas S.A. E.S.P.	Entradas léxicas: demanda en reconvencción, indebida acumulación de pretensiones, rendición de cuentas.

La Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., resolvió el recurso extraordinario de anulación impetrado por la compañía Turgas S.A. E.S.P. (en adelante Turgas), contra el laudo proferido el 8 de junio de 2020, mediante el cual se puso fin al litigio entre



el impugnante y la sociedad VP Ingeniería S.A. E.S.P. (en adelante VP Ingenierías).

Durante el trámite del proceso arbitral, VP Ingeniería presentó demanda de reconvencción contra Turgas. Una vez el Tribunal de Arbitramento analizó las solicitudes realizadas por cada una de las partes, procedió a rechazar las pretensiones de la demanda de arbitraje instaurada por la sociedad Turgas, y aceptó parte de las pretensiones solicitadas en la demanda en reconvencción. Las pretensiones aceptadas fueron las referentes al incumplimiento de dos contratos suscritos entre las partes, el primero, relacionado con cuentas en participación y el segundo, asociado a la venta de gas, con lo cual, el Tribunal decidió condenar a Turgas a pagar COP \$5.060'363.166, incluido los intereses moratorios como ejecución de la cláusula penal y a rendir cuentas de su misión en el contrato de cuentas en participación desde el inicio hasta el momento de la presentación del informe.

El impugnante respaldó el recurso extraordinario de anulación, con base en dos acusaciones puntuales: i) violación al debido proceso, pues manifestó que, en la demanda de reconvencción se realizó una indebida acumulación de pretensiones y, ii) el Tribunal falló concediendo más de lo pedido y no decidió sobre cuestiones sujetas al arbitramento lo que encuadra en la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

La Sala Civil del Tribunal después de analizar con detenimiento los fundamentos en los cuales el recurrente soportaba sus acusaciones, declaró infundado el recurso extraordinario de anulación, pues estimó en términos generales que en el caso bajo estudio, no se configuraba ninguna de las causales de anulación establecidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y recordó que la procedencia del recurso de anulación, “está restringida en gran medida y de manera particular, porque sólo es dable alegar a través de él las precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo”.

De igual manera, estableció que las causales de anulación del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje y que el accionante no puede escudarse en el recurso extraordinario de anulación para que la cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnación, es decir, que bajo el amparo de este recurso no se puede solicitar la revisión o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, puesto que obrar así, sin que medien vicios de incongruencia, implicaría que un Tribunal Superior del Distrito Judicial estaría obrando a manera de juez de apelación, lo cual no es propio del recurso extraordinario señalado.

En conclusión la Sala civil advierte, que el recurso extraordinario de anulación no prospera, pues no se puede mediante este recurso alegar violación al debido proceso por acumulación indebida de pretensiones en demandas de reconvencción, ni se puede pedir la reducción de condenas pecuniarias impuestas, ya que estas solicitudes son ajenas al recurso invocado.

Recurso extraordinario de Anulación contra el laudo arbitral originado dentro del proceso arbitral promovido por Construcciones 2506 S.A.S. contra de Constructora Art House S.A.S.	Fecha: 18 de junio de 2021 No. Radicación: 11001 22 03 000 2021 00438 00.
Entidad: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Segunda de Decisión Civil. Consejero ponente: Adriana Ayala Pulgarín. Recurrente: Constructora Art House S.A.S.	Entradas léxicas: fallo en equidad, causales de anulación, motivación suficiente.

En el presente análisis la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (en adelante la sala) resuelve la solicitud de anulación del laudo arbitral proferido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el 11 de septiembre de 2020, que puso fin al conflicto entre Construcciones 2506 S.A.S. contra Constructora Art House S.A.S.

Son dos las causales, en las que fundó el recurrente el recurso de anulación a la luz de los numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Uno de los argumentos en los que sustenta el recurso el demandante es que el tribunal arbitral proferió el fallo en equidad y no en derecho. Alega que el árbitro consideró la bitácora como la única prueba pertinente con la que se podía medir el avance de la obra sin dar el fundamento jurídico respectivo. Añade que el Tribunal de Arbitramento no se pronunció sobre las pretensiones pecuniarias invocadas por el impugnante en el trámite arbitral.

Antes de dictar sentencia, la Sala Segunda Civil de Decisión del Tribunal Superior, resalta que el recurso extraordinario de anulación para que pueda ser impetrado debe cumplir con las causales taxativas que indica la Ley arbitral. De ninguna manera, se puede considerar este recurso como una segunda instancia para recurrir un laudo arbitral insatisfactorio para la parte vencida, pues es claro que la justicia privada es de única instancia, así lo estipula la Ley y lo acuerdan las partes cuando incluyen en sus negocios jurídicos la cláusula compromisoria o el pacto arbitral.



Una vez analizados los argumentos de fondo alegados por el demandante, la Sala advierte que no se configuran ninguna de las dos causales suplicadas por el actor. Señala la Corporación que para que se configure el fallo en conciencia o en equidad se debe demostrar que el tribunal arbitral o el árbitro único se apartó del marco jurídico vigente aplicable al proceso o desconoció por completo las pruebas aportadas para la resolución del litigio y este no fue el caso de la providencia analizada, pues advierte la Sala que el Tribunal de Arbitramento sí expuso de manera pertinente los argumentos y razones necesarias para sustentar cada una de sus decisiones en su sentencia, por

tanto el fallo en conciencia se radica más con la motivación suficiente y no como lo manifiesta el actor, en cual debió ser la motivación adecuada para el laudo.

Del análisis de la providencia impugnada, concluyó la Sala Segunda Civil del Tribunal, que no le asiste razón al demandante en sus alegatos, toda vez que el laudo recurrido sí se pronunció en derecho y no en equidad, es decir, “el fallo muestra una relación clara entre la valoración probatoria y las decisiones adoptadas por el árbitro único.” y contrario a la petición del actor, la Sala declara infundado el recurso extraordinario de anulación y lo condena en costas.



SERVICIOS DE **ARBITRAJE INTERNACIONAL**

¿QUÉ BUSCA?

Resolver una controversia transnacional a través de la adjudicación de intereses privados por parte de un tercero experto, neutral e imparcial.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?

Personas naturales y jurídicas que cumplan con alguno de los tres (3) criterios indicados en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 (Colombia).

¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD?

radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co y/o santiago.diaz@ccb.org.co

¿QUÉ DEBO ANEXAR?

Constancias del pago de los gastos iniciales de arbitraje internacional y de envío de la solicitud a la parte convocada.

**Centro de
Arbitraje y
Conciliación**



#SOYEMPRESARIO

Síguenos

**#STAEMPRESA
ESDETODOS**

Conoce toda la información en:

www.centrodearbitrajeconciliacion.com

o en la línea: **7458019**



NOVEDADES EN ARBITRAJE INTERNACIONAL

Durante sus casi cuatro décadas de existencia, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se ha caracterizado por ser vanguardista en todos los frentes, incluyendo el tecnológico. Efectivamente, el CAC es una institución líder y pionera en adaptarse a los cambios que trae la modernidad, prestando desde el 2017, un servicio de arbitraje internacional 100% virtual y seguro, gracias a las sofisticadas plataformas digitales con las dispone.

Además de brindar soluciones eficientes mediante la virtualidad, el CAC es consciente del impacto jurídico que pueden llegar a tener las nuevas tecnologías aplicadas al procedimiento arbitral internacional, y, por ende, de la necesidad de fomentar discusiones sobre la materia. Es precisamente por ello, que el pasado 9 de julio de 2021, se llevó a cabo el summer webinar organizado por el Área de

Arbitraje Internacional del CAC sobre “Arbitraje comercial internacional, Blockchain y las Reglas de la IBA sobre la Obtención de Pruebas en materia tecnológica”.

En esta ocasión, el webinar contó con un panel de lujo, compuesto por árbitros internacionales de primer nivel, expertos –adicionalmente– en la regulación procesal y sustancial de los medios virtuales utilizados actualmente e, incluso, de tecnologías nacientes, como lo es el caso del Blockchain.

Durante la primera sección del webinar, los árbitros Andrea Hulbert y Álvaro Castellanos, abordaron los cambios actualmente experimentados en el arbitraje por la aplicación de tecnologías existentes, tomando como punto de partida la nueva versión (2021) de las “Reglas de la IBA sobre la Obtención de Pruebas en Arbitraje Internacional”,

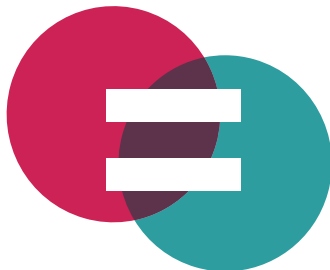


que introdujo regulaciones en materia de ciberseguridad y audiencias virtuales.

Durante la segunda sección del webinar, los árbitros Sophie Nappert y Franz X. Stirnimann, abordaron las innovaciones tecnológicas que se avecinan y las potenciales transformaciones que estas traerán de aplicarse al arbitraje comercial internacional, particularmente, el uso de la tecnología blockchain y su interacción con la estructura actual del proceso arbitral.

Tratándose de temas tan novedosos, el webinar fue un evento completamente revelador que despertó, tanto en la audiencia como en los panelistas, nuevos interrogantes y dilemas que, con seguridad, ameritarán nuevos espacios para análisis más extensos.

Para conocer más del evento y ver su grabación, haga clic [aquí](#)



**Centro de Arbitraje
y Conciliación**

**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

**Quando su
negocio crece,
nosotros crecemos
con usted**



**ACCEDA A MEJORES OPCIONES DE
FINANCIAMIENTO CON EL SERVICIO DE
GARANTÍAS MOBILIARIAS**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vehículos automotores | 2. Maquinaria y productos agrícolas |
| 3. Inventarios | 4. Cosecha y ganado |
| 5. Televisores | |

Ingrese y llene el formulario en:

www.centroarbitrajeconciliacion.com/solucioncontrovercias

Línea de Respuesta Inmediata: 3830330

f [camaracomercio](#) | t [@camaracomercio](#) | y [camaracomercio](#)

cc [camaracomercio](#) | in [camaradecomerciodebogota](#)



ACTUALIDAD EN MATERIA DE LAUDOS ARBITRALES

Como es habitual, en esta sección encontrará la lista de laudos proferidos durante los últimos seis meses en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Podrá encontrarlos referenciados por número de proceso, tipo de contrato y partes. Así su búsqueda será más sencilla.

Recuerde consultar nuestra biblioteca digital, leer nuestras revistas y hacer parte de la comunidad de lectores del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá: <https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Publicaciones>



NÚMERO DE CASO	FECHA LAUDO	PARTES	ARBITROS	CONTRATO
115689	5/05/2021	ENERGÍA DEL AMAZONAS S.A. EN LIQUIDACIÓN VS. ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. y LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	ALVARO CUBIDES CAMACHO, EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON, SANTIAGO TALERO RUEDA	Arrendamiento de bienes muebles
121297	14/05/2021	HIGEA FARMACEUTICA S.A.S. VS. COASPHARMA S.A.S.	JAVIER JOSE BONIVENTO JIMENEZ, EDGARDO VILLAMIL PORTILLA, JORGE ERNESTO OVIEDO ALBAN	Prestación de servicios
118978	18/05/2021	TUREDEZ S.A.S. VS. FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO	LUIS ÁLVARO NIETO BOLÍVAR, FERNANDO PABÓN SANTANDER, SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR	Cuentas en participación
119625	20/05/2021	WILLIAM RAMIRO ORTIZ MARTÍNEZ VS. CLÍNICA HISPANOAMÉRICA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, GERARDO LUNA SALAZAR, GERMÁN ANTONIO ROSERO ROSERO, HERNANDO RUEDA AMOROCHO, JOVANNA MARCELA ROSERO ROSERO, JUAN CARLOS OSORIO y ROSERO ROSERO S EN CS EN LIQUIDACIÓN	MARÍA CAROLINA CASTILLO ÁLVAREZ	De sociedad
124146	20/05/2021	YOLANDA SARMIENTO GUTIÉRREZ VS. DANIEL ASCENCIO TORRES	ALBERTO ACEVEDO REHBEIN	Arrendamiento de bienes muebles
114384	24/05/2021	CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP	ANTONIO AGUSTÍN ALJURE SALAME, HERNANDO HERRERA MERCADO; MARÍA HELENA GIRALDO ARISTIZÁBAL	Especial para la gestión de servicios públicos / Ley 142 de 1993
15948 / 113815	25/05/2021	CAFESALUD E.P.S. S.A. - EN LIQUIDACIÓN VS. MEDIMÁS E.P.S. S.A.S.	WILLIAM NAMÉN VARGAS, JOSÉ ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL GARRIDO DÍAZ	Compraventa de acciones o cuotas sociales
118995	27/05/2021	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PETROLERA S.A.S. VS. AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH, AQUALIA INTECH S.A. (SUCURSAL COLOMBIA) y CASS CONSTRUCTURES S.A.S.	LUIS CARLOS GAMBOA MORALES	Compraventa bienes muebles
123169	1/06/2021	NIMAN COMMERCE S.A.S. VS. INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES INEGREAL S.A.S.	LILIANA OTERO ALVAREZ, HECTOR DARIO AREVALO REYES, DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA	Compraventa bienes muebles
117057	3/06/2021	PERT DPM S.A. VS. MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD.	EDGAR ALFREDO GARZON SABOYA, EDUARDO MANTILLA SERRANO, ALFREDO EFRAIN REVELO TRUJILLO	Obra civil
117600	4/06/2021	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP	EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO, WILLIAM BARRERA MUÑOZ, JAIME HUMBERTO TOBAR ORDONÑEZ	Concesión
15695	16/06/2021	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - EAAB E.S.P. VS. UNIÓN TEMPORAL OHLV, PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. - integrante de la UNIÓN TEMPORAL OHLV - y COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. SEGUROS CONFIANZA S.A.	LUIS HERNANDO GALLO MEDINA, FLORENCIA LOZANO REVEIZ, LAURA BARRIOS MORALES	Obra pública



NUMERO DE CASO	FECHA LAUDO	PARTES	ARBITROS	CONTRATO
122140	18/06/2021	AKILA S.A.S. VS. CARLOS ALBERTO CARVAJAL SALAZAR	HAROLD ECHEVERRY DÍAZ, MARLENE BEATRIZ DURÁN CAMACHO, JORGE SANTOS BALLESTEROS	Colaboración empresarial
15704	18/06/2021	HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. VS. TEKA SERVICES S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN	CARLOS FELIPE PINILLA ACEVEDO, JOSE OCTAVIO ZULUAGA RODRIGUEZ, LUIS ALVARO NIETO BOLIVAR	Comodato
122407	30/06/2021	EDIFICIO TORRES DE PALMA VERDE ETAPA I Y II - PROPIEDAD HORIZONTAL VS. ANCLAJES NOVA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN	MARGOTH PERDOMO RODRIGUEZ	Obra civil
119127	30/06/2021	EDIFICIO ECOTEK CALLE 95 P.H., ALIANZA FIDUCIARIA S.A. e ISARCO FONDO INMOBILIARIO S.A.S. VS. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	FABRICIO MANTILLA ESPINOSA, ADRIANA CONSUELO LOPEZ MARTINEZ, JUAN PABLO BONILLA SABOGAL	Compraventa bienes muebles
120026	7/07/2021	AMAZING COLOMBIA S.A.S. VS. ITIS SUPPORT LIMITADA	JAIME ANDRÉS VELÁSQUEZ CAMBAS	Prestación de servicios
113367	26/07/2021	CONSTRUCTORA AMCO LTDA., ALFREDO MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A., UNIÓN TEMPORAL A. MUÑOZ, ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA., UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR CORABASTOS Y SCHMEDLING ASOCIADOS Y CIA. LTDA. VS. CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS	ROBERTO GUILLERMO GAMBA POSADA, SAMUEL CHALELA ORTIZ, BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ	Concesión
122965	27/07/2021	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB E.S.P. VS. PROMIOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.	FELIPE GABRIEL TOVAR DE ANDRÉS, MAURICIO RICARDO CHAVES FARIAS, IVONNE GONZÁLEZ NIÑO	Especial para la gestión de servicios públicos / Ley 142 de 1993
116479	27/07/2021	CAMARGO CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. VS. UNIBOYACA CONSTRUCTORES S.A.S.	RAFAEL ENRIQUE CHALELA MANTILLA	Obra civil
123317	30/07/2021	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - FRISCO REPRESENTADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - SAE S.A.S. VS. CENCOSUD COLOMBIA S.A.	JOSÉ ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ, MAURICIO RICARDO CHAVES FARIAS, HERNANDO ANDRÉS OTERO GARZÓN	Arrendamiento de bienes inmuebles
15847	30/07/2021	EUROLAMINADOS S.A.S. VS. AR CONSTRUCCIONES S.A.S.	SEBASTIÁN SALAZAR CASTILLO, MÓNICA MARCELA LOZANO GUZMÁN, ÁLVARO PARRA AMÉZQUITA	Obra civil
121140	3/08/2021	DANIEL PORTER y DIANA MARCELA VELÁSQUEZ BONIVENTO VS. LUIS JAIME CORREDOR LONDOÑO	MARÍA CAROLINA CASTILLO ÁLVAREZ	Arrendamiento de bienes inmuebles
115978	3/08/2021	TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S. - TRANZIT S.A.S. VS. EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO, HENRY NORBERTO SANABRIA SANTOS, JORGE TEODORO SUESCÚN MELO	Concesión

NUMERO DE CASO	FECHA LAUDO	PARTES	ARBITROS	CONTRATO
124900	23/08/2021	VORTEX COMPANY S.A.S. VS. WEWORK COLOMBIA S.A.S.	LAURA MARCELA RUEDA ORDÓÑEZ	Adhesión
119048	3/09/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VS. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI	MARÍA CRISTINA MORALES DE BARRIOS, ALEJANDRO VENEGAS FRANCO, HERNANDO HERRERA MERCADO	Comodato
120054	7/09/2021	TRANSPORTES SENSACIÓN S.A.S. VS. C.I. PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.	ADRIANA MARÍA POLANÍA POLANÍA, JOSÉ ALBERTO GAITÁN MARTÍNEZ, JOSÉ ORLANDO MONTEALEGRE ESCOBAR	Transporte de personas
5496	14/09/2021	GRUPO EDITORIAL PRESENCIA COLOMBIANA S.A.S. VS. JHON FREDY CASTRO GARZÓN	JUAN CARLOS NAIZIR SISTAC	Compraventa bienes muebles
126230	21/09/2021	LINA CALLE 85 Y CÍA S.A.S. VS. AMSYT DIGITAL S.A.S.	DANILO ROMEO RAAD, MARIA CLARA GUTIERREZ GOMEZ, GERMAN VILLAMIL PARDO	Arrendamiento de bienes inmuebles



SORTEO CAC

DESIGNACIÓN DE
 ÁRBITROS, PERITOS Y
 AMIGABLES COMPONEDORES

Conozca [AQUÍ](#) los detalles del proceso





COMPORTAMIENTO DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ARBITRAJE NACIONAL COLOMBIANO

El sector energético constituye uno de los renglones más representativos e importantes de la economía del país. Mas aún, en tiempos en los que estamos atravesando un marcado cambio de paradigma económico, tecnológico y ecológico, las discusiones por la sostenibilidad y el desarrollo, necesariamente, deben contar con el sector energético en las discusiones de interés mundial: sus recursos, sus transformaciones y sus retos.

En el contexto arbitral, encontramos que este sector año a año ha encontrado en los MRC una forma ágil y efectiva de solucionar sus controversias. A partir de la expedición de la Ley 1563 se registra un aumento progresivo en la recurrencia por parte de las empresas del sector energético a los servicios de arbitraje. (Ver Figura 1). Estos picos se presentan en ciclos de dos años, sin embargo, si se comparan cada uno de estos, cada dos años aumenta el pico de controversias solucionadas en el sector energético.

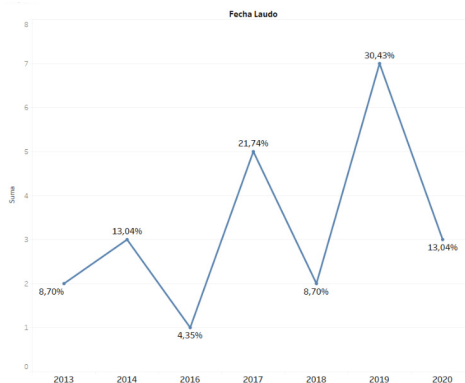


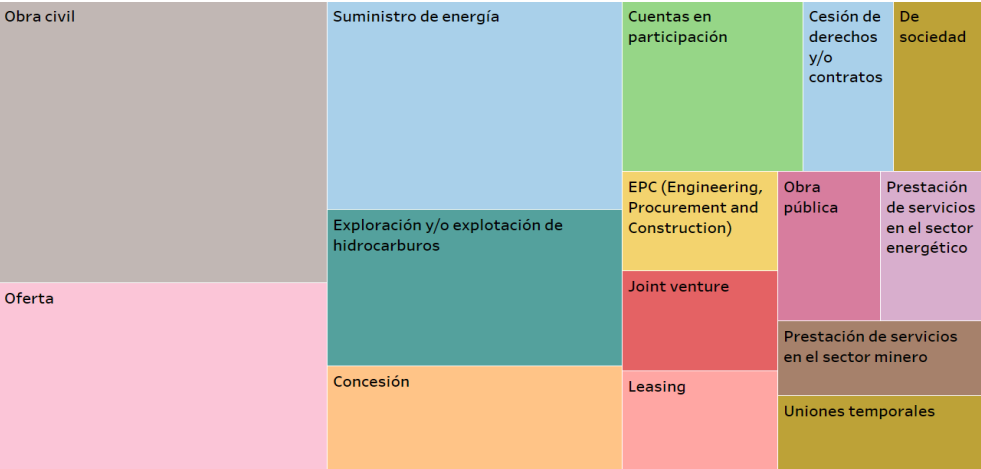
Figura 1

El sector energético,hace parte de una línea de negocio compleja que implica prever desde aspectos de infraestructura hasta tecnológicos. En esta cadena, los empresarios saben que sus aliados son de distinta naturaleza. Así que sus proveedores, socios y contratantes pertenecen tanto al sector público como al privado.

De acuerdo con el análisis de los conflictos de este sector, el 52% de los aliados de las empresas del sector de energía suelen pertenecer al sector privado mientras que el 48% al sector público.Estas cifras llevan a concluir su alto nivel de relacionamiento con empresarios privados e instituciones públicas.

Líneas de negocio de esta magnitud permiten corroborar que este sector es uno de los más decisivos e influyentes en las economías de los países. Así, que hay que comprender su entorno, como uno que está estrechamente interrelacionado con la política pública, los recursos naturales y la reactivación de la economía de los Estados.

Necesidades jurídicas



Gráfica 2

La gráfica 2 muestra el tipo de contratos en los que se presenta el mayor número de conflictividad en el sector energético. Dentro de estos destaca obra civil, oferta, suministro de energía y concesión. Esta amplia gama contratos de diferente naturaleza confirma la afirmación anterior, según la cual, este representa uno de los sectores que activa la economía de los Estados a diferentes escalas.

Algunas de las controversias más frecuentes que se resuelven en el CAC y que están relacionadas con el sector energético son las siguientes:

- Discusiones por enriquecimiento sin justa causa en la liquidación de los contratos
- Obligaciones y efectos de la declaratoria de terminación de los contratos
- Asignación de riesgos por causas imprevistas
- Imputación de intereses moratorios sobre las sumas de capital
- Análisis de la ejecución contractual y redistribución de las obligaciones
- Conflictos derivados de las cuentas en participación
- Transacción de contratos
- Terminaciones anticipadas de los contratos
- Declaración de nulidad de los contratos
- Modificación de las obligaciones contractuales por exigencias administrativas

Para comprender aún más el comportamiento de la conflictividad del sector energético, la gráfica 3 muestra los contratos más frecuentes con los que se han resuelto controversias en el CAC a partir de 2018.

Como se puede observar, no se puede establecer una recurrencia de los conflictos en el tiempo. Estos suelen ser distintos. Así, por ejemplo, para 2021, encontramos que los conflictos más recurrentes del sector están relacionados con desacuerdos derivados de contratos de obra civil, arrendamiento y sociedades.



Gráfica 3



PROBLEMAS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN EN EL ARBITRAJE

Diego Castillo

Estudiante de jurisprudencia de la universidad del Rosario

*Artículo enviado por un lector **arbitrio**

Se quiere demostrar que, tal y como está regulado, la figura del deber de información es amplia y no del todo precisa. Lo que podría afectar principios fundamentales del arbitraje como la celeridad e imparcialidad. Por lo que se traen a colación directrices de la IBA sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional que regulan de una manera mucho más precisa el deber de información de los árbitros.

El principio de imparcialidad, a primera vista, puede parecer sinónimo con el de la independencia. Lo cierto es que en materia arbitral son disímiles, aunque tienen un propósito común: **la neutralidad en el arbitraje**. La independencia es la ausencia de un vínculo entre el árbitro y cualquiera de las partes.

La imparcialidad que se refiere a que este “no esté predispuesto a favor o en contra de una de las partes, de manera que profiera su decisión con apego a la ley, a la equidad, a la moralidad y la rectitud” lo que hace que sea más subjetivo. (Franco, et al., 2018)

Es importante resaltar que el deber de información es fundamental para contribuir a que el arbitraje pueda realizarse de una manera imparcial e independiente, como bien lo menciona (Medina, 2019):

Este riesgo de conflicto de intereses puede mitigarse de manera considerable si se ejerce el debido examen de comprobación de antecedentes y análisis de las posibles conexiones entre el árbitro y las partes o sus abogados, previo al arbitraje. El deber de revelación es clave para mantener la ética arbitral pues constituye el mejor mecanismo para la observancia de la independencia e imparcialidad en un procedimiento arbitral. Se presenta actualmente como un verdadero principio fundamental del arbitraje y es corolario directo del principio de buena fe.

El deber de información en Colombia contrasta con el ámbito internacional, en el cual solamente aplica a los árbitros por ser ellos quienes tienen funciones jurisdiccionales. Distinto a lo mencionado en el artículo anterior que cubre también a los secretarios, los cuales juegan un papel importante en el desarrollo del proceso arbitral, pero sus funciones son instrumentales y no jurisdiccionales, por ende, puede llegar a ser cuestionable el deber de información a los secretarios. (Bernal Mesa, s. f.)

Análisis del artículo 15 de la Ley 1563

¿Qué interpretación puede dársele a la expresión trámites administrativos?

conjunto de requisitos, pasos o acciones, regulados por el estado dentro de un procedimiento administrativo misional que deben efectuar los ciudadanos ante una institución de la administración pública, o particular que ejerce funciones administrativas, para hacer efectivo un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley, cuyo resultado es un producto o servicio. (Función Pública, s. f.)

La anterior definición es muy general y ambigua. En Colombia existen un sin número de trámites administrativos, que hace que para un árbitro resulte difícil llegar a conocer de todos los trámites que han llevado al cabo en 2 años.

Al referirse a “cualquier otro asunto profesional” en el que él o algún miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de los dos últimos años. ¿Resulta viable trasladar al árbitro la

responsabilidad, no sólo de informar de sus propios trámites, sino también de los que conozcan los colegas de su oficina? ¿Podría aplicarse este requisito, máxime, si se presenta un flujo constante de los abogados litigantes?

Esta situación es aún más compleja frente a la expresión que “haya pertenecido”, pues un árbitro en 2 años puede haber pasado por distintas oficinas de abogados, siendo supremamente difícil para el árbitro saber cuándo algún miembro de una oficina anterior actuó como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia.

Otra dificultad de dicho artículo es el término de 2 años, pues ¿qué pasaría si el árbitro fue abogado de una de las partes, pero hace 3 años? ¿seguiría existiendo el deber de información? o ¿deja de existir al no estar dentro del término? Al tener una relación muy cercana en el ámbito laboral, puede llegar a afectar la imparcialidad del árbitro, pero no está cobijado por el término de 2 años, ¿se deberá hacer primar la norma en su sentido literal o el principio de la imparcialidad?

Así mismo, indica que deberá informar cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus apoderados, sin mencionar un límite de tiempo.

La imparcialidad que se refiere a que este “no esté predispuesto a favor o en contra de una de las partes, de manera que profiera su decisión con apego a la ley, a la equidad, a la moralidad y la rectitud” lo que hace que sea más subjetivo. (Franco, et al., 2018)

Las relaciones sociales y el lobby ¿cómo comprenderlas frente al deber de información?

Las exigencias para ser árbitro en Colombia, implican una amplia trayectoria y experiencia. Las preguntas que surgen frente a las relaciones personales son: ¿Cuáles de éstas son objeto de revelación por parte del árbitro a las partes? ¿Cuál es el alcance de esta obligación? Lo que puede abarcar ser egresado del mismo colegio o universidad, hacer parte del mismo club social, asistir a la misma iglesia, parroquia u organización religiosa, practicar, eventualmente, deportes de equipo o parejas, como fútbol, golf, ciclismo o tenis en los que los árbitros coincidan con las partes o sus apoderados, ser padres de familia de niños del mismo colegio o estudiantes de la misma universidad y asistir al mismo gimnasio.

La Ley, sin embargo, no hace mención a las relaciones de carácter económico que sí podrían incidir en la transparencia del árbitro, como lo es ser (o haber sido) socio o accionista de sociedades en las cuales también tengan tal carácter las partes y sus apoderados, obtener o haber obtenido salario u honorarios de ellos, ser (o haber sido)



proveedor o contratista de ellos y, por último estar en negociaciones para suscribir un contrato de naturaleza comercial, laboral, administrativa o civil. (Bernal Mesa, s. f.)

La expresión “dudas justificadas”, presentada en el contexto en el que las partes se les da un término de 5 días para manifestar por escrito las inquietudes sobre la imparcialidad o independencia del árbitro, es traída de la legislación foránea, propiamente de la redacción anglosajona y traslapada a nuestro contexto no resulta del todo clara.

Lo que busca es abarcar todas las posibles situaciones en las que el juicio del árbitro se pueda ver afectado y, como consecuencia, pierda o descuide los principios orientadores de independencia e imparcialidad.

El deber de información en Colombia contrasta con el ámbito internacional, en el cual solamente aplica a los árbitros por ser ellos quienes tienen funciones jurisdiccionales. Distinto a lo mencionado en el artículo anterior que cobija también a los secretarios, los cuales juegan un papel importante en el desarrollo del proceso arbitral, pero sus funciones son instrumentales y no jurisdiccionales, por ende, puede llegar a ser cuestionable el deber de información a los secretarios. (Bernal Mesa, s. f.)

Cierto es que esa expresión, sirve para evitar la elaboración de listas en las que sería imposible abarcar todas las situaciones. Pero se cae en el riesgo de la falta de especificidad normativa.

Una inadecuada interpretación de esta institución puede generar retardos, demoras y hasta fracasos de procesos arbitrales. Dado que se presta para que algunos apoderados, con base en argumentaciones débiles recusen a los árbitros nombrados por “dudas justificadas” haciendo que estos sean reemplazados situación que termina por afectar uno de los fines de por qué se acude al arbitraje, el cual es la celeridad. (Bibiana Bernal Mesa, s. f.)

En este contexto resulta pertinente revisar las Directrices de la IBA sobre Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, para poder analizar cómo se rige el deber de información de los árbitros, que en últimas, es lo que permite garantizar la imparcialidad e independencia de los árbitros.

Las directrices de la IBA (International Bar Association) sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional nacen debido a la falta de uniformidad sobre las objeciones e impugnaciones de los árbitros. Se advirtieron tendencias que obstaculizaban los procedimientos arbitrales por las partes, que se servían de impugnaciones a árbitros para prolongar el arbitraje. Es por esto que, las directrices proporcionan tres listas codificadas por colores rojo, naranja y verde que orientan sobre las circunstancias que los árbitros deben revelar a las partes en relación con

posibles conflictos de intereses. Estos responden a la necesidad de establecer una conexión de hechos y circunstancias específicos que tengan que ser revelados o que justifiquen la recusación de un árbitro. (Medina, 2019)

El listado rojo irrenunciable

1) Existe una identidad entre una parte y el árbitro, o el árbitro es un representante legal o empleado de una entidad que es parte en el arbitraje.

2) El árbitro es un gerente, director o miembro del consejo de supervisión, o tiene una influencia de control sobre una de las partes o una entidad que tenga un interés económico directo en el laudo que se dictará en el arbitraje.

3) El árbitro tiene un interés financiero o personal significativo en una de las partes, o en el resultado del caso.

4) El árbitro o su bufete asesora regularmente a la parte, o a una filial de ésta, y el árbitro o su bufete obtiene de ello una importante retribución. (Medina, 2019)

El listado rojo renunciabile

En estos casos, se presume un conflicto de intereses y el árbitro debería ser, en principio, recusado; sin embargo, cabe que las partes renuncien a la recusación siempre y cuando, conociendo el conflicto de intereses, manifiesten de manera explícita su voluntad de que continúe la persona designada en su posición de árbitro. (Medina, 2019)

El listado naranja

Es el más extenso de entre los “Listados” abarcados por las Directrices IBA. Incluye circunstancias que pueden cuestionar la independencia e imparcialidad del árbitro y por ello, los árbitros deben revelarlas. Son veintiséis supuestos, recogidos en cinco apartados:

- (i) servicios profesionales prestados a una de las partes con anterioridad al arbitraje u otro tipo de intervención en el caso;
- (ii) servicios profesionales prestados a una de las partes en la actualidad;
- (iii) relación entre un árbitro y otro árbitro o un abogado;
- (iv) relación entre el árbitro y una de las partes y demás personas que intervienen en el arbitraje;
- (v) otras circunstancias.

El hecho de que el árbitro revele determinadas circunstancias no implica necesariamente que exista un conflicto de intereses susceptible de recusar al árbitro, sino que se deberá llevar a cabo el análisis correspondiente que estudie las circunstancias concretas. (Medina, 2019)

El listado verde

No es exhaustivo, contiene situaciones en las que se presume que no hay una falta de independencia ni de imparcialidad, por lo que no es necesario el deber de información.

Son diez las circunstancias incluidas en el y están recogidas en cuatro grupos:

- i) Dictámenes anteriores al arbitraje
- ii) Servicios profesionales prestados en la actualidad a una de las partes
- iii) Contactos con otro árbitro o con el abogado de una de las partes
- iv) Contactos entre un árbitro y una de las partes. (Medina, 2019)

Las directrices IBA pueden servir como un parámetro para analizar la diferencia entre regular el deber información de una manera amplia como lo tenemos actualmente en Colombia o regularlo de una manera más precisa. Es bueno poner de presente que si se regula de una manera amplia puede atentar contra uno de los principios más llamativos del arbitraje: la celeridad. Pues el que tenemos en el artículo

15 de la 1563 de 2012 puede resultar ambiguo e impreciso al regular dicho deber de una manera demasiado amplia por las razones que se expuso anteriormente, por otro lado, las directrices IBA lo hacen de una manera muy específica, pero no quiere decir que solo esas situaciones serán objeto del deber de información, pues al no ser exhaustivo permite que puedan abarcar otras situaciones que puedan afectar la imparcialidad del árbitro.

La Ley, sin embargo, no hace mención a las relaciones de carácter económico que sí podrían incidir en la transparencia del árbitro, como lo es ser (o haber sido) socio o accionista de sociedades en las cuales también tengan tal carácter las partes y sus apoderados, obtener o haber obtenido salario u honorarios de ellos, ser (o haber sido) proveedor o contratista de ellos y, por ultimo estar en negociaciones para suscribir un contrato de naturaleza comercial, laboral, administrativa o civil. (Bernal Mesa, s. f.)

BIBLIOGRAFÍA

- Bibiana Bernal Mesa. (s. f.). EL DEBER DE INFORMACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y SECRETARIOS EN COLOMBIA DESPUÉS DE LA LEY 1563 DE 2012 [Universidad Pontificia Bolivariana]. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2624/Trabajo%20de%20Grado%20Bibiana%20Bernal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- LEY 1563 2012, (2012) (CONGRESO DE LA REPÚBLICA). http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
- Crístian Salcedo Franco, Natalia Galvis Yandar, Santiago Fajardo Peña, & María Paula Herrera Duque. (2018). LA IMPARCIALIDAD Y LA INDEPENDENCIA EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL. 2018. <http://www.colvyap.com/2018/06/la-imparcialidad-y-la-independencia-en.html>
- Función Pública. (s. f.). Glosario. Recuperado 22 de mayo de 2021, de <https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Tr%C3%A1mite>
- Medina, B. M. (2019). DIRECTRICES IBA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES EN ARBITRAJE INTERNACIONAL. 2019, 60.

REENCONTRÉMONOS FORO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DIALOGARÁN SOBRE LOS RETOS, OPORTUNIDADES Y PRÁCTICAS PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS DEL ARBITRAJE Y LA CONCILIACIÓN.

Fecha: 10 de noviembre

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Sede y Centro Empresarial Chapinero y vía Zoom.

INSCRIPCIONES [AQUÍ](#)





VENTANILLA DEL LECTOR

Este es un espacio destinado a todos los lectores de Arbitrio. Los invitamos a participar de forma activa, desde una postura académica, con sus opiniones, comentarios y observaciones respetuosas sobre los contenidos de la revista.

Envíenos su texto al correo electrónico angela.villate@ccb.org.co

La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será permanente*.

**La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación*

arbitrio

centroarbitrajeconciliacion.com

**PRÓXIMO NÚMERO
ABRIL 2022**